



Cuadernos de
Investigación

60

APUNTES DEL MUNDO RURAL BOLIVIANO

Leila Cortez - Eduardo Mendoza
(Editores)



APUNTES DEL MUNDO RURAL BOLIVIANO

Leila Cortéz - Eduardo Mendoza
(Editores)



Cortéz, Leila, comp.
Apuntes del mundo rural boliviano / Compiladores, Leila Cortéz, Eduardo Mendoza.-
Santa Cruz: CIPCA, 2004.
210 p.: ilus. - (Cuadernos de Investigación; 60)

ISBN 99905-815-7
D.L. 8-1-1011-04

economía campesina / producción agropecuaria / comunidades indígenas / población indígena / mujeres indígenas / participación de la mujer / sindicalismo / recursos naturales / tenencia de la tierra / tierras comunales / movimientos indígenas / conflictos sociales / organizaciones campesinas / organizaciones indígenas / L. Mendoza, Eduardo, comp. II. CIPCA, ed. III. serie

307.72 / C828t

- Apoyo: NOVIB (Holanda)
EED (Alemania)
Manos Unidas (España)
FOS (Bélgica)
- Edición general: Leila Cortéz y Eduardo Mendoza
Colaborador: Ricardo Ontiveros
- Primera edición: Noviembre 2004
- CIPCA General: Pasaje Pahiani # 2578
Av. 20 de Octubre entre Campos y Pinilla
Telf. (591-2) 2432272
Fax: (591-2) 2432269
E-mail: cipca@cipca.org.bo
Página Web: www.cipca.org.bo
La Paz, Bolivia
- CIPCA Santa Cruz: Av. 26 de Febrero # 652
Tel. (591-3) 352-1884
Fax: (591-3) 3532338
E-mail: santacruz@cipca.org.bo
Santa Cruz, Bolivia
- Diseño y producción: EKO'S Comunicación Social
Tel. 360-3659 - 716-86519 - Santa Cruz
E-mail: fronterachaco@hotmail.com
- Impresión: Imagen Gráfica
Núfio de Chávez 463 Tel. 3372076
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Presentación

El mundo campesino indígena es todavía desconocido para gran parte de los bolivianos. Evidentemente hay valiosísimas investigaciones sociológicas, antropológicas e históricas que contribuyen al conocimiento de las sociedades campesinas indígenas. No obstante, la cotidianidad de los hombres y las mujeres campesinos indígenas es aún menos visible: cómo trabajan, cómo producen, cómo se desenvuelven en la vida comunitaria, sus relaciones con el mercado y con el entorno social, sus organizaciones, propuestas y movilizaciones, constituye para muchos algo ignoto.

La serie de notas y entrevistas que recopilamos en este libro reflejan parte del cotidiano camino andado por campesinos indígenas y CIPCA en los últimos tres años (2001-2003), en diferentes ecosistemas, contextos y circunstancias propios de las áreas de cobertura del trabajo institucional. En este sentido conforma una aproximación representativa al conocimiento de la rica diversidad del mundo rural boliviano. Para ello, hemos clasificado los temas en tres ejes: economía y producción campesina e indígena, tierra y territorio, y organizaciones campesinas e indígenas. Posteriormente conoceremos el pensamiento de algunos (as) dirigentes y al final les presentamos un reportaje para conmemorar la IV marcha por la soberanía popular, los recursos naturales y tierra y territorio.

Las notas provienen de diversas fuentes de CIPCA: Memorias- Informes Anuales, boletines electrónicos como Econotas y Agronotas, artículos difundidos en la Web Ondas Libres y entrevistas realizadas por el programa radial Tierra y Democracia. En realidad se trata de una obra colectiva en la que han intervenido mujeres y hombres -con diversa formación profesional: agronomía, economía, sociología, comunicación social, etc.- que desempeñan su trabajo en diferentes regiones del país. A todos ellos el agradecimiento y la motivación para que continúen aportando al conocimiento de los procesos que emergen en el mundo rural boliviano.

Eduardo Mendoza F.
CIPCA Santa Cruz

Índice

Economía y producción campesina indígena	7
Tierra - Territorio, sigue siendo prioridad	73
Organizaciones campesinas e indígenas, logros y dificultades	107
Conversando con líderes campesinos(as) indígenas	151
IV Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales	189

Glosario de siglas

ALCA	Área de Libre Comercio de Las Américas
APDH	Asamblea Permanente de Derechos Humanos
AFL	Asociación de Productores de Leche
APLEG	Asociación de Productores de Leche de Guaqui
CAO	Cámara Agropecuaria del Oriente
CCCH	Consejo de Capitanes Guaranes de Chuquisaca
CEJIS	Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
CGIAB	Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia
CODEL	Comisión de Desarrollo Económico Local
CONAMAQ	Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quollasuyo
CONFEAGARO	Confederación Nacional Agropecuaria
ENDAR	Estrategia Nacional de Desarrollo Rural y Agropecuario
ESA	Encuentro Social Alternativo
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación
FEDELPAZ	Federación de Lecheros de La Paz
FEGABENI	Federación de Ganaderos del Beni
FES	Función Económica Social
FHI	Food for de Hungry International
HOYAM	Hoya Amazónica
INDEPO	Instituto de Desenvolvimiento Poblacional
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
OMC	Organización Mundial del Comercio
OC	Organizaciones Campesinas
OC/OI	Organizaciones Campesinas e Indígenas
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PIB	Producto Interno Bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Programa Operativo Anual
PRASBENI	Proyecto de Agua y Saneamiento en el departamento del Beni
PRODEMO	Promoción de Mojos
PROSUKO	Programa Interinstitucional de Suka Kollok
SAFCO	Ley de Administración y Control Gubernamentales
TCO	Tierra Comunitaria de Origen
TIM	Territorio Indígena Multiétnico
TIMI	Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano
UDAPSO	Unidad de Análisis de Políticas Sociales
UAGRM	Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
VPB	Valor Bruto de la Producción

ECONOMÍA y producción
CAMPESINA INDÍGENA



Agroecología, un nuevo horizonte para los guaraníes

Rosmery Caballero y Juan C. Gutiérrez
CIPCA Condellina



Hombres y mujeres guaraníes ahora trabajan en su propio chaco y mejoran su producción en base a la agroecología.
(Foto: Mauro Hartack)

Agrorelato de una pareja guaraní del Chaco chuquisaqueño:

"Este año ha sido muy difícil para nosotros debido a la sequía. Mis charchos se han enfermado, mis gallinas de un día para otro se murieron y la escasez de alimento empeoró

la situación de nuestra familia. En agosto, mes de la fiesta de la Comunidad, al ver el troje casi vacío sentimos mucha tristeza.

Un día muy temprano, mi esposo me dijo: me voy a trabajar a la hacienda; le contesté, cómo te vas a ir tan lejos a trabajar, si te pagan 10 Bs el jornal, además tenemos que

preparar el chaco para sembrar de nuevo. No te olvides que en la Asamblea acordamos que no aceptaremos ningún trabajo por menos de 20 Bs. No me contestó y se fue.

Pasaron varios días y mis hijos esperaban a su padre pensando que les traería algo. Varias semanas después llegó con 4 arrobas de maíz, dos latas de un químico llamado "randall" y 10 Bs. Parecía un poco amargado cuando dijo: es todo lo que me han pagado por mi trabajo, el maíz me han vendido a 50 Bs la arroba, el veneno y la coca también es parte del pago; entonces le pregunté ¿esas latas para qué sirven?, él contestó, es para matar la maleza de los cultivos y no carpiis, de esa manera trabajo menos en el chaco.

El maíz que trajo solamente alcanzaría para dos semanas. "Tenemos que sembrar nuestro chaco y no quemamos todavía el rastrojo. Mi marido me contestó: quemaré el rastrojo y sembraré sólo maíz, es lo mejor, esto lo aprendí de mi patrón; no voy a hacer lo de mi compadre, trabaja tanto para sembrar de todo y cosecha lo mismo".

Un día mi hermano, que vive en Cañadillas, nos invitó a su casa. Mi cuñada había preparado chicha, cocinó carne de oveja con papa, frejol, kumanda, choclo y toda clase de verduras. Comimos todos asombrados de ver tantos colores en la comida, el verde de la lechuga, el rojo del tomate, el naranja de la zanahoria, el blanco de la gordura de la carne. Mi esposo impresionado, preguntó ¿estás trabajando en alguna empresa y ganando bien para comprar tanta comida?. Mi hermano sonrió y le contestó: como soy un guaraní libre busco otras formas de producción que me ayuden a tener alimento para todo el año,

sin arruinar mucho la tierra del chaco.

Al día siguiente fuimos a su chaco y nos explicó: "aquí está el maíz asociado con kumanda, joco y zapallo; en este lado el arroz y el maní, aquí la papa, para este lado la yuca y el camote, a los costados he puesto plátano y caña, además sirven para que no se lave la tierra, la fertilidad se mantenga y no avance la erosión; miren aquí tengo cítricos, éste es nuestro huertillo donde plantamos todas las verduras que necesitamos y lo que sobra vendemos en Monteagudo. Con muchas dudas preguntamos ¿debes usar muchos químicos? No, respondió, solamente dejamos el rastrojo sin quemar, hacemos rotación de cultivos para no cansar a la tierra. ¿Qué es eso? preguntamos. Rotación quiere decir que en el lugar donde sembramos maíz al año siguiente sembraremos maní y así sucesivamente. Después nos mostró el potrero de las ovejas, los pastos que habían sembrado para su alimentación y dijo que el manejo y control sanitario lo hacen en grupo, pero que cada familia era dueña de 5 ovejas. De vuelta a la comunidad hablamos que sería bueno trabajar como lo hace mi hermano para no sufrir cada año la escasez de alimentos para nuestra familia.

El relato nos muestra que la dependencia del trabajo de la hacienda, el fácil acceso a los agroquímicos y la falta de seguridad para encarar prácticas de conservación, dificultan el proceso de implementación de la propuesta agroecológica, además de ser un proceso lento en el cual los resultados no se pueden percibir en el corto plazo. Sin embargo, experiencias positivas alientan a seguir adelante.

La Pachamama ahora está más protegida que nunca

Silvia Aquilar • CIPCA La Paz



Comunidades del Altiplano aplican prácticas agroecológicas.

(Foto: CIPCA La Paz)

La agroecología ha surgido como un enfoque más sensible a las complejidades de las agriculturas locales, porque abarca criterios de sostenibilidad, equidad, seguridad alimentaria, conservación de los recursos naturales, junto con una mejor producción.

Las prácticas agroecológicas se concentran, primero en mejorar y proteger los suelos, con

el objetivo claro de mejorar los cultivos y cuidar lo más preciado que tiene la familia campesina, su tierra, que es la base de su sistema productivo. Se comienza en pequeño, con el trabajo y compromiso conjunto de técnicos, agricultores y agricultoras.

En ese marco, CIPCA implementó este enfoque en el municipio de Ayo Ayo, con un

proyecto de acompañamiento iniciado en 1998 y que concluyó en 2003. Las primeras familias hoy muestran avances y mejoras en sus sistemas de producción, partiendo desde el manejo y conservación de suelos. Ya cuentan con un poco más de forrajes, están mejorando la semilla de papa y empezando a manejar y criar cuyes, además de mejorar sus corrales. Están produciendo y diversificando sus cultivos, combinando con la producción de hortalizas. Cuentan con riego más adecuado y están produciendo sus propios abonos y productos para combatir plagas y enfermedades. Ahora ya son 81 familias de 5 comunidades. Todas ellas valoran sus propios recursos locales y están conscientes que su uso adecuado mejora la producción y calidad de sus productos agrícolas y pecuarios.

Siguió el municipio de Guaqui, donde las inquietudes de las familias han sido mayores de lo que se esperaba. De 29 familias planificadas se ha trabajado con 37 en 7 comunidades. Éstas han desarrollado trabajos de manejo y conservación de suelos a través de zanjas de infiltración, construcción y reconstrucción de terrazas, barreras vivas en los bordes de las zanjas para estabilizar taludes, cultivo en composturas y cultivo de hortalizas en huertos familiares. Paralelamente, han realizado prácticas de fertilidad de suelos, con la preparación y aplicación de abonos orgánicos, donde el estiércol es un elemento que se recicla en el sistema. Con algunas familias se ha trabajado con prácticas de control integrado de plagas, aplicando insecticidas orgánicos en base a hierbas de la flora nativa, acondicionando el almacén de papa con trampas para insectos, colocando trampas de nylon en las parcelas, sembrando *tarwi* como barreras para insectos

como el *tripo* y el pulgón en las orillas de los cultivos, sembrando papa en asociación con *tarwi*, cazando insectos adultos y removiendo el suelo para impedir que la plaga complete su ciclo de vida.

Todo ello ha supuesto reforzar las prácticas y compartir conocimientos con la comunidad, mediante talleres teórico-prácticos en los que han participado 272 varones y 122 mujeres. La capacitación se ha realizado en parcelas, objetivamente, y también en aula utilizando videos, diapositivas, papelógrafos y ejemplares de plagas.

Posteriormente, la experiencia ha llegado a tres cantones del municipio de Ancoraimos. Como se trataba del primer año, el equipo local de CIPCA visitó las comunidades para motivar hacia la nueva propuesta. Al principio las familias dudaron, pero durante el desarrollo de las actividades entendieron que esta propuesta agroecológica es una alternativa muy asequible frente a la erosión de suelos, la contaminación del agua, el aire, pues sólo requiere el uso de insumos locales. La respuesta ha sido mayor que en los otros lugares.

Durante el año 2001, 130 familias de 13 comunidades iniciaron prácticas de manejo sostenible, semejantes a las ya mencionadas y otras más, como la elaboración de caldos minerales orgánicos para mejorar la nutrición de las plantas, el control de plagas y enfermedades y la disminución del gusano blanco de la papa a través del integrado del gorgojo de los Andes. Se ha introducido la producción orgánica de papa en 5,57 hectáreas con 98 familias, el cultivo de alfalfa en 9,12 hectáreas con 107 familias y se han realizado campañas de sanidad animal con las 3.639 cabezas de ganado de 127 familias.

Ganadería vs. biodiversidad y ecología

Fátima Zelada • CIPCA Beni

En agosto arden las praderas, se incrementan las afecciones respiratorias, la visibilidad disminuye en el pueblo de San Ignacio de Mojos casi hasta el punto cero, se cocinan los huevos de piyo, mueren las serpientes, las hormigas, los mosquitos y la vida al ras del suelo... hasta que en noviembre vuelven a reverdecer.

Ese, es el ciclo que marca un fin y un inicio de la ganadería extensiva en el Beni... y las páginas del Internet hablan de una relación positiva entre la ganadería beniana, la ecología y biodiversidad.

Mucha apología se ha hecho sobre el sistema de producción extensivo de la ganadería en el Beni calificándolo de ecológico en comparación con otros sistemas, al considerar que permite el mejoramiento del suelo y donde las estancias ganaderas se convierten en refugios de vida silvestre, según los ganaderos.

Al respecto cabe mencionar que en el Beni, los conceptos de biodiversidad, ecología y ganadería sencillamente no van de la mano, puesto que la quema de más de 100.000 ha. de pradera por la ganadería en Mojos, comparados con un poco menos de 2.000 ha. de los agricultores indígenas marcan las diferencias entre un sistema de

producción y otro.

Las lluvias de diciembre, enero y febrero trasladan las cenizas a los ríos con lo que se aumenta los efectos indirectos de la quema de pastizales con las consecuencias mortales para la fauna y flora de la región. Frente a esta realidad, urge la necesidad de plantearnos si las acciones que hacen hincapié en el enfoque agroecológico con apenas 200 ha. son suficientes para hacer cambios en una región donde se superpone otro sistema de explotación con todos los cuestionamientos técnicoambientales e incluso éticos.

¿No será que debemos iniciar un proceso integral que permita revisar las actuales técnicas de manejo y explotación de los recursos naturales, que utilizan otros sistemas como la ganadería, que no hacen más que dañar la naturaleza aludiendo a mayores índices de producción o empleo?

¿Cuáles son los roles y las acciones que deben realizar las instancias creadas por Ley como la Superintendencia Forestal y Agraria; las autoridades nacionales competentes como las direcciones de biodiversidad, medio ambiente y otras, frente a este falso paradigma de que la ganadería extensiva es igual a conservación?

Los conceptos de biodiversidad y ecología no van de la mano con la ganadería extensiva. Ésta quemó 100.000 ha. de pradera en Mojos y los agricultores indígenas sólo 2.000. Esas son las diferencias entre un sistema de producción y otro.

“Conservar el Amor”

Rolando Cuéllar • CIPCA SANTA CRUZ

Amanda Méndez, comunaria de Rincón de Palometas, trabajadora incansable del campo, emprendedora de proyectos novedosos, líder en su comunidad, da el ejemplo y promueve nuevas formas de producir la tierra conservando los recursos naturales. Expresa lo que hace, de una forma muy natural y particular, poniendo mucho sentimiento y enorme convicción, porque es parte de su vida y de su manera de trabajar.

CONSERVAR EL AMOR

(Amanda Méndez)

*Por amor a mi patria y a la salud
plantas frutales voy a sembrar
para que dé hoja, fruto y flor
el color de nuestra bandera
se vaya a reemplazar.
Nosotras las campesinas
cuando nos sentimos ya cansadas
a una sombra nos tenemos que acercar
para tomar el aire fresco y puro
y poder recuperar.
Por eso tenemos que tomar en cuenta
que el oxígeno se nos va amontonar
y a cambio el calor nos va a llegar
que nos puede eliminar.*

*Por eso es que a nuestra tierra
amor de madre le debemos dar
en vez de desnudarla
la tenemos que abrigar.
Porque en ella conservamos
tanto animal como agroforestal
para podernos alimentar
lo más seguro que tenemos es
que pobres y ricos
en ella nos vamos a terminar.
A los técnicos capacitadores
les voy a recomendar
que tan pronto no nos vayan a abandonar
que apoyando al indio campesino
también lograrán de trabajar*

Así se expresa la señora Amanda, declamando, lo hizo en varias ocasiones: en el Encuentro de Productores de Santa Rosa, en el acto de clausura del curso sobre agroforestería y cuando formó en su comunidad un grupo de mujeres para establecer sistemas agroforestales. Tiene un vivero agroforestal en el que produce plantines frutales y forestales con los que ha enriquecido 5 hectáreas de bosque; también produce plantines para vender; ha egresado del curso agroforestal de la Escuela de Capacitación Campesina Indígena (ECCAI) y colabora de cerca al grupo de mujeres que tienen sistemas agroforestales en su comunidad.

Arroz "Mojeño", la historia y el desarrollo de un pueblo

GERMÁN HUANCA • CIPCA Beni



Mujer indígena de San José del Caviru, en una tarea habitual.
(Foto: Israel Guzmán)

Si usted visita Mojos o está de paso hacia San Borja en un viaje de turismo, es un hecho que buscará saborear la comida típica regional y, con seguridad, lo primero que le invitarán a deleitar será el tradicional majadito o le ofrecerán charque con arroz o chuletas, también con arroz. Y si desea desayunar por la mañana o tomar una siesta por la tarde, seguro que le acompañarán con un delicioso pan de arroz.

Tampoco se extrañe si al recorrer por las calles de la población, escucha una canción del lugar con estrofas enteras dedicadas al arroz. Es que toda esta tradición se debe a que la historia del arroz en Mojos, se escribió con la misma historia de Mojos.

Es cierto que la colonización trajo consigo -entre sus cosas buenas-, el cultivo del arroz, pero hay que relieves también que a cambio se llevó riquezas de mayor valor.

Según el padre Altamirano, párroco de la población, este producto fue introducido al mercado local por los misioneros jesuitas, en 1699 y desde aquella vez a la fecha, no existe una sola familia que no consuma arroz, porque se ha constituido en el principal alimento de la culinaria regional y a su vez, en el sostén de la economía local, merced a la exuberante producción.

En virtud a ello y por la importancia cultural y económica que significa para Mojos, en 1997 el CIPCA Beni estableció un equipo de técnicos en la zona, con el fin de investigar las variedades del arroz e impulsar un mejor y mayor rendimiento. Después de haber realizado los estudios, prácticas y procesos de capacitación sobre las nuevas técnicas de siembra, PRODEMO procedió a la compra de semilla certificada de arroz en Santa Cruz, de las variedades *grano de oro* y *jasajé*, cuyos resultados fueron óptimos por el nivel de acopio alcanzado, especialmente en la gestión 2001.

Los 196.420 kilos de arroz en chala acopiado en esa gestión, fue para PRODEMO una cifra récord, porque no estaba en sus cálculos alcanzar una buena producción. Sin incremento en el capital de operaciones y con mucho entusiasmo, se sobrepasó la meta estimada. El resultado se debió al tesón y a la voluntad de todas las familias indígenas de la zona, quienes decidieron incrementar sus ingresos, tras aceptar la inserción de nuevas variedades de arroz y aprender las técnicas del cultivo para mejorar la producción.

Como corolario del esfuerzo conjunto, el producto fue lanzado al mercado de consumo con la marca *Mojos*, gracias a acciones conjun-

tas de mercadeo que están permitiendo su comercialización exitosa.

Haciendo un análisis del acopio obtenido en 2001, es bueno señalar que en San Ignacio de Mojos existen 9.064 habitantes (según el Censo 2001) y el acopio por habitante fue de 22 kilos de arroz en chala o 18 kilos sin cáscara o pelado. Esa cifra nos indica la importancia de la producción local en el consumo regional.

En los cálculos reales, cabe señalar que si cada habitante consume entre 0,5 y 1 kilo por semana, el abastecimiento de arroz realizado por los productores indígenas cubrió entre 18 y 36 semanas; lo que significa que en la gestión 2001 la producción local abasteció en un 51% al consumo total del pueblo de San Ignacio. El saldo se trajo de Santa Cruz, Palos Blancos o Trinidad. En consecuencia, vale la pena resaltar que el aporte de la producción local es importante.

Si bien es cierto que a la fecha el precio del arroz no compensa del todo el esfuerzo de los productores, la producción continúa en alza y con buenos indicadores, aunque los pobladores de Mojos son conscientes que para el futuro, deben buscar alternativas como la producción del chocolate criollo, una nueva opción que puede dar buenos resultados a mediano y corto plazo.

Ganadería menor, el gran proyecto en familia

JORGE BENAVIDES • CIPCA NORTE



La cría de gallinas es una alternativa para el campo.

(Foto: CIPCA Norte)

En el 2001, CIPCA Norte promovió y apoyó la implementación de cuatro proyectos avícolas y otro tanto de ovinos de pelo, en ocho comunidades del municipio de Riberalta,

de los que se beneficiaron 63 y 66 familias, respectivamente.

Por respeto a la historia, la premisa fue trabajar con las mujeres, quienes se organizaron

en grupos comunitarios a la cabeza de promotores(as) de ganadería. Con ellas se consensuó desde el principio hasta el final, desde la delimitación y objetivos del proyecto, hasta el destino de las ganancias que provendrán de la venta de huevos, gallinas u ovejas en pie o faenada.

En la práctica, las mujeres asumieron la responsabilidad de la buena marcha de sus proyectos, compartiendo sus actividades con todos los integrantes de la familia. Los esposos apoyan en trabajos específicos, como la construcción de apriscos o gallineros, además de la siembra de granos y forrajes destinados a la alimentación de gallinas y ovejas. A su vez los niños y las niñas ayudan en actividades más livianas, como limpiar corrales, recoger huevos, dar alimento y agua a los animales y luego arrearlos al monte.

La producción y mejoramiento en la crianza de animales menores es parte de la propuesta institucional del CIPCA, para lograr que los sistemas productivos familiares sean sostenibles, incorporando componentes que diversifiquen la producción y garanticen ingresos provenientes de varias fuentes.

En ese sentido, la ganadería menor se constituye en complemento saludable al resto de las actividades productivas. Para cultivar granos y forrajes no se necesita desmontar ni cambiar el paisaje, se lo hace en espacios pequeños de barbecho o en los sujaes, reemplazando el *siyo* (hierba agresiva e invasora), por *mucuna*

o *andzú*, leguminosas de calidad excelente para la alimentación de animales y que favorecen al cultivo de arbustos como el *cucbí verde*, parte integrante de los sistemas.

Las gallinas, por su condición de omnívoras, se alimentan de gusanos, insectos y hasta de mosquitos que no sólo son molestosos, sino dañinos a la agricultura y a la salud humana.

Por otro lado, las ovejas por el crecimiento acelerado de los hatos, están motivando a las productoras a sembrar especies de arbustos comestibles. Aún en la reducida cantidad de sus hatos (crian entre 20 y 100 gallinas y de 2 a 8 ovejas por familia) el rubro de la ganadería menor, les está permitiendo ingresos monetarios rápidos, incentivando a la reproducción permanente y con buenos resultados a muy corto plazo.

Además, el uso de la mano de obra local y la poca dependencia de insumos externos, hacen que estos proyectos sean rentables y favorables para la economía campesina. Finalmente, el carácter gregario de las ovejas y el manejo dócil de las gallinas, alimentan el espíritu progresista de las mujeres, quienes hoy en día son protagonistas en la ejecución de proyectos que se han convertido en el sostén de su propia economía.

Tales constataciones las obtuvimos de los testimonios de las señoras Carmen Rosa y Rosy, en la comunidad de Santa María, provincia Vaca Díez.

Producción integral para las familias guarayas

Adrián Cruz • CIPCA SANTA CRUZ



Mujeres guarayas a cargo de la cría de ovejas de pelo.

(Foto: Adrián Cruz)

A raíz de los incendios de bosques, plantaciones de yuca, plátano y depósitos de granos en las comunidades guarayas del municipio de Urubichá, ocurridos en 1999, CIPCA, otras instituciones y las organizaciones indígenas decidieron apoyar a los afectados en la recuperación de su agricultura con un enfoque de desarrollo integral y sostenible.

Para ello, las comunidades afectadas habili-

taron nuevos campos de producción en los que establecieron cultivos anuales como yuca, maní y arroz y multianuales como plátano. El primer paso fue la capacitación de los líderes guarayos en diversas actividades productivas, quienes adecuaron ciertas innovaciones tecnológicas, enmarcadas en una agricultura sostenible, a sus sistemas de producción propios.

En el proceso, la participación de las muje-

res en las actividades productivas fue decisiva. En el año 2000 ellas implementaron dos proyectos: el de gallinas ponedoras y el de ovejas de pelo. Ambos significaron un importante desafío frente al resultado de otras malas experiencias anteriores, sobre todo en Ascensión de Guarayos, donde las mujeres acabaron vendiendo las gallinas debido a que los maridos no tenían un chaco donde cultivar después del incendio de 1999. "Las gallinas no van a llegar a poner huevos ni las ovejas a tener crías: los guarayos se las van a comer o las venderán", sostenían escépticos el párroco y los miembros del Concejo Municipal de Urubichá, al inicio del proyecto.

Sin embargo, esta vez las mujeres demostraron al pueblo guarayo que las gallinas y las ovejas son una alternativa más de ingresos económicos y contribuyen a mejorar la alimentación familiar. Este hecho ha permitido que las mujeres consigan mayor participación en la planificación y toma de decisiones de lo que la familia tiene que sembrar en su chaco. Otro acontecimiento que vale la pena citar, es el apoyo y participación de las mujeres en el establecimiento de sistemas agroforestales, planes de aprovechamiento forestal y manejo de ganado vacuno.

Pronto las familias guarayas comenzaron a consumir los productos de las parcelas demostrativas de sistemas agroforestales: papaya hawaiana (especialmente apetecida por los niños), el maracuyá (consumido como fruta fresca, refrescos y licores) y el camote (consumido en sopa y sancochado al horno). Ahora esperan la producción de limones, mandarinas y naranjas cultivadas en asociación con piña (japonesa

y guaraya).

Esta experiencia motivadora posibilitó que los guarayos de Urubichá, en el año 2001, establecieran 65 parcelas con sistemas agroforestales en las comunidades de Urubichá, Yaguarú y Salvatierra.

Además se capacitaron para el manejo de ganado bovino. Esto último tiene incidencia en la demanda de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), pues tradicionalmente los guarayos no manejaron ganado mayor y el Estudio de Necesidades Espaciales, elaborado por instancias gubernamentales para respaldar la demanda de TCO, no consideraba tierras para esta actividad productiva.

Por otra parte, existen ya tres planes de manejo forestal: Urubichá con 41.000 Ha, Salvatierra con 20.000 Ha y Cururú también con 20.000 Ha. Para este año se prevé ingresos por la venta de madera. Pero la administración de los planes de manejo forestal es todavía deficiente sobre todo en lo que respecta a la distribución de los beneficios.

Por último, para la gestión 2002, las organizaciones guarayas de Urubichá han sistematizado las iniciativas y demandas productivas de las comunidades, las cuales se han acrecentado debido a los resultados positivos observados en los sistemas agrarios.

Es corto el camino recorrido aún, pero los resultados logrados hasta la fecha demuestran que las comunidades guarayas, cada vez están perfeccionando sus técnicas de trabajo, mejorando su dieta alimenticia y obteniendo ingresos adicionales que les permiten aliviar los efectos de la crisis.

Cría de peces, una excelente alternativa en el Beni

Pablo VAN LINDEN • CIPCA Beni



Comunarios de Montegrande en la provincia de Mojos adecuaron un estanque para la cría de peces. (Foto: CIPCA Beni)

¡Pacú, pacú, pacú, se vende pacú, a 12 Bs el kilo!... Esos gritos se escucharon por primera vez en San Ignacio de Mojos después de una experiencia piloto para la cría de peces en la comunidad de Montegrande. ¡Fue todo un éxito! Las cartas de solicitud para iniciar la cría de peces en otras comunidades fueron llegando de forma continua a las oficinas de

CIPCA-Beni y HOYAM.

Para poder realizar esta actividad en las comunidades se necesitan básicamente tres insumos: alimento, agua y estiércol o comúnmente llamado *sembrado*, que hay en abundancia por esta zona!

Las comunidades de Bermeo y Pátima fueron las primeras seleccionadas, ambas contaban

con lo esencial: un pozo o estanque cargado del líquido elemento, de suficiente tamaño construido por PRASBENI, dentro de un programa de sanidad básica, para que las familias tengan agua en época de sequía.

Después de un rotundo sí de unas 40 familias, en ambas comunidades se procedió a la implementación. Las familias se encargaron de limpiar el perímetro del pozo de agua. Este proceso fue absolutamente necesario, porque permitió eliminar animales peligrosos como víboras, especialmente anacondas, lagartos, caimanes, anguilas, ventones y pirañas, que podían ocasionar desgracias que lleven al fracaso del proyecto.

Con dos hombres dentro del pozo y dos fuera, se arrastró la malla de 25 m. de largo y 3 de ancho. Las demás personas, adultos y niños esperaban en la orilla. Algunos hombres estaban armados con rifles y palos (por si algún bicho peligroso se pudiera enojar) y los "peladingsos" esperaban con bolsas de yute, plástico o tela para poder "pescar" lo suficiente para el almuerzo. Ventones, pirañas, bogas y bucheres, entre otros, son las especies que hay en la poza. A pesar de la gran expectativa, en la primera pasada con malla sólo salieron algunos peces chicos que rápidamente fueron embolsados por los niños.

El caso fue diferente en la segunda pasada, cuando los hombres advertían que la malla se

sentía pesada y era difícil arrastrarla por el fondo... Hubo silencio, ¿qué trafa la malla? Nos preguntamos todos, un tronco o algo más espectacular? Se confirmó lo segundo, al llegar a la orilla en la malla habían dos lagartos de un metro cada uno, además de algunas anguilas y bucheres. ¡Qué horror! dijo Fátima, nuestra compañera veterinaria. Los niños alborotados querían acercarse para ver mejor, pero los papás se opusieron.

Para los que estaban armados era imposible disparar al lagarto, porque había mucha gente alrededor. Un palo de dos metros de largo y 25 cm de diámetro fue la solución. Luego se escucharon cuatro tiros y los dos reptiles pasaron a la historia como harina de carne para alimentar a los mismos peces.

Al cabo de dos semanas y después de haber capacitado a tres promotores en cada comunidad, se realizó la siembra de los alevines y luego se introdujo la cría del pacú como la principal especie y sábalo como una especie secundaria.

Luego de los resultados, esta actividad fue percibida como una alternativa viable para las familias indígenas de las comunidades de Mojos. Se ha constatado que la cría de peces no es una actividad depredadora, en todo caso se constituye en una fuente de proteínas para el autoconsumo y de ingresos financieros para los habitantes de toda la región.

La Castaña y sus contradicciones implícitas

Flora de María Robles • CIPCA NORTE



Vía de acceso a una de las zonas castañeras en el Norte amazónico.
(Fotografía CIPCA Norte)

La producción de castaña en el Norte amazónico genera un importante flujo de recursos cada año. El 2002, esta industria ha generado divisas por un monto aproximado a

los 32 millones de dólares, ocupando el segundo lugar en las exportaciones agroindustriales a nivel nacional, después de la soya. Además coloca a Bolivia en el primer lugar de las exportaciones en este rubro a nivel mundial. Si pensamos en un producto que genera una buena cantidad de divisas para el país, es natural preguntarse: ¿Cómo es posible lograr todo esto? ¿Qué actores intervienen en este proceso?

El circuito de la castaña involucra diferentes actores económicos: barraqueros, zafreros, comunarios, boteros, camioneros, intermediarios, contratistas, propietarios de beneficiadoras, quebradoras, ayudantes de quebradoras, trabajadores eventuales y personal administrativo de las beneficiadoras, cargadores, limpiadores, bancos y empresas exportadoras, pero el gran peso de la actividad recae en el sector campesino indígena y fabril.

Miles de zafreros, campesinos e indígenas se trasladan a las zonas de recolección de castaña por 3 meses, la mayoría lleva a toda su fami-

lia; por un lado es la mejor manera de procurarse sustento, pero sobre todo porque así es posible tener más fuerza de trabajo disponible y lograr un mayor ingreso.

La zafra de la castaña se realiza en barracas y en territorios de las comunidades; de las barracas proviene hasta un 60 % de la castaña recolectada, de las comunidades, de un 30 a 35 %, cubriéndose el resto con castaña proveniente de Brasil que es beneficiada en la región.

El trabajo de recolección de castaña consiste en internarse en el bosque, recoger los cocos (cada uno pesa un promedio de 1 kg.), abrirlos con la ayuda de un machete y extraer las pepas. La castaña así, es entregada en cajas de 23 a 24 kilos, para ello los zafreros recorren largos caminos llevando en la espalda hasta 80 kilos del producto para entregar en el *payof* (lugar de almacenamiento temporal).

El zafrero trabaja en la recolección un promedio de 14 horas diarias. Si hacemos un rápido cálculo, obtenemos que cada zafrero suma unos 150 jornales en cada campaña. Desde el bosque hasta las beneficiadoras, la castaña es transportada por río y carretera hasta llegar a una de las 20 plantas de procesamiento y empaque, para luego ser despachada a los distintos mercados de destino.

Zafreros y fabriles son contratados mediante "habilito", modalidad por la que el trabajador recibe un adelanto de su remuneración al firmar el contrato y éste consiste en bienes de consumo provenientes de la pulpería de la barraca o beneficiadora, productos que siempre están sobrevaluados. Durante el período de

trabajo, zafreros y quebradoras van sacando más productos de la pulpería y son cargados a sus cuentas de modo que, en algunos casos, al final del contrato quedan endeudados y deberán asumir el compromiso de trabajar el siguiente año para el mismo patrón y en otros casos los saldos son muy pequeños; en ocasiones, éstos no son cancelados.

Sin la participación de esos aproximadamente 8.000 campesinos y sus familias que cada año recogen la castaña del bosque amazónico y echan a su espalda el fruto delicioso, e igualmente, de las 6.500 quebradoras, no sería posible que nuestra castaña llegue a los supermercados de Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia.

Pese a su gran aporte, zafreros y quebradoras son los que menores beneficios obtienen de la explotación de la castaña; representan casi el 80 % de la fuerza laboral comprometida en todo el proceso y reciben sólo el 17 % del ingreso generado por la actividad, mientras un reducido grupo de 25 propietarios de beneficiadoras perciben el 25 %.

Esta economía de la castaña nos habla de notables contradicciones: por un lado, un producto consumido en mercados del mundo desarrollado, producido bajo condiciones arcaicas; y por otro lado, grandes grupos de zafreros, campesinos y fabriles extrayendo y procesando, año tras año, el segundo producto en valor de exportaciones agroindustriales a nivel nacional y que coloca a Bolivia en el primer lugar en el mundo, pero cada vez más pobres.

Riberalta ¿Cómo es su economía campesina?

Iván San Miguel • CIPCA Norte



La extracción de la castaña se combina con sistemas agroforestales en algunas comunidades de Riberalta. (Fotos: CIPCA Norte)

Usipales Inuma es una de las familias de la comunidad Siglo XX que trabaja con CIPCA desde el año 2000. Nuestro interés por conocer con más detalle su situación económica, nos ha llevado a realizar esta investigación en su

comunidad y en 7 de Julio y Carmen Alto, distantes a 18, 28 y 110 Km. de Riberalta, respectivamente. Con esa premisa, emprendimos ese desafío entre octubre y noviembre del 2002, en la perspectiva de contar con un diagnóstico

real de las familias de esa zona, tanto en lo social como en lo económico.

Los resultados del estudio nos indicaron que una familia en promedio tiene un ingreso familiar de 1.058 dólares/año y una persona en promedio tiene 202 dólares al año. Este ingreso, está compuesto por el aporte de los subsistemas agrícolas 33 %, pecuario 13 %, caza 12 %, pesca 11 %, forestal maderable 3 % y forestal no maderable 23 %; el resto de los ingresos percibe por la venta de su trabajo y otros. En cuanto a la producción, los resultados mostraron que el 41 % se destina al autoconsumo y el 59 % se lo comercializa en el mercado, entre productos del subsistema forestal no maderable, forestal y pecuario, en ese orden.

La principal fuente de ingresos monetarios de las familias campesinas en Riberalta, proviene de la producción agrícola, que aporta con un 33 % del Valor Bruto de Producción (VBP) y sus cultivos más importantes son: arroz, yuca, maíz y plátano. Le sigue el subsistema forestal no maderable con un 23 %, cuya principal actividad es la recolección de castaña, que aporta un 89 % al subsistema y el saldo se completa con la recolección de majo, leña y el motacú.

Es notorio que el ingreso en la economía de las familias campesinas de Riberalta provienen mayormente de los subsistemas agrícolas y forestales no maderables; ambos son de bajos insumos externos, la agricultura no

incorpora fertilizantes ni pesticidas químicos, las semillas provienen básicamente del mismo sistema, la fuerza de trabajo necesaria proviene de la familia. Los rendimientos son bajos debido a la escasa fertilidad del suelo y a los elevados costos de operación para producir. Sin embargo hay que resaltar que esta forma de producir les permite disponer de alimentos, cuando no cuentan con liquidez para comprarlos fuera del sistema.

Por otro lado, la economía de las familias campesinas depende en casi un 50 % de la actividad extractiva (caza, pesca, forestal maderable y no maderable), por lo que urge poner atención en una racional explotación de los recursos naturales. En este sentido, la implementación de sistemas agroforestales, que ya bordean las 700 hectáreas, se constituye en una gran alternativa respecto al uso racional de los recursos del bosque. La caza y pesca complementan bien y están destinadas básicamente a la alimentación familiar, por su importante contribución proteica a la dieta, y la crianza de animales se destina a la venta.

Con todo ello, las familias de esa región pueden alimentarse bien y gozar de una salud regular; sin embargo confrontan problemas de iliquidez para construir una vivienda estable, hacer estudiar a los hijos y mejorar la calidad de vida. Los sistemas agroforestales, apuntan a resolver los problemas señalados.

Estrategias diferenciadas de las familias campesinas

SUSANA MEJILLONES • CIPCA La Paz



Campeños de Anconimes diversifican sus sistemas productivos.

(Fotos CIPCA La Paz)

Llevar adelante la evaluación económica de los sistemas de producción familiar, constituyó una experiencia valiosa para profundizar el análisis de la economía campesina, en nuestras zonas de trabajo.

En el Municipio de Guaqui, se definió una muestra razonada, sobre la base de la zonificación por tipología de productores,

elaborada para el Ajuste del Plan de Desarrollo Municipal, en el que se definen cuatro tipos de productores: productor especializado, productor intensivo, productor intensivo no agrícola y productor extensivo.

Los criterios utilizados fueron tanto cuantitativos como cualitativos.

1) Participación de las familias productoras

según componente de trabajo agrícola, pecuario e hídrico.

2) Período de trabajo con la institución.

3) Grado de compromiso de la familia con la propuesta agroecológica.

Se complementó con otros parámetros: productores que trabajan con CIPCA, implementando o que están en proceso de implementar la propuesta agroecológica, y productores que no trabajan con CIPCA.

También, se verificó que la composición de los ingresos familiares campesinos varía por tipo de productor; en algunos casos el mayor peso está en la venta de mano de obra fuera de la parcela u otros ingresos como renta por jubilación; en otros casos el mayor peso proviene por ingresos agropecuarios.

En muchos estudios sobre economía campesina, se discute que en el Occidente habría una tendencia generalizada y muy nueva hacia ingresos por otras fuentes que no son agropecuarias; nosotros constatamos que esta realidad es evidente, pero depende en gran medida del tipo de productor y su racionalidad económica, no pudiendo generalizarse a todos los productores campesinos.

Lo cualitativo del proceso fue visitar cada familia y dialogar, más allá de llenar una encuesta. Muchos datos son información valiosa para verificar la hipótesis de que las familias campesinas ensayan diferentes estrategias de supervivencia. Con ellas se dibujó el croquis de su predio buscando entender la lógica de articulación entre sus diferentes subsistemas agrícola y pecuario, viendo que en muchos casos, uno de ellos funciona en beneficio o

dependencia del otro.

En sistemas de producción especializados como la lechería con ingresos por esta fuente, el subsistema agrícola prioriza en cultivos y tierra cultivada a rubros forrajeros como cebada, alfalfa, avena, intercalando con otros cultivos como la papa. En cambio en el subsistema agrícola se conjugan hasta tres sistemas de cultivos, con diferentes rotaciones, de uso intensivo del suelo o con descanso, definidos por la ubicación de las parcelas en pampa, rincónadas y aynokas, sean éstas a secano o bajo riego.

Cuando el recurso más escaso es la tierra, las familias generan diferentes estrategias y modalidades para acceder y controlar más tierras: a) arrendando a sus parientes cercanos que viven en la ciudad, a cobrar en especie con la mitad de la cosecha; b) compra de tierras y, c) acceso a tierras en otras comunidades.

Asimismo, varios productores y productoras aprovechan al máximo el apoyo de las instituciones que trabajan en la zona. Hay casos en los que al mismo tiempo trabajan con cuatro instituciones (Ejemplos: CIPCA, INTERVIDA, PROSUKO y FEDELPAZ) desarrollando diferentes acciones. Al final, cabe preguntarse si las instituciones apoyan con el mismo objetivo o con diferentes enfoques de desarrollo y cuál es el impacto real que se ve en estas familias, pues algunas con INTERVIDA trabajan con carpas solares, con CIPCA en la propuesta agroecológica, con PROSUKO, los *incaholius* y con FEDELPAZ con establos y salas de ordeño.

Cacao, opción económica en el Norte amazónico

JUAN SAN MIGUEL • CIPCA NORTE



Producción de cacao con buenos augurios en la economía campesina del Beni.

(Foto CIPCA Norte)

Tomás Guari y Patricia Vélez, son de la comunidad Candelaria ubicada a 35 Kms. de la ciudad de Riberalta, sobre el margen del río Beni. Candelaria es una de las 46 comunidades con las que trabaja CIPCA Norte en la implementación de sistemas agroforestales, cuyos componentes principales son el cacao, plátano, cedro, mara y castaña.

El año pasado la familia Guari-Vélez tuvo un ingreso de \$us. 1.177, por sus actividades agrícolas, pecuarias, forestales, caza, pesca y venta de mano de obra, de cuyo monto 130 fue por la venta de cacao, que cosechó de plantas antiguas que posee en su parcela.

Esta familia implementa sistemas agroforestales desde 1999. El año 2000 llegó a imple-

mentar media hectárea, cuyo componente principal fue el cacao; el 2001 amplió a una hectárea y el 2002 a una hectárea y media, de modo que a la fecha ya alcanzó a las tres hectáreas en este sistema. La actual producción de sus plantaciones viejas de cacao le proporcionan interesantes ingresos extras, sin embargo, las expectativas de la familia están centradas en las plantaciones nuevas.

Estimando la producción de 40 arrobas de cacao por hectárea, la familia Guari tendrá un ingreso adicional de \$us. 870 al año. Dentro de cinco años, sus ingresos aumentarán en un 74 %, provenientes de las tres hectáreas de cacao implementadas.

Dentro de este análisis no se tomó en cuenta los ingresos que tendrá a futuro, por la producción de castaña, mara y cedro que darán réditos dentro de 12 y 30 años respectivamente. Además debemos anotar que el cultivo del cacao entra en producción a partir del tercer año, pero es recién a partir del sexto año que se obtienen cantidades considerables por cada planta.

Al igual que la familia Guari-Pérez, otras 118 familias implementaron el sistema agroforestal el año 2000, abarcando un espacio de 74 hectáreas cuyo componente principal es el cacao, mientras que el 2001 fueron 267 familias en 220 hectáreas y el 2002 sumaron a 615 familias, con un total de 426 hectáreas cultivadas.

En suma, se implementaron 720 hectáreas de plantaciones, en las que el cacao jugará un papel importante dentro del sistema de produc-

ción de estas familias, que representa el 6 % del total que habita en la región norte amazónica.

Los gobiernos de Ecuador y Perú, dan importancia a la producción de cacao dentro de sus economías e implementan políticas de apoyo a los productores, con las siguientes líneas de acción:

- Atención básica para el manejo de las enfermedades en las plantaciones
- Apoyo al desarrollo integral de los cultivos
- Recuperación de la producción e incorporación de áreas nuevas
- Saneamiento físico legal de predios rústicos de áreas de cultivo.
- Información de mercado para productores e industriales.
- Fortalecimiento de organizaciones de productores.

En el caso de Bolivia, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales de la región, no han mostrado mayor interés en apoyar a las 9.853 familias campesinas e indígenas de Pando y la provincia Vaca Díez, que son potenciales productores de cacao.

Se debe apoyar a los productores con la implementación de plantaciones, asistencia técnica, investigación, información de mercados y certificación del producto, puesto que el cultivo del cacao se presenta como una alternativa interesante para que las familias campesinas e indígenas diversifiquen su producción y mejoren sus magras economías.

Los guaraníes, nuevos actores económicos en Chuquisaca

SANTIAGO PUERTA • CIPCA Condillera



La producción agrícola es el principal ingreso de las familias guaraníes.

(Foto: Mauro Baraldi)

A veces a cualquiera de nosotros que vivimos en este extenso territorio nos resulta difícil imaginar que en el departamento de Chuquisaca, en su ecoregión Chaco, hay 53 comunidades guaraníes, entre ellas 8 comunidades reasentadas (1993-1997) en las zonas de Ingre y Guakareta con 286 familias aproximadamente, que forman parte de un abanico diverso de productores,

compuesto además por unas 2.780 familias de campesinos y colonos, arrendatarios, productores de maíz, maní, ganaderos, etc. Este grupo de familias guaraníes antiguamente empatronadas, en la actualidad se encuentran en proceso de consolidarse como comunidades libres, sustentadas en el fortalecimiento de su base productiva a través de la recuperación de sistemas

cionales de producción, combinados con tecnología apropiada que dan como resultado una diversificación productiva destinada en un 81% al consumo familiar y animal y el restante 19% para el mercado. A ello se añade la venta de mano de obra con la finalidad de garantizar la reproducción familiar. De igual forma se considera el fortalecimiento organizativo como instrumento indispensable para alcanzar el bienestar común. Esta nueva dinámica comunal se complementa con las relaciones de reciprocidad, propias del pueblo guaraní, que se conservan como forma de mantener el espíritu solidario.

Después de haber sido considerados como parte de los activos en la hacienda para la generación de valor, los guaraníes han pasado a ser protagonistas de una nueva vida que cambia la estructura económica de la región, como actores con poder de decisión sobre sus propios retos y ganando un espacio y respeto de sus competidores, en la lucha por la sobrevivencia y también por acceder a instancias de decisión local, que les permitan mejores condiciones de vida en un país cada vez más abierto al mundo (globalizado) donde lo indígena no es prioritario. ¿Pero cuál es la situación de estos productores? La respuesta la encontraremos en los valores netos de producción (Valor Bruto Familiar descontando gastos productivos monetarios), que según la evaluación anual del 2002 para estas zonas, alcanza los 936,23 dólares americanos por familia, resultado de la utilización adecuada de sus principales factores productivos; mano de obra y tecnología apropiada, además de la escasa superficie disponible para fines agropecuarios, donde la participación del capital es inexistente.

Desagregando la estructura de generación de dichos valores al ingreso familiar, vemos que la producción agrícola aporta con el 49,20 % al sistema productivo familiar, seguido por la pecuaria, 23,10 %, artesanía, 12,28 %, entre

otros con menor aporte como la caza, pesca, recursos forestales maderable y no maderable (10,13 %), complementados con la venta de la mano de obra que les aporta 395 Bs. anuales (5,29 %). Esta composición nos muestra que a pesar de ser una economía aún de subsistencia y todavía ligada a los lazos de dominación del patrón a través de la venta de su fuerza de trabajo, conserva los valores que sustentaban su economía tradicional, a través de sus relaciones cotidianas y rituales, donde la reciprocidad constituye un elemento importante, no sólo en las relaciones económicas, sino también en las sociales y políticas que permiten redefinir relaciones sociales al interior de la comunidad. Esta racionalidad tiene como finalidad, en último caso, la disminución del riesgo productivo, generando un proceso de consolidación económica capaz de enfrentar los actuales desafíos impuestos por el modelo.

A su vez esta economía, a pesar de su aparente insignificancia y considerada por las sociedades nacionales como primitivas por mantener costumbres no siempre alineadas al libre mercado y economía formal, aporta al Estado con estabilidad laboral, mediante el autoempleo familiar, productos para la alimentación de la sociedad en general a bajo costo, con un manejo racional de sus recursos naturales, que contrarrestan procesos migratorios masivos de pequeños productores a las ciudades, que concluyen en marginalidad social y delincuencia urbana, entre otros.

Por esta razón nos preguntamos ¿cuándo estos productores fueron considerados como agentes económicos privados que contribuyen a generar estabilidad social y económica al país? Creemos, en consecuencia, que las políticas de Estado deberían estar dirigidas a fortalecer estas unidades productivas generando procesos de Desarrollo Rural Sostenible.

Agricultura tradicional y contemporánea

Stacio González, Julián Chacae y Marcelo Alberto
CIPCA Condellera



Guaraníes combinan variedades nativas e híbridas de maíz en sus cultivos.

Óliver Naranjo/Unesco

La economía guaraní, está basada en el sistema productivo familiar, cuya actividad doméstica va de la mano con la productiva.

En los sistemas de producción indígena, el objetivo fundamental es lograr la reproducción biológica y cultural, motivo por el cual la

producción familiar es destinada más al autoconsumo, por eso las unidades de producción son básicamente pequeñas, que están constituidas por la familia (madre, padre, hijos e hijas), la tierra de cultivo y el lugar de cacería.

La economía del pueblo guaraní, gira en

La economía del pueblo guaraní, gira en torno a la agricultura. Su práctica tradicional está basada en el cultivo asociado de maíz con joko, kumanda tupi, sandía y cañagüiru, siendo el maíz el producto más importante. Las labores culturales las realizan en su mayoría de forma manual y sin uso de agroquímicos, asegurando un manejo sostenible de los recursos naturales.

Sin embargo, desde hace algunos años el pueblo guaraní está acoplándose a la tecnología moderna y los nuevos conceptos de la producción agrícola, que expresan el modelo de economía de mercado que está en contraposición a la cosmovisión de los guaraníes.

Esta situación está abriendo una brecha entre la agricultura practicada por sus antepasados y la nueva, que está afectando principalmente a los jóvenes, quienes se ven confundidos entre sus creencias de respeto por la naturaleza (el *TYA* "Dueño del monte") y el aprovechamiento de la tierra para lucrar.

Esta mezcla de la agricultura tradicional y contemporánea, presenta un reto tanto para los mismos guaraníes como para las instituciones involucradas en el desarrollo sostenible. ¿Cómo combinar una agricultura destinada esencialmente al autoconsumo, con otra agricultura destinada al mercado que no cambie el modo de ser guaraní o indígena y sobre todo, su concepción sobre la naturaleza?

Actualmente las familias guaraníes realizan prácticas asociadas de cultivos, control de plagas con métodos tradicionales, pero la concepción del *TYA* se desvanece ante los nuevos actores de la agricultura moderna. Sólo en los chacos de los ancianos se ve aún las prácticas ancestrales y el respeto al *TYA*.

Según estudios realizados por CIPCA Cordillera en el Distrito Indígena Charagua Norte, se arrojan los siguientes resultados: la producción agrícola familiar es la base para la economía guaraní, con un promedio de 3,37 has de superficie cultivada por familia. En todas las comunidades se practica la asociación de cultivos, pero en algunas existen monocultivos de maíz destinados mayormente a la venta.

Del volumen de maíz producido en un año, el 40,51% es destinado al consumo y el 52,03 % a la venta. Anteriormente la producción estaba destinada casi exclusivamente al autoconsumo, tanto humano como animal. Este vuelco de destino de la producción de maíz se debe a la pérdida de variedades nativas.

Actualmente existen solo tres variedades nativas y seis nuevas introducidas. En contrapartida se registraron ocho variedades nativas perdidas. Esto significa que la producción ahora está ligeramente inclinada hacia el mercado, debido a la influencia de su entorno (misionistas y ganaderos) y la inserción de la cultura guaraní a la economía de mercado imperante en el país.

Manejo forestal: aplicar planes y no sólo extraer madera

Rolando Cúllari y Javier Vargas
CIPCA SANTA CRUZ



Comunarios de El Chorro empezaron a ver los primeros resultados de sus Planes de Manejo Forestal. (Foto: Javier Vargas)

Los Planes de Manejo Forestal (PMF) se vienen implementando en Santa Rosa del Sara del departamento de Santa Cruz y en otros municipios del país desde el año 1996, año en que se aprobó la nueva Ley Forestal (Ley 1700) que establece la normativa para un nuevo aprovechamiento forestal, con manejo racional y sostenible.

Para ello se cambian las estructuras y mecanismos de control y fiscalización de los recursos forestales del país. Al mismo tiempo, el Estado reconoce la posibilidad de que los campesinos indígenas puedan acceder al bosque para su aprovechamiento comercial.

Los productores campesinos de Santa Rosa no pretenden solucionar su disminuida

mía con los PMF en sus parcelas de 50 has., pero sí articular la forestería dentro de un sistema integral productivo sostenible que incluye los rubros de la agricultura, ganadería, caza, pesca, entre otras. Estas actividades productivas, en conjunto, aportan ingresos económicos interesantes a las familias campesinas e indígenas.

Los PMF, además se convierten en una forma de mantener algunas superficies importantes con bosque, que permiten la conservación de suelos, la fijación de nitrógeno, la protección de cuencas hidrográficas, la regulación de las corrientes de agua y de vientos, la normalidad de las precipitaciones pluviales, la rehabilitación de tierras marginales o muy degradadas y el suministro de plaguicidas naturales, entre otros beneficios. CIPCA, dentro de su propuesta agroecológica, apoya la elaboración e implementación de PMF, como un componente vital para el desarrollo rural, en 14 comunidades de la zona de El Choré con una superficie que asciende a cerca de 2.400 has. de bosque manejadas.

Ahora, el desafío es demostrar la viabilidad de los PMF a largo plazo, a dos décadas como estipula la ley forestal, porque los planes reinician el ciclo de aprovechamiento de la madera en aquellos lugares ya intervenidos hace 20 años, con los resultados esperados en cuanto a regeneración de las especies maderables y nuevos árboles que cumplen con el diámetro mínimo de corte; para lo cual las auditorías forestales, que deben realizarse en los PMF cada cinco años, serán de fundamental impor-

tancia para verificar el cumplimiento cabal de las operaciones forestales de campo y avalar la continuidad de los mismos.

Otro desafío es involucrar más a las mujeres en la planificación, seguimiento, evaluación y distribución de los beneficios de la actividad forestal, pues las mujeres campesinas cumplen un rol decisivo en el aprovechamiento de los productos no maderables como plantas medicinales, miel, frutos silvestres, etc. que son significativos en la alimentación y economía de las familias campesinas e indígenas.

En El Choré también existen grandes concesiones forestales de propietarios que hacen manejo forestal; sin embargo es lamentable que, algunos empresarios concesionarios no ven a los PMF como una inversión de la cual tendrán utilidades a corto, mediano y largo plazo, sino que ven al bosque como una mina para extraer mucha madera lo antes posible, tomando en cuenta muy poco los criterios técnicos de sostenibilidad. Ellos están enmarcados en la Ley, pero en el aprovechamiento mismo del bosque, no la respetan. Por ejemplo, no cuidan los árboles semilleros, rinden información falsa a los mecanismos de control, alteran los certificados forestales que acaban por respaldar la extracción de madera ilegal. Esta situación deberá ser asumida y remediada con urgencia por las instancias de fiscalización y control antes que el propósito de sostenibilidad de los recursos naturales que la ley establece, se derrumbe.

¿De qué vive El Choré?

Por Carlos Gutiérrez • CIPCA Santa Cruz



El Choré, provincia Sara en Santa Cruz, una muestra de las condiciones de vida de las familias campesinas. (Foto: Roberto Gallo)

"...Se dice que la zona El Choré vive de la madera, pero los resultados que nos muestran los estudios para determinar los ingresos de las familias dicen lo contrario...", expresión preocupada de José Luis Vallejos, un productor campesino, al conocer el trabajo de investigación de CIPCA que se le dio a conocer.

El estudio "Estrategias económicas de vida de las familias" se hizo con el objeto de aportar

con información básica a la discusión sobre la economía campesina indígena de Bolivia e incidir en la elaboración de políticas productivas que afectan a hombres y mujeres campesinos indígenas. Llevarlo a cabo ha implicado el llenado de 181 encuestas con el mismo número de familias. Sus principales resultados preliminares han sido presentados en el Encuentro de productores y productoras del

Choré. Los datos expuestos dejaron asombrados a campesinos y campesinas que se preguntaban "¿qué de la madera, los cítricos, las piñas, mangos, las papayas, la soya y otros cultivos que producimos?...". Los datos indican que estos no aportan significativamente al ingreso de las familias.

Hombres y mujeres de El Choré tienen como estrategia de vida la producción agrícola y pecuaria, que aporta el 84,7% del total del valor bruto de la producción. De toda la producción obtenida el 31% se destina al autoconsumo y el 69% a la venta. El cultivo de arroz, dentro la producción agrícola, es el de mayor importancia, seguido del maíz y la yuca. La pecuaria ocupa el segundo lugar dentro del sistema productivo, donde los bovinos y las gallinas contribuyen en mayor grado al valor de la producción familiar, seguido de los porcinos y ovinos. Tomando en cuenta todos los rubros se tiene un valor de producción promedio de 1.582,96 dólares por familia.

Si ponemos en una balanza el peso específico del valor de producción de cada subsistema, el peso mayor lo tiene la actividad agrícola -y dentro de ésta el arroz como producto principal en la comercialización- con el 74 %, y aporta a la dieta alimentaria, con el 26 %.

Alguna similitud tiene la producción pecuaria donde el ganado bovino es determinante en la generación del valor de producción, siendo el destino principal la comercialización, con 89 %; en cambio las gallinas se destinan principalmente al autoconsumo, con un 64 %.

Contrasta significativamente el aporte que brinda el aprovechamiento forestal maderable, con sólo el 0,9 %, dato que ha dejado sorprendidos a productores y productoras y que ha propiciado una serie de interrogantes ¿De dónde

sale la madera? ¿Se estará vendiendo legalmente la madera? ¿Se estará vendiendo a un precio justo? La respuesta curiosa y certera fue de Laureano Espinoza: "vivimos de la producción agropecuaria".

La dependencia casi total de un rubro agrícola puede ocasionar grandes pérdidas a los productores del Choré si se producen hechos climáticos adversos, si se pierde la fertilidad de los suelos o por el contrabando y los acuerdos de libre comercio en actual discusión, que sin duda afectarán negativamente a los pequeños productores. De darse pérdidas por cualquiera de estos factores podría ocasionar desánimos, frustraciones y elevar el índice de migración campo-ciudad.

Si consideramos que la vocación productiva de la zona es agroforestal, se debería incidir en incrementar áreas con este sistema de producción, apoyar iniciativas productivas que rompan el actual sistema convencional, reorientando estrategias de apoyo, tomando en cuenta los cultivos que aportan mayor valor al ingreso familiar, tales como el arroz, maíz, yuca y la producción pecuaria, con énfasis en bovinos, porcinos y gallinas. De esta manera se puede lograr una mayor diversificación y equilibrio en los ingresos.

Por su parte, el monte alto que todavía queda en las parcelas de los comunarios tiene que ser aprovechado de manera sostenible, y para esto se preparan los Planes de Manejo Forestal. La venta de la madera no dará un gran ingreso, pero es un ingreso seguro y permanente -año tras año para los actuales colonos, sus hijos y sus nietos- que no es vulnerable a la poca o demasiada lluvia. Además, el bosque protege de inundaciones, provee leña y alberga a los animales del monte cuya caza es parte indispensable de la dieta familiar.

Del rebaño a la siembra fecunda

Bernardino Solís • CIPCA Cochabamba



Mujeres campesinas de Sacabamba preparan terreno para riego.

(Foto: CIPCA Cochabamba)

La implementación del sistema de riego *Ch'iyara Qhacbi* en Sacabamba está cambiando los roles tradicionales en las familias campesinas, tanto de los varones como de las mujeres. En el caso de las mujeres, el cambio es más visible.

Antes las mujeres de la zona, con la ayuda de los niños y las niñas, tenían por principal

actividad, sin ser la única, el pastoreo de las ovejas, con un promedio de 12 animales por familia. Pero además, a partir de cada noviembre, tenían que ayudar al marido en la siembra de tubérculos y cereales a secano, seguido de las labores culturales y la cosecha. Este incremento en sus actividades acababa en junio, con el venteo del trigo y la cebada.

Por otro lado, ellas han aportado con muchos jornales a la construcción del sistema de riego, que duró tres años; pero siempre lo han hecho dándose tiempo o buscando arreglos con otras familias para no dejar a la deriva a su ganado y sus actividades en la producción agrícola. Es decir, ellas, con la construcción del sistema de riego, tuvieron mayor trabajo físico a sus ya recargadas labores domésticas. Sin embargo nada disminuyó su entusiasmo y esfuerzo por tener agua de riego en sus parcelas y, en muchos casos, para ser las titulares de acciones de riego.

Cuando por fin llegó el día de regar, tal vez nunca pensaron que el agua cambiaría para siempre muchos aspectos de sus vidas y de sus actividades cotidianas. Ahora se dedican más al riego de las parcelas, que empieza en el mes de junio. Desde ese mes tienen que atender los cultivos hasta que culmine la cosecha en noviembre. En el mismo mes empiezan las siembras temporales y tienen que continuar con las mismas actividades agrícolas junto a sus maridos y/o hijos.

Ochenta mujeres se han hecho diestras en regar sus terrenos, plantar cebollas, aporcar y deshierbar, saben el momento de pisar el follaje para formar cabeza, cavar, seleccionar y vender en la feria de Sacabamba. También saben dónde comprar la semilla de haba y cultivarla. Lo mismo con la arveja y el maíz. Asimismo siembran alfalfa. Cuidan como a una *manitas* (niño/a pequeño/a) a sus árboles frutales de durazno y manzano, algunos de los cuales ya

están produciendo los primeros frutos y son la atracción de niños y niñas... y también de los pájaros.

Todos estos productos ya los conocían, por lo que cocinar para la familia no es problema. La diferencia es que antes los compraban, ahora los producen. Incluso la papa, que aún es el producto más importante de su dieta, la compraban desde agosto hasta febrero.

Hoy prácticamente tienen papa durante todo el año, pues las primeras cosechas se dan en el mes de noviembre. Como dice doña Juana "antes en esta temporada (noviembre) teníamos que estar comiendo la papa que podíamos comprar nomás. En cambio ahora tenemos en cantidad. El trabajo es un poco más, pero estamos mejor. En esta temporada había que ir hasta Sacabamba a comprar papa, ahora más bien llevamos a vender, eso es bueno." Todo esto lo han aprendido en dos años.

¿Y las ovejas? La mayoría de las familias tuvo que buscar nuevas formas de criarlas. Las amarran donde hay algo de pasto y les añaden forraje y *phalaris*, que se va multiplicando en toda la zona. En otros casos los dan "al partir" a familias que no riegan. Otras familias están ya planeando deshacerse de las ovejas -dicen "hacen perder el tiempo nomás"- y comprarse un par de vacas, que darán no sólo guano sino leche con la alfalfa que ya tienen. También piensan criar cuyes.

Esta es la historia de mujeres campesinas EMPRENDEDORAS, a partir de un esfuerzo de nunca acabar.

¿Y las mujeres qué?

Nancy Cavallo • CIPCA Cochabamba



Mujeres con los *niñawás* en las escuelas aguardan para participar en la capacitación.

Foto: CIPCA - Cochabamba

Nos encontramos en un proceso en el que empezamos reflexionando, reconociendo y descubriendo el trabajo desapercibido de las compañeras campesinas, amas de casa y profesionales. En este proceso me tocó vivir y sentir la forma en que las mujeres casadas, solteras, mayores, jóvenes y niñas son relegadas, marginadas a un segundo plano y no son tomadas en cuenta si no es para llenar listas. Veo también que existen esfuerzos reales y comprometidos de las compa-

ñeras que permiten un *accionar con calidad!*

Pienso que la mayoría de las veces estamos ciegos ante las formas simbólicas de expresión de nuestras amigas, en la que nos muestran un gran interés y al mismo tiempo una vergüenza inevitable a la hora de participar en proyectos políticos y de desarrollo rural. Una vergüenza que se hace evidente siempre que propiciamos acciones en espacios donde ellas no se encuentran cómodas, en espacios establecidos

no se encuentran cómodas, en espacios establecidos para hombres y por los hombres, donde a las mujeres con tareas y roles asignados por su constitución biológica y por sus principios culturales, étnicos y de clase, no les permiten en muchos casos expresarse y desarrollar ampliamente sus aptitudes y propuestas. Así, las vemos asediadas por prejuicios y por ese infundado machismo y poder simbólico que los hombres adquieren desde su nacimiento.

Dentro de este proceso, tuvimos la ocasión de experimentar la implementación de una técnica de trabajo para determinar el aporte de las mujeres a la economía familiar.

Se inició organizando a hombres y mujeres en espacios diferenciados donde las compañeras y compañeros socializaron sus diferentes actividades respecto a su sistema productivo. Una vez concluido este ejercicio, fueron reunidos en un espacio de consenso que permitió una reflexión dinámica de encuentros y desencuentros y asimismo, de reconocimiento y aceptación de los roles y tareas de hombres y mujeres dentro de un sistema social, económico y cultural que fue establecido por generaciones.

Sin duda, fue una experiencia que parecía expresar rivalidades visibles al instante de consensuar, cuando las mujeres razonable, coherente y enfáticamente con argumentos que avasallaban las normas establecidas por hombres y técnicos, fueron mostrando aquella contribución valiosa al desarrollo y reproducción de su sistema socioeconómico y cultural. Nos dimos cuenta, que ellas, las más calladas,

las pasivas tenían voz e interés por hacer conocer su contribución.

Esta herramienta que probablemente sea todavía insuficiente, muestra claramente que podemos construir técnicas y habilidades que garanticen la participación de las mujeres con calidad y justicia en todos los niveles de la vida.

Propongo reflexionar las siguientes acciones e instancias donde licenciados, ingenieros y técnicos participamos y en cierta medida, ejercemos control: si tenemos la mínima sospecha y sensación de que las compañeras no contribuyen, facilitemos espacios donde sí lo hagan; si creemos que están calladas y pasivas, reflexionemos e intuyamos cómo debe cambiar la situación; si el compañero no está en la parcela, valoremos igualmente las actividades de la mujer; si están casadas, propiciemos acciones alternativas que garanticen su accionar en la reproducción de su sistema productivo, sin que deje de lado sus actividades del hogar; finalmente, si en reuniones y talleres la *señora* llora no digamos *chusto* (silencio), porque con ello la amedrentaremos y la haremos sentir culpable de ser madre.

Considero que cuando superemos todas las barreras mentales con que marginamos a las mujeres, empezaremos a avanzar cualitativamente y de pronto lograremos una participación dinámica y propositiva de nuestras amigas, compañeras y hermanas; caminando paso a paso y deseo a deseo, hasta despertar el potencial dormido que poseen.

Las mujeres asumen nuevos desafíos productivos

Eduay Chávez y Roberto Ureña
CIPCA Córdoba



Las mujeres participan activamente con talleres prácticos en las actividades productivas.

José Joaquín Barrios

A pesar de los sinsabores que tiene la vida del campo, hombres y mujeres guaraníes enfrentan las dificultades sin perder la alegría y el buen humor, expresados en cuentos, aros y versos de los momentos festivos que tienen las comunidades como parte de sus tradiciones.

Los versos no son otra cosa que la expre-

sión de la realidad en la que se desenvuelven las familias, especialmente las mujeres, que además de cumplir con las responsabilidades domésticas del hogar, desarrollan otras actividades económico-productivas con resultados muy alentadores.

En las comunidades se puede constatar la satisfacción que sienten las mujeres, cuando

e incluso con el visitante ocasional, a quien en una muestra clara de su hospitalidad invitan el fruto de su trabajo cotidiano, traducido en un delicioso asadito de oveja de pelo con ensalada de una variedad de verduras, acompañado de la tradicional chicha o de un refrescante somó, no sin antes ofrecerle un tujuré con leche o un *güitimimbo*.

Es importante resaltar el alto grado de satisfacción de las protagonistas de estas actividades económicas, lo que ha contribuido a incrementar el autoestima de otras mujeres productoras. Asimismo estas actividades han posibilitado que ellas se relacionen con comerciantes mayoristas de Santa Cruz y con minoristas que llegan hasta las comunidades. Esta relación que generalmente es desventajosa para las productoras, por falta de información oportuna sobre precios, ha despertado su inquietud por profundizar sus conocimientos sobre los canales adecuados de comercialización y técnicas de mercadeo.

Adicionalmente a los resultados tangibles obtenidos, es interesante percatarse de la complacencia que las mujeres sienten al recibir el reconocimiento y apoyo de su organización por contribuir económica y materialmente en las diferentes movilizaciones realizadas en procura de lograr la defensa de sus derechos, el reconocimiento legal de su territorio y el uso adecuado de los recursos naturales, sobre todo del recurso agua.

Sin embargo, existen interrogantes que ellas mismas manejan, especialmente para las actividades productivas que requieren de un mayor trabajo asociado, como es el caso del molino de granos y de las tiendas, donde generalmente hay conflictos que requieren de un mayor grado de administración y madurez organizativa. Estos problemas generan susceptibilidades en el manejo del dinero. Cuando se dan estas situaciones surge la interrogante ¿Qué hacer? La solución a estas dificultades pasarán por un proceso reflexivo de la comunidad en su conjunto, cuyos resultados pueden ofrecer varias alternativas, por ejemplo, la combinación de actividades comunales y familiares de acuerdo a las iniciativas productivas dejando claramente establecido el acceso equitativo a la distribución de los ingresos y productos.

Los resultados alcanzados por las mujeres en el desarrollo de sus iniciativas productivas, nos muestran que al interior de las comunidades existe predisposición al cambio de actitudes, orientado a equilibrar cada vez más la participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos relacionados con la producción y la gestión comunal. Esta situación se refleja en la incorporación de demandas, prácticas y estratégicas en la formulación de los diferentes instrumentos de planificación de su propia organización y los formulados por los Gobiernos Municipales.

El reconocimiento del aporte de las mujeres, una cuestión por resolver

TANIA CLAVIJO • CIPCA SANTA CRUZ



El aporte de las mujeres campesinas indígenas a la economía familiar es poco reconocido.

© Tania Clavijo

En las comunidades del Chorré, las mujeres participan en todas las actividades productivas al igual que los hombres, sin embargo no son reconocidas por su aporte ni por su

esfuerzo, mucho menos retribuidas económicamente. Esta situación dio lugar a que el CIPCA, incorporara como parte de sus desafíos, un indicador que permita visualizar el aporte y participación de ellas en las actividades productivas.

Sin embargo, a la hora de evaluar el resultado surgieron estas interrogantes: ¿El indicador permite hacer un reconocimiento social a las mujeres? ¿Su participación en las actividades productivas, no le genera una sobrecarga a sus ya pesadas actividades reproductivas? ¿Las mujeres participan en igualdad de condiciones en las actividades productivas? ¿Por qué no cuantificar la participación del hombre en los roles reproductivos? Si se quiere motivar y fortalecer la participación de las mujeres en el ámbito productivo, ¿por qué no impulsar a los hombres a asumir roles reproductivos a la par de las mujeres? La condición de ser mujer y sobre todo mujer campesina, derivó en estas

Por las noches en El Choré, Urubichá o en cualquier comunidad, no es raro encontrarse con mujeres cansadas luego de culminar la extenuante jornada de actividades. Desde ir a ordeñar, cocinar, cuidar a los niños, la casa; hasta dar de comer a los animales, cuidar el chaco y llevar comida a sus esposos que se encuentran "trabajando". Además, cuando las mujeres procuran capacitarse para poder involucrarse más en las actividades productivas, el sacrificio se duplica, pues mientras tratan de entender lo que se explica en los cursos combinan su concentración con cuidar a sus niños y darles de comer, ya que en sus hogares durante el tiempo que dura un curso, nadie puede hacerse cargo de ellos.

Estos datos nos hacen ver, que el indicador nos mostraba una arista del problema, que apenas nos permite cuantificar el aporte de la mujer en las actividades productivas, dejando de lado la valorización de los roles reproductivos que históricamente la sociedad ha impuesto, los mismos que a los ojos de

muchos, son invisibles, no reconocidos y menos tienen valor económico. No nos oponemos a que las mujeres asuman los roles productivos, pero sí a la forma en que deben asumirlo y a las condiciones inequitativas en que los practican.

Cualquier persona sensata puede darse cuenta de que las mujeres campesinas, a pesar de tantas dificultades, están respondiendo a uno de sus retos históricos: el recuperar su espacio en el mundo. Sabemos que el trabajo que ellas realizan, tanto en el plano productivo como en el reproductivo, ha sido olvidado y menos aún reconocido socialmente a causa del patriarcal sistema de contabilidad nacional que fue impuesto por las Naciones Unidas.

Recordemos que los indicadores del Valor Bruto de la Producción (VBP) y del Producto Interno Bruto (PIB) han dejado al margen el aporte de miles de mujeres. Por esa razón, el reconocimiento y visibilización del aporte de las mujeres a la producción social, es una de las tareas a resolver.

San Ignacio de Mojos vende cacao por Internet

GERMÁN HUARCA • CIPCA Beni



Las nuevas tecnologías permiten a los mojeños ingresar al comercio electrónico.

(Foto: CIPCA Beni)

El año 1997, cuando CIPCA se estableció en San Ignacio de Mojos, uno de los pedidos que el personal de ese entonces hacía para incorporarnos, era tener Internet. Fue así, que con servidor en la ciudad de Santa Cruz y el entusiasmo para emprender nuevos retos, llegamos hasta las pampas mojeñas, a donde no se puede viajar por tierra en época de lluvias

porque los caminos se ponen intransitables y no queda otra que trasladarse en avioneta.

El teléfono era todavía un privilegio de las ciudades y la comunicación hacia o con las comunidades rurales era siempre a través de las radios de banda corrida. Aquella vez vinimos con el Internet en mano, que a través del teléfono, tenía un costo de 150 Bs. la hora.

A finales del 2001, PRODEMO, la unidad de comercialización de la oficina regional Beni, puso a Mojos en la red de navegación vía La Paz, bajando el costo a 15 Bs. la hora. Esta opción nos permitió abrir nuevos horizontes, hacer contacto directo con empresas compradoras de cacao criollo, participar en seminarios internacionales y por ende, entrar al mundo de lo que técnicamente se llama comercio electrónico. El siguiente paso fue diseñar una página Web, con el propósito de poner a disposición del mercado nacional la oferta regional. La osadía de habernos conectado a la red Internet, si bien nos facilitó la emisión de señales comerciales, nos puso en aprietos porque ahora no podemos cubrir y abastecer la demanda de pedidos.

Antes, cuando no teníamos este servicio, nos cerraron las puertas al incursionar a los mercados de Sucre, sin embargo, el correo electrónico nos abrió la puerta a otros mercados y nos permitió vender y hacer negocios directos desde nuestra región.

La demanda es masiva en la actualidad. Por ejemplo, el 28 de octubre pasado llegó un mensaje de la empresa Chocolates Taboada de Sucre. "Mediante la presente le hago llegar el requerimiento de pepa de cacao criollo para

la gestión 2003, que es de 600 quintales (qq)". Nosotros tratamos de cubrir aquel pedido. Empero, el 13 de diciembre, aparece en nuestras pantallas otro mensaje: "Debo informarles que gracias a nuestras exportaciones a los Estados Unidos, nuestro requerimiento de cacao para el año 2004 será de 1.000 qq, le ruego nos informe a la brevedad posible, sobre la cantidad que ustedes puedan proveernos".

Con Chocolates Taboada sostuvimos los últimos contactos y junto a Harasic de Oruro, la relación comercial se estableció por Internet, porque a sus ejecutivos no los conocemos en persona. De la misma forma fuimos abriendo brechas para otros productos.

Por muchos años se catalogó a Mojos como el "rincón" del mundo, aunque no existe ninguno por estos lados. Pero eso sí, hay que reconocer que está aún aislada de los grandes mercados de consumo y comercialización.

Nuestra aventura de navegar por Internet nos ha puesto en escena, superando barreras y distancias que nos aislaban del eje central del país. Consideramos que este servicio, debe ser incorporado dentro del enfoque de desarrollo rural, para que otros pueblos también tengan acceso a los mercados nacionales.

Torotoro: I Feria Agropecuaria, un esfuerzo organizativo y económico

Roy Córdova • CIPCA Cochabamba



Campestras exhiben y venden lo mejor de su producción agrícola.

(Foto: CIPCA Cochabamba)

Torotoro es una de las secciones municipales más pobres de nuestro país. Se encuentra al norte del departamento de Potosí, colinda con el sur del departamento de Cochabamba. El mapa de la pobreza indica un nivel entre el 98 y 100%. Según el Plan de Desarrollo Municipal, el ingreso per cápita es de \$us. 375

año. En el Índice de Desarrollo Humano (IDH) -que mide esperanza de vida al nacer, nivel de analfabetismo y escolaridad, nivel de ingreso real per cápita de Torotoro, está catalogado como *very bajo* y alcanza un índice de 0,247 frente al 0,648 del país. Según la escala de UDAPSO-PNUD, Torotoro está ubicado

en el puesto 309 entre los 314 municipios del país.

A pesar de la pobreza general de este municipio, existen seis comunidades a la orilla del río Caine (2000 msnm) -río que separa ambos departamentos-, las cuales tienen una economía marcadamente diferente al resto de las comunidades del municipio. En estas seis comunidades se ha calculado un ingreso aproximado de \$us. 560.

La economía de estas seis comunidades está basada principalmente en la producción agropecuaria (73% del Valor Bruto de la Producción, VBP) seguida por la venta de fuerza de trabajo (18% del VBP). Más de la mitad del VBP de la población depende de la producción agrícola (56%), la misma que es muy diversificada. En estas comunidades se produce limón, guayaba, naranja, mandarina, pomelo, chirimoya, papa, maní, maíz, camote, cebolla amarilla, ají y tomate. Los más importantes por su relación con el mercado son el limón, el camote y el maní; y desde el punto de vista de seguridad alimentaria son la papa, el maíz y el maní.

Con el propósito de dinamizar la economía local y del municipio, el 12 y 13 de abril se llevó a cabo la *I Feria Productiva y Cultural Torotoro* en una de estas seis comunidades a las orillas del río Caine. La feria ha sido organizada por la Central Provincial de Trabajadores Campesinos de Torotoro y por la Asociación de Productores Agropecuarios de Caine, AGROCAINE -conformada el 12 de octubre del 2002- con el auspicio de las instituciones de desarrollo INDEPO, CIPCA, FHI; instancias del Gobierno, Viceministerio de Asuntos Campesinos, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes; y el Centro de Salud de Julio. El

Gobierno Municipal estuvo ausente de todo este proceso.

Todos los productores del municipio fueron invitados a exponer sus productos agrícolas, pecuarios y transformados durante la feria; se entregó premios a la calidad y diversidad -a nivel comunal e individual- en la producción de frutas, papa, camote, maní y hortalizas; bovinos y productos transformados. Asimismo, los participantes mostraron sus destrezas tanto en música regional, como en comidas típicas y artesanías.

En el afán de contribuir al establecimiento de relaciones comerciales entre productores y los diferentes agentes en las cadenas de comercialización de productos agrícolas, se los invitó a visitar la feria para que conozcan la calidad, cantidad y diversidad de la producción agropecuaria de la región. Asimismo, se invitó a una variedad de instituciones oferentes de servicios agropecuarios, con el fin de coadyuvar a establecer relaciones de servicios entre oferentes y demandantes.

Es importante resaltar que aún con la ausencia notable y lamentable del Gobierno Municipal, las organizaciones locales con apoyo de las instituciones de desarrollo pueden organizar y llevar a cabo eventos vitales, como la primera feria, que tuvo una gran importancia socioeconómica para el municipio, por su gran efecto multiplicador.

La clave para lograr el éxito, es contar con organizaciones locales y tradicionales que tengan una clara visión de su potencial organizativo y económico, que sepan combinar ambos y aplicar con todas las instituciones un proceso que explote todas las potencialidades que tienen a su alcance.

Un chupete vale más que un pie de madera en el Beni

GERMÁN HUANCA • CIPCA General

Resulta poco racional comprender que un "chupete" cueste más que 1 pie de palo maría puesto en finca. La explotación de la madera en Mojos continúa, pese a que esta actividad ha bajado su intensidad en los últimos años. Algunos comunarios, cuarteros, piratas y compradores de madera aún se desplazan por los montes de Mojos para seguir aprovisionándose de este valioso recurso natural. El saqueo de mara (*Savietenia Macrophylla*) al parecer pasó a la historia, pero en la actualidad se siguen extrayendo el cedro (*Cedrela Odorata*) y el palo maría (*Callophyllum brasiliense*).

Un árbol de palo maría requiere entre veinte, cincuenta y hasta cien años para alcanzar su madurez, cuando es cuartereado y luego puesto a la venta en mercados de San Ignacio, Trinidad o Santa Cruz.

El valor comercial de la madera varía entre el origen y el destino. Si bien en los mercados principales de Cochabamba, Santa Cruz o La Paz el precio del pie oscila entre los 5 y 12 bolivianos, en San Ignacio de Mojos se lo compra a 1 Bs. Y a nivel de finca o puesto en el monte, el precio baja aún más y llega a costar la ridícula suma de 25 ó 30 centavos, sin tomar en cuenta la época y las condiciones adversas del tiempo para sacar la madera, que a veces obligan a navegar entre dos y tres días desde el lugar de extracción.

En torno a la explotación irracional de la madera, existen muchos problemas que la Superintendencia Forestal debe tomar en cuenta. Las empresas que explotan no están cumpliendo sus compromisos con las comunidades a las que

les afecta directa e indirectamente. Tal es el caso de la empresa Montegrande que tiene un saldo pendiente de \$us. 7.000 con la comunidad San Miguel del Apero y que luego de un año y dos meses de espera, no cumplió con su parte.

Esta actitud refuerza la idea de que el fin de las empresas, es la explotación irracional de los recursos. El esfuerzo de un indígena en este proceso, tampoco es retribuido y pagado como corresponde. Como siempre ocurre, quienes hacen posible el principio de la cadena, son los que al final reciben poco.

De la misma manera existen mecanismos creados por la Superintendencia, traducidos en leyes y normas que fueron reconocidos por la comunidad internacional, cuyos articulados no se ponen en práctica en el terreno de los hechos como se observa en las concesiones forestales que se hacen en Riberalta, donde no se respetan reglas que obligan a dejar en reserva un porcentaje mínimo de especies forestales para asegurar su reproducción natural. Además, los madereros no dejan las mejores plantas como exigen las normas, dejan las peores. Esto a largo plazo, implicará poner en peligro la reproducción de las especies forestales.

¿Quién tiene la tutela sobre este tema? Al parecer las autoridades forestales deben hacer cumplir la Ley y cumplir con la función que se les ha encargado. Treinta o más años, es una razón suficiente para que un "pie" de madera se valore más que un chupete y sobre todo, se respete la dignidad de los indígenas, quienes en verdad, son los guardianes del bosque.

El plátano: pan y moneda en el río Beni

José Luis Eyzaguirre • CIPCA General



El cultivo de plátano es uno de los más tradicionales para indígenas y campesinos del Beni.

(Foto: Pablo Van Lindes)

Navegar por el río Beni es emocionante por su singular paisaje y la diversidad biológica que lo embellece, pero a medida que uno se va alejando de los centros poblados importantes como Rurrenabaque o Riberalta, las condiciones de comunicación se tornan complicadas, en especial para las comunidades asentadas en sus riberas.

El río Beni se constituye en un importante medio de navegación durante todo el año,

aunque los costos de operación e inversión de tiempo son elevados, tanto para las embarcaciones grandes a motores y las pequeñas canoas movidas también por motor de cola llamadas "peque peque" en alusión al sonido que emiten.

En las comunidades campesinas están asentadas familias que en su mayoría tienen origen Tacana, Cavineño o Esse eja, las que se caracterizan por su gran movilidad espacial,

durante la zafra de la castaña o la itinerancia en busca de mejores condiciones de acceso a los recursos de caza, pesca o la propia agricultura.

En estas comunidades la circulación de la moneda nacional va disminuyendo conforme uno se aleja de los centros poblados. En su articulación con el mercado, las familias han aprendido a hacer sus transacciones con el plátano de freír. Seguramente porque este producto es importante en la dieta alimentaria de la región, es como el pan en otras zonas del país. Su producción se da todo el año, pues es menos riesgosa y siempre queda algo para cosechar. Empero, uno de los riesgos en su cultivo es sembrar a la orilla del río, debido a las crecidas del caprichoso río Beni que en época de lluvias puede arrasarse con los plataneros y los propios asentamientos humanos.

Los comerciantes (marreteros) que recorren por este río, encontraron también un medio de vida en el plátano puesto que su compra-venta o transacción (intercambio con otros productos) les genera ingresos extras. Es más, la compra del plátano en verde, les permite mantenerlo intacto hasta su venta al consumidor final. A cambio, los comerciantes ofrecen en las comunidades una infinidad de productos, desde artículos básicos como aceite y azúcar hasta balas, pilas y ropa, indispensables para subsistir en el monte.

El precio del plátano en las comunidades oscila entre los 6 y 10 bolivianos por racimo, pero resulta curioso que estos mismos precios estén vigentes en los mercados de Riberalta. Al parecer, los comerciantes son benevolentes con los productores, puesto que mantienen los mismos precios de sus mercancías hasta

en las comunidades alejadas.

Pero en la economía no hay samaritanos. El precio que se paga es normal y en las condiciones de intercambio, los artículos ofrecidos por el comerciante al productor muchas veces doblan el precio de mercado, es decir, si podemos comprar 1 kilo de azúcar en 3 bolivianos, en las comunidades lo cambian por un racimo de plátano, en este sentido los beneficios del comerciante son por doble partida tanto al vender el plátano en los mercados y al intercambiar sus productos con los comunitarios.

Sin embargo, no podemos rasgarnos las vestiduras y satanizar a los comerciantes, ya que éstos son un mal necesario en las actuales formas de comunicación, que a veces requiere de sacrificios y riesgos en la travesía acuática. Los productores perderían mucho tiempo y energía en salir a comercializar sus productos y adquirir otros, que son necesarios para vivir en el monte.

Sin duda, la falta de vías de comunicación más rápidas y expeditas durante todo el año, son una limitación para que las familias campesinas e indígenas de la región incrementen su producción agrícola. El único canal para mejorar sus precios es la cría de animales como chanchos y gallinas, aunque ello implica mayores riesgos por las pestes y el acecho de depredadores.

A pesar de todo, el excedente no comercializado de plátano, maíz y frutos del monte, sirve para el engorde de los mismos, aunque los términos de intercambio de estos productos tienen las mismas características de inequidad, al final se agrega un poco más de valor a los productos agrícolas.

Chaco boliviano: I Feria de Promoción Productiva

SANTIAGO PUERTA • CIPCA Cordillera

Del 7 al 9 de noviembre del 2003 se realizó en la ciudad de Camiri, la primera Feria de Promoción Productiva del Chaco Boliviano, organizada por la CODEL (Comisión de Desarrollo Económico Local), cuyo directorio integra el CIPCA, de modo que también coauspicó el evento.

La Feria fue destinada principalmente a identificar y promover acciones e iniciativas productivas que están encarando los agentes económicos privados en los 16 municipios que conforman la región. A partir del año 2003, la Mancomunidad del Chaco Boliviano priorizó entre sus líneas de acción, la construcción del Municipio Productivo Competitivo orientado a dinamizar los procesos de desarrollo a nivel local, en procura de superar las dificultades y retos existentes.

La estrategia fue impulsar acciones concertadas entre los diferentes agentes socio-económicos locales, públicos y privados para el aprovechamiento más eficiente y sostenible de los recursos públicos y promover el emprendimiento empresarial local.

Esta iniciativa demostró que el Chaco, de haber sido una zona eminentemente petrolera, ha pasado a mostrar que tiene una prometedora actividad productiva no extractiva y con mercados.

Es a partir de estas iniciativas que se crean las CODEL, instancias conformadas por agentes públicos, privados e instituciones que tienen que ver con el Desarrollo Económico Local. Una de las primeras actividades de la CODEL Camiri fue realizar una feria que permitiera identificar y dinamizar los principales sectores y rubros productivos de la región, posibilitar el intercambio de experiencias entre productores y realizar una rueda de negocios bajo el lema "Producido en el Chaco".

A pesar que aún no se ha realizado una evaluación, esta experiencia ha sido por demás enriquecedora, pues ha permitido mostrar que la región del Chaco cuenta con grandes potencialidades, con productos posicionados en el mercado y con posibilidades a corto y mediano plazo de ingresar a nuevas plazas.

Entre los productos que más sobresalieron están el queso en diferentes variedades, las artesanías en cuero, madera, tejidos y alfarería de Cordillera, la transformación de cítricos en licores, mermeladas y otros del Chaco, además de su pujante industria del mueble y la pro-

ducción de semillas; el Chaco tarijeño con sus artesanías finas en maderas y tejidos, su especialización en el rubro apícola, lácteos y otros. Nunca antes se dio la posibilidad de contar con productores organizados de todos los municipios del Chaco en una misma feria.

Esta iniciativa demostró que el Chaco, además de ser una zona eminentemente petrolera, ha pasado a mostrar que tiene una prometedora actividad productiva no extractiva. Esta se debe vislumbrar como alternativa generadora de ingresos y motor del desarrollo regional. En el resto del país se cree que el Chaco es una región integrada, sin embargo, esta supuesta integración en el ámbito económico es aún incipiente.

El centralismo departamental, ha imposibilitado que esta parte del país impulse alternati-

vas productivas comunes como estrategia de desarrollo; las autoridades y políticas deben considerar que el Chaco boliviano, no sólo comparte el mismo ecosistema sino una misma realidad. Por eso pensamos que las oportunidades que se están presentando para una articulación tanto económica/comercial de la región, como la capacidad de concertación de propuestas comunes, son de vital importancia.

Esperamos que estos esfuerzos emprendidos por los propios actores del desarrollo en el ámbito empresarial, se constituyan en una ventana hacia el planteamiento de objetivos, no sólo de generación de empleo e ingreso, sino de constitución de una unidad político-económica y social que responda de mejor manera a sus estrategias de vida.

El ALCA: otra "receta" del Norte contra el agricultor boliviano

Néle MARIEN • CIPCA GENERAL



En Bolivia, los agricultores campesinos todavía utilizan tecnologías tradicionales.

(Foto: CIPCA La Paz)

El año 1994 se ha iniciado el proceso de conformación del Área de Libre Comercio de las Américas, más conocido como el ALCA. Uno de los capítulos que mayor dificultad confrontó en su etapa de negociación, fue el referido a la agricultura. Este capítulo propone como objetivos:

1. Eliminar los aranceles a la importación (impuestos pagables al momento de importar).
2. Eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas comerciales.
3. Abolir otras prácticas que distorsionen el comercio de productos agrícolas. Una de estas prácticas son las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), las que se aplican sin contemplación alguna, que implica una restricción encubierta al comercio internacional o una discriminación arbitraria e injusta contra los países subdesarrollados.
4. Prohibir gran parte de la ayuda interna a la agricultura. Es decir negar varias medidas de apoyo a los productores que no exportan.

sus productos (condiciones de producción o comercialización, mantenimiento de precios, etc.).

La sociedad civil se ha empeñado en oponerse tenazmente a todas estas medidas. Pero no solamente la sociedad civil dificulta las negociaciones, también los Estados que participan en las negociaciones.

En primer lugar había una oposición de los EE.UU. para negociar la agricultura en el marco del ALCA, mientras la Unión Europea siga manteniendo su política agropecuaria tan proteccionista. Por tal motivo, en 1998 se definió que las negociaciones del sector agrícola se lleven a cabo en el marco de la OMC y no en el ALCA.

Pero en la OMC tampoco se pudo avanzar, porque tanto la Unión Europea como los Estados Unidos se resistieron a abrir sus mercados y a disminuir los subsidios. Lo más conocido es el *Farm Hill* promulgado en EE.UU. el año pasado, que establece ayudas por 175 mil millones de dólares. Pero también la Unión Europea se ha mantenido firme en su política de subvenciones agrícolas.

El presidente de la comisión de agricultura en la OMC (Organización Mundial de Comercio) hizo una propuesta (el borrador de Harbinson) para incentivar las negociaciones: pero aun así no se pudo avanzar.

Recién el pasado 13 de agosto (2003), se anunció un acuerdo entre los EE.UU. y la Unión Europea sobre agricultura. Este acuerdo se tendrá que ratificar con la aprobación de los 140 países miembros de la OMC en el próximo encuentro ministerial a realizarse en Cancún (México), en septiembre. En la práctica, al resto de países no les queda otra que aprobar el acuerdo pactado entre los dos grandes bloques.

¿Esto quiere decir que se ha avanzado en las negociaciones sobre agricultura, tanto en la OMC como en el ALCA? En realidad no. El

nuevo acuerdo es superfluo y carece de beneficios sobre los productos agrícolas específicos, los porcentajes y plazos. Además, los dos bloques mantienen vigentes las ayudas internas e inclusive han incluido medidas para protegerse de los países agroexportadores del hemisferio Sur.

Entonces se ve que hay "un acuerdo mundial" establecido en realidad por los dos grandes, tan vago que el trabajo verdadero de negociación todavía tiene que empezar: y es exactamente en este punto donde también las negociaciones generales del ALCA se han estancado. Hasta el año 2001 las negociaciones dentro del ALCA se han cumplido según el esquema diseñado y su fecha de inicio se mantiene para diciembre de 2005. Pero desde el año pasado se ha entrado en el tema de precisar cuáles serán los rubros específicos a los que se aplicarán los acuerdos, estos 'detalles' se tienen que definir en los anexos del acuerdo.

Entretanto, los EE.UU. aplicaron su política divisionista: hizo una propuesta diferente a cada uno de los países del ALCA. Pero, además, en su propuesta abre su mercado a los productos que casi no se producen en Latinoamérica. Estamos hablando de electrónicos, automóviles, etc. Las fronteras siguen herméticamente cerradas para los productos agrícolas, lo que ha sido objetado por los países del Sur. Especialmente Brasil, que ya dio a conocer su posición, en sentido de que las negociaciones del ALCA, no pueden continuar bajo esas condiciones.

En el tema agricultura, hay un doble empate: por una parte se estancan las negociaciones de la OMC con Europa, que debían ser la base para las negociaciones con el ALCA. Y por otra, no hay salida en los anexos dentro del bloque ALCA. Y queda claro que países como Brasil y Argentina no se interesarán más en este organismo si no se obtienen los beneficios para el acceso a los mercados agrícolas de los Estados Unidos.

Mercados internos para impulsar el desarrollo de campesinos e indígenas

NELE MARIEN • CIPCA General



La producción agrícola campesina enfrenta dificultades en la comercialización.

(Foto: CIPCA La Paz)

Antes del año 1985 gran parte de los agricultores tenían asegurada la venta de sus productos en los centros mineros, mediante ciertas normas y mecanismos estatales favorables.

Empero, desde el año 1985, los pequeños productores agrícolas han visto disminuir cada vez más sus ingresos reales. Por una parte rebajaron los precios relativos de los productos agrícolas, debido a la apertura de mercados, por otra, los productores bolivianos perdieron

el privilegio de ser los proveedores del Estado.

Es decir, se acabaron los seguros mercados nacionales y a través del ajuste estructural se impulsó el fortalecimiento de los grandes productores nacionales e internacionales. Para los grandes productores y sobre todo para los comercializadores, se ha creado un marco de seguridad jurídica tanto nacional como internacional cuyo mejor ejemplo es el Decreto Supremo 27040, que obliga a todas las entidades

estatales a realizar licitaciones internacionales para sus compras. Este tipo de normativa ignoró a los pequeños productores indígenas y campesinos, y para colmo de males, en varios casos ataca a sus intereses. La prohibición de la venta fraccionada para compras estatales es una muestra de esta afirmación.

Si bien en términos macroeconómicos la economía boliviana registra un crecimiento positivo desde 1987, esto no se ha sentido en el nivel micro. Tanto los pequeños productores agrícolas como los sectores populares, sintieron un deterioro considerable en sus condiciones de vida.

Se afirma insistentemente que el Estado no puede intervenir en proyectos productivos, que no puede favorecer la producción local o el mercado interno. Sin embargo, estas afirmaciones están provocando un rechazo generalizado y cada vez más fuerte, que se escucha en los discursos de dirigentes de los pequeños productores campesinos, indígenas y de otros sectores productivos.

Al parecer, este rechazo ha sido tomado en cuenta tímidamente en las propuestas de políticas estatales, en la Ley del Diálogo y en la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural (ENDAR); aunque todavía no está clara la voluntad política de ejecutarlas en sus diferentes dimensiones.

Como resultado del Diálogo 2000, se pidió mayor respaldo del Gobierno y más posibilidades para que los pequeños productores puedan vender sus productos al mismo Estado, entre otros rubros para el desayuno escolar. Una propuesta, resultado de este Diálogo, fue la tarjeta empresarial que habilita a pequeños productores, de diferente índole, para vender sus productos a instituciones estatales. Sin embargo, la tarjeta empresarial no fue una

solución para los pequeños productores en general, y en particular para los agrícolas, quienes por su forma de organización no pueden acceder a la mencionada tarjeta.

El Decreto Supremo de reglamentación, acabó por agudizar la situación de las organizaciones como en el caso del castigo del 15% que se debe pagar, por la simple presentación de la propuesta.

En la ENDAR, de junio del 2003, nuevamente sale la promesa de dar prioridad a los pequeños productores agrícolas para la provisión de alimentos, destinado a los desayunos escolares. Sin embargo, casi simultáneamente, el mismo Gobierno emite el DS 27040 que obliga a todos los entes estatales a licitar de forma internacional sus compras, además omite mencionar la forma de contratación de "invitación pública" para la cual están habilitados los habientes de la tarjeta empresarial.

Por otra parte, es ampliamente conocido que las promesas del Diálogo 2000 referidas al apoyo a proyectos productivos, en el ámbito municipal, no se cumplen.

CIPCA está haciendo un esfuerzo para incidir en las políticas de desarrollo rural, y está proponiendo un Decreto Supremo que faculte a los Gobiernos Municipales a comprar los insumos para el desayuno escolar, en primera instancia de los pequeños productores campesinos e indígenas. Posteriormente se puede proponer lo mismo para la provisión de alimentos en los hospitales y cuarteles militares, además de los subsidios de lactancia.

Este nuevo decreto podría significar un gran impulso para los pequeños productores, quienes de esta forma podrán asegurar la venta de sus productos y beneficiarse con ingresos de los municipios.

Lo rural en Bolivia y España

LORENZO SOLÍZ • CIPCA Cochabamba

Bolivia tiene el doble de superficie (algo más de 1 millón de km²) que España (500 mil km²), y apenas un quinto (8 millones y algo) de su población (41 millones).

España fue preponderantemente rural hasta hace tan sólo tres décadas, época en la que se acrecienta la migración rural-urbana a tal punto que hoy en día el 75% de sus municipios tienen una población menor a 2.000 habitantes, que en conjunto suman apenas el 7% de la población española. De las estadísticas se desprende que, por ejemplo, sólo en la Provincia de Burgos han desaparecido más de cien municipios en los últimos 30 años, y los municipios con población menor a 50 habitantes se han incrementado del 12% en 1970 al 34% en 2001. El desdoblamiento fue total en muchos pueblos y municipios: casas, predios, infraestructuras y plantaciones abandonadas, en suma, la aparición de los "pueblos del silencio".

Bolivia, por su parte, en los últimos 25 años también registra una importante migración rural-urbana, que ha pasado del 58% de población rural en 1976 a 37% en 2001. Sin duda también existen comunidades, pueblos y

municipios donde apenas quedan ancianos(as) y casas abandonadas pero sólo por temporadas, como en la comunidad de San José en Anzaldo o el pueblo de Carasi en Torotoro, por citar un ejemplo. Esto es que una buena parte de la migración en Bolivia no es definitiva, sino temporal debido a que persiste aún un fuerte arraigo con el lugar de origen, por diversas razones que aquí no tocaremos.

Los motivos, en ambos casos, para que los habitantes rurales migren hacia las ciudades son, hasta cierto punto, similares: buscar mejores condiciones de vida en el área urbana (empleo, mayores ingresos, beneficios de la modernización, etc.), que no es posible lograr en el área rural. Lo que da una pauta de cómo se ha abordado, en ambos países, el "desarrollo rural".

Sin embargo las causas y condiciones de la migración son totalmente diferentes. En España, la agricultura -base de la actividad económica del área rural de hace cincuenta años- ha logrado un desarrollo tecnológico tal que pronto empezó a sobrar la mano de obra y este excedente podía ubicarse en la actividad industrial de las

En España hubo varias modalidades de subvención y seguros a la agricultura, tanto del gobierno central como de entidades autónomas; desde el sostenimiento de los precios hasta la subvención directa de los ingresos de los agricultores.

ciudades. Es más, la producción agrícola, que antes estaba destinada a mercados locales y regionales pasó a ubicarse e insertarse en mercados nacionales e internacionales. También hay que indicar que hubo varias modalidades de subvención y seguros (en este último caso privados y estatales, tanto del gobierno central como de las comunidades autónomas) a la agricultura, desde el sostenimiento de los precios hasta la subvención directa de los ingresos de los agricultores. No obstante el aporte de la agricultura al PIB nacional de España es de tan sólo el 3% y ocupa cerca del 6% de la población económicamente activa.

En cambio en Bolivia, a pesar del incremento de la migración, la agricultura sigue siendo la actividad económica más importante para el 85% de la población rural. El "desarrollo tecnológico" en estos últimos 25 años ha sido muy dispar. En el altiplano, los valles y las zonas alejadas de las tierras bajas y amazonía, limitado; mientras que en el área integrada de Santa Cruz y algunos enclaves se modernizó visiblemente por la de denominada "revolución verde". Y no es que estemos demandan-

do la modernización, simplemente estamos considerando las diferencias.

Las dificultades para los migrantes en nuestro país son varias:

La primera es que no hay una actividad económica donde puedan emplearse, salvo los empleos temporales de la cosecha de diversos cultivos como la caña de azúcar, algodón, arroz, coca, etc. u otros oficios en la ciudad.

Segunda, la agricultura, sobre todo la denominada "tradicional" -cuyo aporte es del orden del 80% de los alimentos que consume la población boliviana- tiene cada vez mayores dificultades para mantener "parcelas" de mercado local, regional y nacional debido a la importación y contrabando de productos agrícolas, que va en aumento.

Tercera, la agropecuaria en manos de pequeños productores está prácticamente librada a su suerte sin apoyo estatal ni políticas específicas. Con todo, el aporte de la agropecuaria al PIB nacional es del 15%, muy por encima al de España, y ocupa al 32% de la población boliviana (que representa el 85% de la población rural).

Injusticias contra los pequeños en el comercio internacional de productos agrícolas

NELI MARDEN • CIPCA General



Los precios del mercado no compensan el sacrificio de los(as) pequeños(as) agricultores(as).

(Foto CIPCA La Paz)

Desde el año 1985 en nuestro país se impone el neoliberalismo. La consigna desde entonces ha sido 'exportar o morir', tanto para la industria y los recursos naturales como para la agricultura.

La política agraria se orienta a la estimulación de las exportaciones y a la rebaja de la protección contra las importaciones. Los aranceles (impuestos a las importaciones) bajaron hasta el 10% para todos los productos agrícolas. Desde el año '99 Bolivia es además miembro del grupo CAIRNS, países agroexportadores, que negocian en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para una mayor liberalización del comer-

cio agrícola en el mundo.

Estas políticas tal vez pueden beneficiar a los agroexportadores del Oriente (mayormente soyeros), la gran pregunta es: ¿cómo afectan a los pequeños productores y entre ellos cómo afectan a las mujeres campesinas e indígenas?

De los productos agrícolas de la canasta familiar que están en los mercados locales, mayormente de los pequeños productores campesinos e indígenas, se estima que entre el 20 y el 30% son extranjeros, este porcentaje sigue aumentando año tras año. Se trata tanto de productos importados de manera oficial como de

contrabando.

Estos 20 a 30% de productos campesinos importados que se encuentran en los mercados locales, son en gran medida los definidores (una balanza) del precio de productos de los pequeños productores nacionales.

Los precios de estos productos han bajado considerablemente desde el año '85. Esta rebaja ha influido en la aceptación de la población citadina, respecto a la reducción de sus salarios e ingresos. En realidad ha sido un subsidio del campo hacia la ciudad, porque los campesinos tuvieron que mantener sus horas de trabajo, ganando menos y con la venta de sus productos.

En contraposición, las exportaciones de los pequeños productores son virtualmente insistentes a consecuencia de la escasa productividad que registran, debido a la falta de apoyo por parte de los gobiernos de turno y porque el camino para poder exportar es una epopeya administrativa interminable que ningún pequeño productor puede transitar. Esto se constituye en una injusticia contra los pequeños productores. Aquí se comprueba que el modelo solamente beneficia a los grandes productores y no a los pequeños.

Una estrategia que han implementado muchas familias campesinas para complementar sus ingresos perdidos es emplearse temporalmente en las ciudades. Este empleo es buscado en mayor proporción por los varones, mientras las mujeres se quedan en el campo a cargo de la producción agrícola y el trabajo del hogar, lo que ha significado un incremento en sus responsabilidades productivas y reproductivas.

Las mediciones que hizo el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) en sus áreas de trabajo el año 2002, muestran que las mujeres aportan alrededor del 40% del valor bruto de la producción, hablando estrictamente del ámbito productivo. Es decir, aportan casi la mitad del valor productivo del

trabajo agrícola, a la par de que siguen con la responsabilidad en casi el 100% del trabajo reproductivo en los hogares rurales. Además, las mujeres han ido buscando estrategias para aumentar los ingresos familiares, por ejemplo a través de los trabajos artesanales.

Frente a las políticas neoliberales que causan el empobrecimiento rural e incrementan la labor de las mujeres ¿cuáles son las alternativas? Una de las propuestas más concretas, parte de la idea de que las reglas mundiales del comercio son muy injustas y que esta injusticia perjudica especialmente a los países en desarrollo. Y en el caso de la agricultura específicamente, a los pequeños productores.

Se denuncian las subvenciones a la agricultura en los países desarrollados, se denuncia el *dumping* (venta de productos a precios por debajo del costo de producción). Hay una campaña internacional para disminuir estas injusticias. Complementariamente y en términos de propuestas a nivel político internacional, hay una orientada a ayudar específicamente a los pequeños productores rurales de los países en desarrollo. Se trata de la propuesta de la 'caja de desarrollo' que pretende incorporar una nueva 'caja' en la Organización Mundial de Comercio, es decir un nuevo grupo de excepciones permitidas a las reglas generales de la OMC.

En la OMC existe una serie de excepciones para el libre comercio de ciertos productos, medidas aplicadas mayormente a los países desarrollados, los que en realidad necesitan menos protección. Estas excepciones se colocan en las denominadas 'cajas' que son de diferentes colores, para distinguir entre las medidas que son aceptadas a largo plazo y las que deben ser recortadas.

Pero ninguna de estas cajas permite que los países en desarrollo se protejan de forma específica contra las importaciones que tienen un impacto directo en los pequeños productores campesinos

e indígenas.

La 'caja de desarrollo' propone precisamente la protección de los pequeños productores campesinos indígenas y plantea que los países en desarrollo protejan con aranceles la producción y los precios de productos nacionales, pues los pequeños productores contribuyen notoriamente a la seguridad alimentaria del país. También se podría subvencionar los mismos productos.

Con este tipo de iniciativas, Bolivia podría, sin sanciones de la OMC, aumentar sus aranceles a los productos agrícolas al 40% (actualmente es de 10%). La caja de desarrollo podría aún aumentar este porcentaje y dar más estabilidad a esta medida.

Al aplicar esta política, aumentaría el precio de los productos importados en un 30%, dando así mayor margen a los productores campesinos e indígenas de nuestro país, aliviando su auto-explotación y generando ingresos complementarios. Esto podría aliviar el trabajo extra de las mujeres.

La corriente que más toma en cuenta la posición de las mujeres propone la *soberanía alimentaria*. Más que ser una propuesta trabajada por unos estudiosos, es un movimiento de los mismos productores, quienes plantean de manera crucial que la producción de alimentos sea mediante sistemas diversificados, de base campesina.

La soberanía alimentaria da el derecho de definir a cada pueblo, respecto a sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación. Los pueblos tienen que proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional. Donde más énfasis ponen, es en el mercado doméstico y en el autoabastecimiento, bajo el

lema "comer lo que producimos y producir lo que comemos".

Esto no significa oponerse al comercio internacional de productos agrícolas en la medida en que se comercialicen los excedentes, pero que esto sea de forma equitativa y que no distorsionen los precios de mercados ajenos, asegurando la autosuficiencia y la salud de los pueblos.

Estos conceptos promueven mayormente las mujeres, porque son ellas quienes tienen que alimentar de manera sana y sustentable a sus familias. En cada uno de los planteamientos de los movimientos, que promueven la soberanía alimentaria, siempre aparece como un eje importante la participación de la mujer en todos los espacios donde se definen políticas agropecuarias. De hecho la organización que más promueve la soberanía alimentaria en Bolivia es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

Contrariamente a las políticas agrarias actuales, que perjudican a los pequeños productores campesinos e indígenas y ponen un peso extra sobre el trabajo de la mujer rural, existe una propuesta con una visión equitativa: entre campo y ciudad, entre mujeres y hombres y entre los diferentes pueblos. Además de considerar la sostenibilidad de la agricultura y la salud humana.

Lamentablemente este enfoque de soberanía alimentaria está lejos de poder ser implementado en nuestro país o a nivel internacional. Sin embargo existen propuestas de políticas aplicables que pueden aliviar la exclusión, aumentando la protección para aquellos productos que producen los pequeños productores. Esta protección ayudaría al alivio de la pobreza campesina en general, y a disminuir la sobrecarga de trabajo para las mujeres.

Seguridad y soberanía alimentaria

Eduardo Mendoza • CIPCA SANTA CRUZ

Según la FAO, las personas que no tienen acceso a suficientes alimentos nutritivos e inocuos se estima actualmente en 840 millones, de los cuales 11 millones en países industrializados, 30 millones en países en transición y 799 millones en países en desarrollo.

La seguridad alimentaria constituye un derecho humano fundamental, guarda relación con seguridad nutricional, pues no sólo es importante que las personas accedan a los alimentos sino también a la calidad de los mismos. En este sentido, hay seguridad alimentaria cuando las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos, que les permita satisfacer sus necesidades y sus preferencias alimentarias.

El concepto seguridad alimentaria tiene algunas ambigüedades y es cuestionado por los movimientos campesinos indígenas. La mayoría de los gobiernos y algunas ONG "humanitarias" consideran que cuando hay suficientes alimentos en cantidad y calidad para la población hay seguridad alimentaria. Eso pue-

de ocurrir en un contexto de dependencia económica (por las donaciones de alimentos) y de inhibición o pérdida de las capacidades de producción agrícola y cultural.

Tales cuestionamientos han llevado a acuñar el concepto de Soberanía Alimentaria, para indicar el control de la población y las comunidades campesinas e indígenas sobre su producción alimentaria, en cantidad y calidad suficiente. Eso quiere decir: alimentos compatibles con la nutrición y con la cultura. El tipo de comida es un elemento fundamental de una cultura. Soberanía Alimentaria alude al derecho de los pueblos a la alimentación, reforma agraria y el acceso a los medios de producción, el comercio mundial y la seguridad alimentaria, sistemas alimentarios sustentables

y gestión de los recursos naturales, nutrición, diversidad productiva y cultural de la alimentación: bienestar alimenticio, oposición a la privatización de la vida y los organismos genéticamente modificados (transgénicos).

Reclamar la soberanía alimentaria no es una cuestión exclusivamente cam-

Soberanía Alimentaria alude al derecho de los pueblos a la alimentación, reforma agraria y el acceso a los medios de producción, el comercio mundial, la seguridad alimentaria y la diversidad productiva.

pesina indígena, sino ciudadana. No sólo porque el modelo alimentario y sus consecuencias económicas, ecológicas y sociales afecta a todos. También porque, ejercer de forma plena la soberanía alimentaria supone reconstruir las relaciones de intercambio en múltiples direcciones: campo-ciudad; campesino-consumidor; autóctono-inmigrante; Norte-Sur; subsidios agrícolas-ayuda alimentaria; generaciones futuras-pobres de hoy; medio-ambiente según el Norte-agroecología según el Sur. No es suficiente demandar a los gobiernos que antepongan la soberanía alimentaria al libre comercio. Se precisa también un cambio de actitud ante el consumo propio, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias de

nuestros hábitos y formas de vida. El mal llamado "subdesarrollo" en nuestros países es la otra cara de nuestro modelo civilizatorio de consumo.

Estos son algunos de los temas que sostienen las posiciones de las Organizaciones Económicas Campesinas (OECA), y la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC). Los mismos fueron parte de análisis y debate en el Seminario Agricultura y Tratados de Libre Comercio, organizado por CIOEC y CIPCA dentro del Encuentro Social Alternativo llevado a cabo el 12 y 13 de noviembre de 2003 en Santa Cruz de la Sierra.

Transgénicos: el impacto negativo en el agro y en la economía de los pequeños productores

NELE MARIEN • CIPCA General

Intentaremos responder a la pregunta ¿cuáles son las amenazas y las oportunidades de los transgénicos para los pequeños productores campesinos e indígenas en Bolivia?

Cuando nos referimos a los pequeños productores agrícolas en Bolivia, hablamos casi en su totalidad de campesinos indígenas. Los grandes agroempresarios en general, en cambio, no son descendientes de los pueblos originarios. En ese sentido, hay una división en los intereses de los pequeños y los grandes productores que se manifiesta en el ámbito económico y cultural.

Se analizará el impacto de los transgénicos en cuatro aspectos: I) los pequeños productores como categoría económica, II) lo cultural-productivo, desde la perspectiva de los pueblos originarios, III) los grandes productores, IV) el nivel estatal, tomando en cuenta la condición de Bolivia como un país en desarrollo.

Los productos transgénicos tienen cada vez mayor presencia en el mundo. Bolivia no escapa a esa tendencia: ya han habido experimentos de campo con la producción de la papa transgénica y últimamente con la soya. En los mercados hay gran cantidad de productos transgénicos, importados legal e ilegalmente.

Por una parte el Estado boliviano cuenta con una moratoria para las pruebas de campo

de los transgénicos; por otra, ha dado permiso en ciertos casos para que se efectúen estas pruebas. En las políticas del comercio internacional contamos con un panorama similar: se prohíbe el ingreso de los transgénicos pero en casos particulares, como al trigo de EE.UU., se dio el visto bueno para su ingreso. En conclusión, podemos afirmar que el país carece de una regulación y de políticas claras al respecto.

Desde la visión económica de los pequeños productores, quienes registran los índices más bajos de Latinoamérica, el incremento en la productividad y la reducción del riesgo hacia algunas enfermedades y plagas, -supuestos beneficios de los transgénicos-, puede parecer una gran oportunidad.

Pero también hay que conocer los pormenores de la producción con transgénicos: en primer lugar, las semillas son patentadas y no hay permiso para usarlas de manera deliberada, por lo tanto sus costos son elevados. Los pequeños productores tienen temor de tener que pagar patentes y eventualmente multas por el uso de semillas transgénicas. En síntesis no cuentan con recursos para poder pagar tales costos y no tienen la seguridad de que usando transgénicos puedan incrementar su productividad y peor aún sus ventas lo suficiente para

poder cubrir los gastos para las semillas.

En segundo lugar, el uso de agroquímicos específicos, sin los cuáles los transgénicos no pueden prosperar. Las mismas compañías transnacionales controlan las semillas y los agroquímicos, de modo que tienen control total sobre los productores. Esto también es un factor que hace incrementar el costo de producción.

En tercer lugar, la obligación de mecanizar la cosecha y postcosecha, debido a que muchos productos transgénicos son muy sensibles al manipuleo. Actualmente los pequeños productores no cuentan con maquinaria agrícola adecuada.

Lo expuesto crea una doble dependencia económica y un círculo vicioso. Primero, la dependencia de los productores de la empresa proveedora de semillas y agroquímicos, y segundo, de la venta en los mercados internacionales, necesario para poder generar los recursos para los insumos requeridos. Justamente en este aspecto los pequeños productores bolivianos tienen grandes desventajas. Su productividad es mucho menor que la de los países vecinos y el rezago tecnológico es cada vez creciente. Aún con la introducción de nuevas tecnologías, por ejemplo los transgénicos, el apoyo estatal y la ciencia en los países vecinos es mayor. Además, los pequeños agricultores tienen que lidiar con las condiciones adversas del clima y la falta de integración caminera.

Como ya se ha indicado, los pequeños productores son a la vez miembros de los

Los transgénicos constituyen una nueva forma de sobre-explotación de la tierra, contraria a la cosmovisión de los pueblos originarios que tienen como base el respeto por la naturaleza y la biodiversidad.

pueblos originarios, mantienen fuertemente sus tradiciones y aspectos culturales en la producción agrícola. Cada uno de los 40 diferentes pueblos originarios en Bolivia tiene sus propias creencias, ritos y visiones sobre la agricultura. Pero hay un elemento que todos tienen en común: el respeto por la naturaleza y

la biodiversidad, un respeto que mayormente tiene componentes religiosos.

Este respeto impide ver la tierra como un elemento de explotación para el lucro inmediato, por el contrario lo ve como una parte fundamental de su cosmos, a la cual hay que cultivarla pidiéndole lo necesario y razonable. Una explotación excesiva usando fertilizantes y agroquímicos es ir en contra de las propias características de la madre tierra, que tiene sus propios nombres en las diferentes culturas. Los transgénicos vienen a ser una nueva forma de sobreexplotación de la tierra, contraria a la cosmovisión de los pueblos originarios. Estos pueblos además, cultivaron durante siglos una variedad impresionante de plantas nativas y han basado su producción en la diversidad.

Por ejemplo Bolivia cuenta con 100 variedades de papa. Al lado de las plantas domesticadas por los pueblos originarios, Bolivia también cuenta con una diversidad de vida silvestre inmensa. Por este motivo existe gran temor que con la introducción de transgénicos vayan a desaparecer muchas variedades de plantas criollas y los conocimientos ancestrales debido al cambio de una producción con diversidad y control biológico por el

monocultivo, necesario para poder cultivar transgénicos. A esto se añade otro gran peligro que es la contaminación de plantas tradicionales con transgénicos.

Un sector que tiene interés en los transgénicos son los grandes empresarios, quienes se especializan en la producción y exportación de productos como la soya. Ellos también producen en menor escala que la de los países vecinos y hasta el momento no trabajan con transgénicos. Están interesados en aumentar su productividad para ser más competitivos en los mercados internacionales, pero también tienen que tomar en cuenta las características de los mercados internacionales. Muchos países -mayormente europeos-, no quieren comprar productos transgénicos e inclusive han devuelto barcos enteros de granos porque había indicios que no estaban libres de los transgénicos. Los consumidores de esos países rechazan a los transgénicos, por lo tanto, el sector de los agroexportadores tendrá que definir si prefiere aumentar rendimientos o si prefiere mercados seguros.

¿Cuál debería ser la posición del Estado boliviano respecto de los transgénicos? Un Estado tiene que tomar en cuenta sus fortalezas, debilidades y la identidad de sus habitantes para diseñar políticas de desarrollo rural.

Como debilidades podríamos detectar: la

muy baja productividad agrícola, los problemas para exportar (falta de mercados y baja capacidad de producción en grandes cantidades, en especial de los productos típicos de los pequeños productores).

Otro problema es la identidad de los productores originarios que no concuerda con las actuales políticas mundiales de globalización y que parece ser opuesta a los intereses productivos del sector de los (relativamente) grandes agroempresarios.

Pero como en la otra cara de la misma moneda, estas debilidades se podrían convertir en fortalezas, si el Estado empieza a considerar las características específicas de los productores originarios. Más que entrar en una carrera de tecnologías sin salida, la agricultura boliviana se podría basar en los conocimientos ancestrales y en la diversidad productiva de las diferentes culturas. Se podría convertir a Bolivia en un país con producción agroecológica, promocionando sus productos exóticos y saludables gracias a la enorme biodiversidad.

Sobre los transgénicos, son necesarias políticas coherentes y con visión de largo plazo. Bolivia tiene potencial para perfilarse como país especializado en la producción agroecológica, respetando la cultura de los pueblos originarios y encontrando los "nichos" de mercado de los productos más saludables.

Planes de desarrollo: formulismo burocrático en municipios rurales

Eduardo Mendoza • CIPCA SANTA CRUZ

Los Planes de Desarrollo Municipal han caído en el formulismo burocrático al convertirse casi exclusivamente en requisito para que los gobiernos municipales accedan a recursos de coparticipación tributaria del Tesoro General de la Nación. Lejos de la visión de los propugnadores de este tipo de instrumentos para el desarrollo municipal, de las aspiraciones de la población y de lo que se percibe como instrumento privilegiado para la gestión municipal eficiente.

La visión de desarrollo que se consigna en muchos Planes de Desarrollo Municipal es un enunciado lírico que pocos prestan atención, los planes y programas traducen acciones y proyectos que rara vez se ejecutan, pues hay otras prioridades asignadas por leyes que tienden a vulnerar la autonomía municipal. A título de conocer "participativamente" la demanda de la población, anualmente se realizan reuniones en las que se recogen las demandas de la población, que luego tienen que ser priorizadas y presentadas al ejecutivo municipal; entonces ¿para qué sirven los planes de desarrollo muni-

cipal si la recurrente y urgente demanda de la población marca del "norte" del desarrollo municipal? Si esto es así, entonces es suficiente que simplemente se realicen las Programaciones Operativas Anuales y no los Planes de Desarrollo Municipal.

Los Planes de Desarrollo Municipal son bonitos documentos hechos cada vez con mayor calidad técnica y de edición, también cada vez más inútiles en manos de autoridades municipales. Y eso se percibe así por la escasa importancia asignada por dichas autoridades no sólo a la hora de realizar las Programaciones Operativas Anuales y los presupuestos municipales sino también a la hora de presupuestar su formulación o su ajuste. Los Gobiernos Municipales obvian asignar recursos confiando en los recursos de la cooperación internacional.

Hasta la contraparte local se trata de conseguirla mediante subvención de otros organismos. Por lo tanto, ¿interesan o no los Planes de Desarrollo Municipal?; si interesan para acceder a los recursos del Tesoro General de la Nación pero no para proyectar el desarrollo del municipio, el cual está

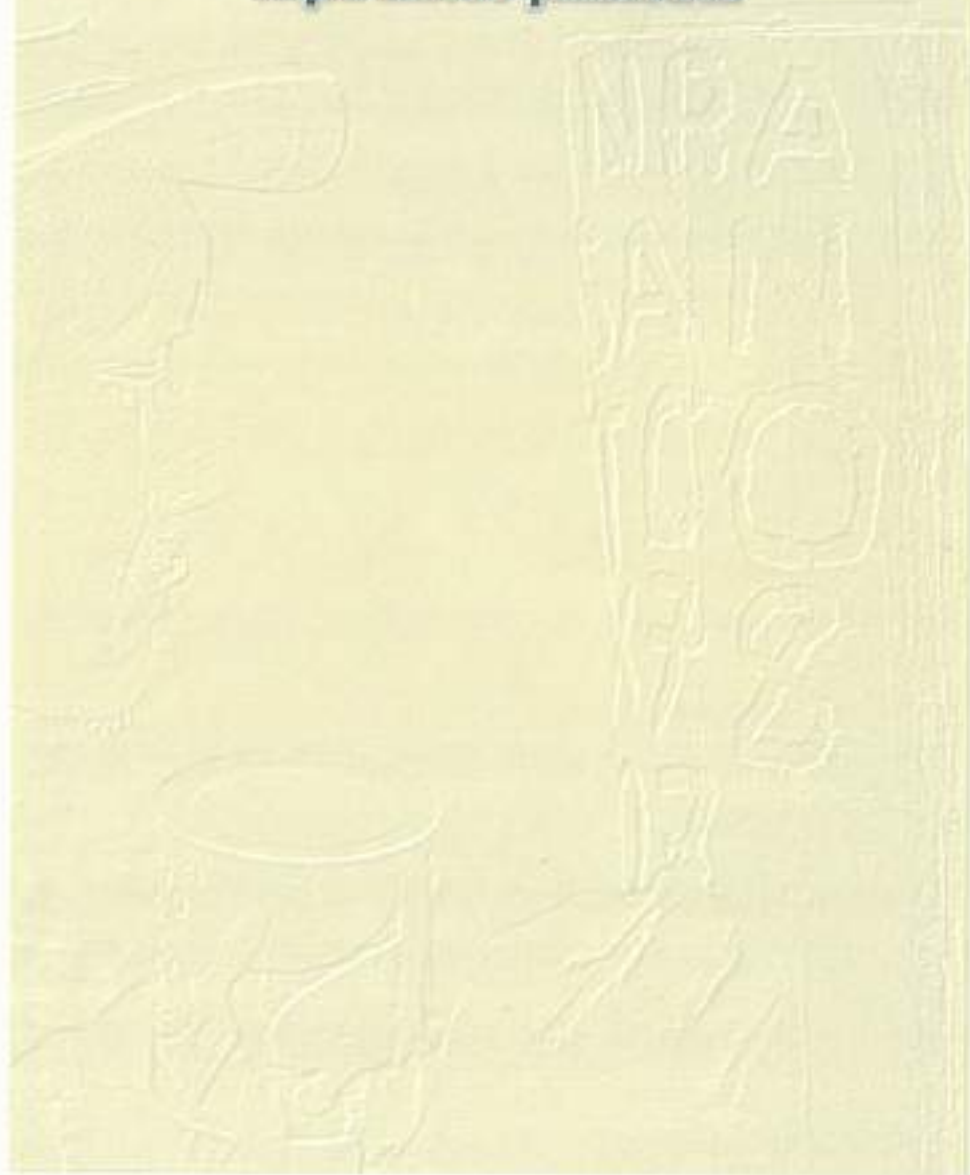
Los Planes de Desarrollo Municipal son bonitos documentos, pero también, cada vez más inútiles en manos de autoridades municipales. Se percibe así por la escasa importancia asignada por dichas autoridades.

sujeto a prácticas "consultivas" periódicas. Estas prácticas se denominan, en la jerga de la ley de participación popular, generación de la demanda, priorización de la demanda, articulación de la demanda, presentación de la demanda, etc., términos que vienen acompañados de un lenguaje cada más "técnico" y esotérico para la campesinos indígenas y sin ninguna proyección más allá de las necesidades inmediatas de la población o de las relaciones clientelistas fomentadas por algunos gobiernos municipales.

Recuperar el sentido de la participación popular, de la autonomía y de la gestión muni-

cipal es una necesidad urgente y prioritaria para establecer las pautas que posibiliten lo que la población espera: un verdadero desarrollo municipal. Los planes son instrumentos para ello, y la población de los municipios rurales los necesita en su verdadera concepción, al margen de ciertas prácticas utilitarias orientadas a captar recursos fundamentalmente para cumplir obligaciones delegadas o para gastos operativos o corrientes. Lamentablemente esta es la orientación más o menos generalizada, e incluso inducida por algunos organismos públicos.

**TIERRA - TERRITORIO,
SIGUE SIENDO PRIORIDAD**



Ley INRA: ¿Vigente en los valles?

Edwin Alvarado • CIPCA Cochabamba



Comunidades del valle cochabambino regularizan los títulos de propiedad de sus tierras. (Foto: CIPCA Cochabamba)

Las organizaciones campesinas de Cochabamba en sus diferentes niveles y vertientes, hasta el 2001, habían venido rechazando sistemática y tajantemente la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como INRA, considerándola "Ley Maldita", proscrita incluso de las discusiones en seminarios y congresos campesinos. Pero en el último año

hubo un notable cambio de actitud, provocado por una realidad que rebasaba las posturas y consignas de las organizaciones sindicales y, seguramente, por los graves conflictos que se han suscitado en diferentes puntos del país por la demanda de tierras. Los sucesos de Pananti, El Choré y Monte Verde, entre otros, que revelan la cara más dura en la batalla por

la tierra, parecen aportar a una conciencia más clara respecto a lo que significa la tenencia legal de la tierra y la distribución equitativa de la misma.

Los campesinos cochabambinos fueron históricamente los primeros beneficiados por la Reforma Agraria de 1953, que ellos mismos forzaron con sus masivas movilizaciones. Pero, transcurrido medio siglo, ya no hay mucha correlación entre los títulos "indivisibles" entonces otorgados y la realidad actual, fruto de tantas herencias y otras transferencias. Por eso, apremiados por la necesidad, han ido presionando a sus organizaciones y dirigentes a una apertura respecto a sus derechos actualizados sobre la tierra. Esto se ha explicitado en diferentes resoluciones de congresos campesinos de subcentrales y centrales, que indican que la titulación y saneamiento de sus propiedades pasen "a estudio", a una fase de averiguaciones, consultas y debates para la aplicación de la normativa establecida por la Ley INRA. En otros casos las resoluciones campesinas indican que "...las personas que trabajan por varios años en sus terrenos deberán tramitar la titulación de sus tierras".

La expresión más contundente de apertura respecto al tema se dio en el primer ampliado de una de las corrientes de la Federación Departamental de Campesinos, que entre otras resoluciones señala: "Aprobada la intervención o participación de la Federación Sindical Única

de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) al proceso de saneamiento de tierras con la condición de que sea gratuita de oficio".

Este cambio de actitud, frente a la Ley INRA y la temática de tierras, avizora nuevas perspectivas para un tratamiento del tema a nivel de políticas públicas y desde la visión de los valles, tan difícil de abordar en el pasado reciente. Será importante que el saneamiento, el acceso y la distribución de las tierras se haga, en lo posible, a través de mecanismos locales, como las organizaciones campesinas e indígenas acordaron en llamar el "saneamiento interno". Otro asunto es el acceso a tierra en nuevos asentamientos de comunidades que ya no tienen suficiente cantidad de tierras.

Un tema ineludible será el referido a los parques nacionales, que cuentan con comunidades campesinas en su interior. Otro ámbito más amplio es el anteproyecto de ley de reformas a la Constitución Política del Estado, en actual discusión. Este es el momento de empezar a formular nuevas propuestas, teniendo presente que sólo se podrán concretizar una vez pasada la coyuntura electoral. Pero en esta temática de la tierra y del régimen agrario habrá que estar también muy alerta, pues en las altas esferas del Gobierno hay una fuerte tendencia a diluir las conquistas logradas en el pasado.

La lucha por la tierra y los recursos naturales

Hernán Ávila • CIPCA Beni

Conclusiones o mitos como 'los indios mojeños son mansos', 'el espíritu del nativo oriental es pacífico', 'indígenas y ganaderos somos complementarios' o el 'moste para el indígena y la pampa para el ganadero' son algunos enunciados, que quizá, de forma intencionada muchos escritores o personajes fríos utilizan aún como discurso cívico para ocultar el fondo de una realidad de abusos, avasallamiento de tierras y atropellos en contra de los pueblos indígenas.

A su vez la historia colonial y republicana en el oriente boliviano, ha mostrado y enseñado a los pueblos indígenas que el Estado, en su dimensión represiva, configura un tipo de violencia que se torna estructural al negar y reprimir la participación y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, es decir como si se tratase de un espacio exclusivo del mundo *karayana* (población criolla o descendiente de extranjeros, no indígena), que maneja las instituciones y cuyo accionar hace que la administración de justicia o el cumplimiento imparcial de la ley no exista para los indígenas y sea siempre favorable al sector que lo detenta. En este sentido, las movilizaciones en busca de la Loma Santa, como la búsqueda de libertad, de justicia, aunque ésta sólo sea en el ámbito comunal, se explican como acciones de escape que tratan de evitar el conflicto como forma de adaptarse a la realidad mojeña y reducir el choque intercultural. Fenómenos como la sumisión ciega del indígena al patrón ganadero -que lo considera plenipotente-, acompañado con elementos de pérdida de identidad, son otras estrategias de adaptación del indígena al nuevo contexto.

Las recientes acciones de presión en las comunidades mojeñas de las TCO y Territorio In-

dígena tienen su origen en las grandes movilizaciones (marchas). Son estos los espacios en los que se han ido gestando formas más conscientes y desarrolladas de propuestas de tipo político, reivindicaciones históricas y objetivos concretos de los pueblos indígenas.

La lucha por el territorio y sus recursos naturales, por la participación real en instancias de decisión política, son quizá los elementos centrales de las movilizaciones. En este contexto, las acciones de presión protagonizadas por los pueblos mojeños en los últimos tiempos han adquirido una dinámica propia, lo que inicialmente se trataba de acciones comunales tímidas y sólo utilizadas como el último recurso para frenar el avasallamiento de ganaderos o de madereros, se constituyen hoy en el mecanismo más eficaz de garantizar la integridad del territorio y los recursos de las comunidades.

El 2002 fue el año de las pericias de campo y esto develó serios conflictos en torno a la posesión de la tierra y el territorio, lo que ha provocado un conjunto de movilizaciones permanentes. Las comunidades han sido protagonistas de diversas acciones desde las movilizaciones nacionales, regionales y locales hasta acciones y medidas de hecho que han derivado en la intervención de mediadores. La lucha por el territorio, más allá del caluroso discurso de algún dirigente, ha tomado cuerpo y se ha transformado en acciones que fuera de cualquier hecho planificado, dirigentes y/o comunarios las llevan adelante para proteger lo que consideran suyo, quedando claro para el avasallador, que los tiempos en Mojos han cambiado y que no será fácil hacerse de tierras comunales o de los recursos naturales.

Una odisea con sol y frío por la titulación de las TCO

Miquel Valdéz • CIPCA Condillera



Un dirigente guaraní en el contexto social durante las pericias de campo en el saneamiento de una TCO. (Foto: Marco Harbón)

En las pericias de campo, los comunarios y comunarias guaraníes han venido demostrando su valor y esfuerzo en procura de cumplir un nuevo desafío y mandato, que su organización les asigna para responsabilizarse de esta parte de la "defensa de su comunidad y el territorio".

DIARIO DE CAMPO:

Antes de la salida de los primeros rayos del sol, Edgar Sánchez, comunario de Guirapayeti, ajusta su morral, su galón de cbicha, la bolsa de pito, su chavara para cubrirse del sol, una frazada, la linterna, un cuaderno para apuntes, encendedor, coca, mochila y un par de mudadas.

Todo esto para emprender una nueva concentración en el marco de las acciones del equipo de territorio que durante veinte días estarán ausentes del hogar, antes se despide de su mujer, que ya está acostumbrada a ese trajín, pero en esta oportunidad no se ahorra en recomendaciones porque el lugar donde se desarrollarán las actividades no será el Cbaco, sino los predios de los patronos que durante años establecieron relaciones de conflicto con los comunarios.

Es que Edgar Sánchez ha sido convocado por el Mburuvicha Guasu, junto a otros comunarios por tener ciertas habilidades, (conocimiento sobre el terreno, sobre los "terceros", antecedentes de algún conflicto, límites, etc.) para constituir el Equipo de Territorio. Se concentran en una determinada comunidad desde donde se realizan las operaciones tanto del equipo en cuestión como de la Brigada del INRA, responsable de las pericias de campo. En esta comunidad empieza un inusitado movimiento, por el ajetreo de las pericias y por constituirse en el núcleo de atención de la zona. Abundan las reuniones y asambleas, se toman decisiones, todos confluyen allí para comer y dormir...

Grande es la solidaridad que genera esta dinámica. Las otras comunidades envían aportes como gallinas, maíz, chivas, buevos, cumanda, cbarque, semilla, etc. Por su parte la comunidad receptora se organiza en grupos de trabajo para el recojo de agua, provisión de leña, preparar la comida y la estadía del equipo. De igual manera el Mburuvicha comunal con otros comunarios se suman al Equipo de Territorio para el análisis de los predios que serán sometidos a pericias de campo y encasar la estrategia para la siguiente jornada.

El conjunto del Equipo es consciente del sacrificio que tendrán que realizar durante casi ocho meses, en los cuales descuidarán sus familias, salud, cbacos, animales, etc. sacrificio por

el cual no recibirán retribución económica. Lo hacen por la convicción del legado que dejarán a los niños, mujeres, hombres y ancianos de su pueblo demandante de tierra-territorio. Por ejemplo, durante cinco días dos compañeros recorrieron kilómetros y kilómetros por haciendas para la verificación de mojones y el conteo de ganado en condiciones climáticas adversas. Unas veces son los fríos "surazos" de invierno; otras, el asfixiante calor del árido monte cbaqueño. Pero se sufre en busca de recuperar más tierra para la TCO.

Las audiencias son el momento más importante y tenso. Se desarrollan en los predios de los terceros, patronos normalmente agresivos. Este evento es de gran importancia dentro de la etapa de pericias de campo porque permite determinar las futuras acciones técnico-jurídicas con relación al terreno.

Después de una agobiante jornada entre discusiones y conciliaciones, en la noche se retorna al campamento para recién almorzar (a las 9.30 pm) y luego tener un breve descanso. Antes, sin embargo, se realiza una reunión para evaluar y analizar los acontecimientos del día, como también planificar el accionar sobre los predios que serán intervenidos al día siguiente.

La defensa del territorio tiene un elevado costo económico y aún mayor esfuerzo comunal, lo que ha generado un proceso de movilización permanente al interior de la organización, mediante asambleas, reuniones y capacitación de equipo, revalorizando el papel de la organización indígena y el involucramiento de hombres y mujeres en temas de vital importancia para el pueblo guaraní.

Pese a tanto esfuerzo, los primeros resultados alcanzados a la fecha son poco alentadores, como muestra el cuadro de las 7 TCO, intervenidas hasta ahora sobre 19 solicitadas.

Demanda TCO	Superficie Demandada 12/09/1998	Superficie titulada	% Ha tituladas sobre demandas	Superficie titulada: Ha/person
Kajependi	93.578	63.000	67,32	6,6
Iupaguasu	161.979	28.076	17,33	14,4
Isoso	3.711.647	135.721	3,66	12,3
Tentayapi	160.605	23.000	14,32	47,5
Itikaraparirenda	174.608	7.116	4,08	4,3
Avatire Guakareta		3.316		2,4
Tapiete		24.840		
TOTAL	4.302.417	285.069	6,63	

Fuente: Elaboración propia

Se advierte que las demandas de los pueblos originarios han sufrido recortes permanentes, a pesar de que las recomendaciones de los Estudios de Necesidades Espaciales sugieren superficies mayores a las tituladas actualmente. Por ejemplo, en Iupaguasu donde se recomendaron 66.000 Ha, la superficie titulada alcanzó a 28.000 ha, y en Charagua Norte donde el informe recomienda 414.328 Ha, sólo se titulará un máximo de 70.000 ha, como resultado del saneamiento.

El proceso de saneamiento de tierras se ha visto entrabado por la falta de voluntad política del Gobierno para definir el conflicto relacionado con la carga animal, puesto que la propuesta indígena para la región del Chaco es de 3,92 Ha/UA, en contraposición al sector ganadero que exige básicamente para la misma ecología, entre 12 y 42 Ha/UA. El antagonismo de las propuestas ha generado un estancamiento en el proceso de saneamiento de las TCO, porque una modificación de la carga animal significará mayor espacio consolidado en favor de los hacendados, en desmedro de las aspiraciones de los pueblos originarios.

El ordenamiento jurídico tiene la misión de

resolver con equidad e imparcialidad el problema de la elevada concentración de tierras en manos de pocas familias que detentan amplias superficies de tierras de engorde e improductivas, que no cumplen la función económico social exigida en las disposiciones legales. Pero en la práctica, para la mayoría de las comunidades guaraníes se va reduciendo a darles el título legal de lo poco que les quedó tras la expropiación ganadera.

Pero no todo ha sido negativo. El proceso de saneamiento ha permitido que las organizaciones indígenas propicien una movilización permanente sobre esta problemática, que conozcan la situación jurídica de la tierra ocupada por terceros y puedan desarrollar nuevas estrategias de negociación. La titulación de sus territorios es un problema eminentemente político. Debe ser enfocado, por tanto, de manera simultánea y complementaria, desde esta acción local con la Asamblea del Pueblo Guaraní y desde un nivel regional y nacional, en el marco del Desafío, que se refiere a "influir en la formulación y ejecución concertadas de políticas nacionales y departamentales que involucren al desarrollo rural sostenible".

Norte amazónico: los frutos de la lucha por la tierra

Julio Uriaportina • CIPCA Norte



Después de muchos años, la tierra va pasando a manos de campesinos e indígenas. (foto: CIPCA-Norte)

Las tierras y el aprovechamiento de los recursos naturales del norte amazónico del país -el departamento de Pando, la provincia Vaca Díez del Beni y el inmenso municipio

de Ixiamas del Norte de La Paz- de hecho estaban en manos de los barraqueros y empresarios que hábilmente la mantuvieron así por más de un siglo, expandiendo la fama cauchera, castañera, palmitera y maderera de la región, sin dejar beneficio alguno para los pueblos y habitantes de esta gran estepa verde llamada Amazonía.

No quisieron reconocer que para miles de familias campesinas e indígenas el extractivismo y la pequeña producción agrícola son sus principales y únicos medios de subsistencia y que también tienen derecho a ser propietarios de un pedazo de tierra y aprovechar los recursos naturales. En la provincia Vaca Díez hay 2.416 familias campesinas e indígenas aglutinadas en 176 comunidades y en el departamento de Pando hay 292 comunidades que agrupan a 6.800 familias.

Pero como no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo aguante, con la presión realizada

a través de la tercera marcha campesina e indígena "Marcha por la Tierra, Territorio y los Recursos Naturales", demandando la aplicación de la Ley INRA, a partir del 13 de octubre del año 2000, en Pando, y desde el 24 de enero del 2001, en la provincia Vaca Díez del Beni, se dio inicio a la primera fase del saneamiento de tierras del Norte de Bolivia. Con este proceso serán beneficiarias de la titulación aproximadamente 375 comunidades, las mismas que demandan en global una superficie de 3.290.000 hectáreas.

Durante las gestión 2001 se ha saneado y titulado la TCO de los pueblos Yaminahua-Machineri y las tierras de la comunidad campesina San Pedro de Bolpebra, en Pando, sumando un total de 43.000 hectáreas de una superficie demandada de 60.000.

Aunque el camino del saneamiento de tierras y la titulación es escabroso, se está avanzando en cuatro polígonos (Bolpebra, Filadelfia, Bella Flor y Puerto Rico) de los nueve establecidos en Pando y en uno de los cuatro definidos en la provincia Vaca Díez. Esto permite afirmar que ya se están cosechando los

primeros frutos después de una larga y difícil preparación del huerto. Hasta el momento se han realizado las pericias de campo para el saneamiento de tierras en 128 comunidades, de las cuales 70 tienen informe de campo y 16 comunidades cuentan con evaluación técnico-jurídica; es decir, estas últimas están a un paso de la exposición pública de resultados y su titulación.

CIPCA Norte está apoyando todo este proceso, junto con otras instituciones, trabajando de manera cercana sobre todo con las organizaciones campesinas de la provincia Vaca Díez y también con la Federación de Pando. Da asesoramiento y capacitación para el saneamiento simple y provee recursos humanos, incluyendo el apoyo de una abogada en Cobija, la distante capital de Pando.

En contraste con los años anteriores, las comunidades campesinas e indígenas se van fortaleciendo. Cuando concluya este proceso con la entrega de Títulos de Propiedad a las comunidades beneficiarias se habrá hecho justicia y cumplido la Ley INRA.

La lucha por la tierra, una tarea conjunta

Eulogio Núñez • CIPCA SANTA CRUZ



Organizaciones campesinas e indígenas priorizan la distribución de tierras.
(Foto: Julio Franco)

El 12 de noviembre de 2001, en Santa Cruz, se conformó la Mesa Técnica de Tierra-Territorio, una red de instituciones privadas de desarrollo social que se creó con el fin de encarar acciones en forma conjunta sobre la problemática de

la tenencia de la tierra y el territorio, desde una perspectiva favorable a las organizaciones indígenas y campesinas. La conforman más de una docena de instituciones y las principales organizaciones campesino indígenas de la región.

El acontecimiento decisivo para gestar esta instancia, fue la sistemática sobre el problema de la tenencia de la tierra que se traslucía a través de los medios de comunicación. La articulación peligrosa de los grupos de poder y latifundistas del Oriente boliviano en contra del movimiento campesino indígena puso en alerta a las instituciones, sobre todo por el accionar violento y en complicidad con algunas autoridades políticas y judiciales bajo el paraguas de la Cámara Agropecuaria del Oriente, el Comité Pro Santa Cruz y el Movimiento Autonomista "Nación Camba" que aglutina a muchos que en años anteriores se apropiaron de grandes extensiones de tierras, despojando de su hábitat a muchos de los pueblos indígenas.

La Mesa Técnica de Tierra y Territorio juega tres roles importantes: denunciar en el ámbito nacional e internacional la violencia y la impunidad en los conflictos por la tenencia de la tierra, generar propuestas concertadas sobre la problemática de tierra y los recursos naturales e informar y concienciar sobre la temática a la opinión pública.

En poco tiempo de funcionamiento, la Mesa Técnica ya ha logrado buenos resultados, entre ellos la investigación y denuncia sobre la masacre a campesinos sin tierra de Pananti, donde se evidenció el brutal asesinato de 6 dirigentes sin tierra y un niño, más el saldo de 20 heridos por armas de fuego de uso militar. Se pudo descubrir que la masacre fue ejecutada por sicarios y paramilitares pagados por terratenientes del Gran Chaco de Tarija que tuvieron el encubrimiento de autoridades de los poderes ejecutivo y judicial. La denuncia fue presentada a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Conferencia Episcopal de Bolivia para que a su vez, ellos puedan pedir a organismos internacionales que intercedan y realicen una investigación profunda e impar-

cial sobre estos hechos sangrientos.

Otra acción importante fue la participación con voz propia en la Cumbre por la Tierra convocada por el gobierno, oportunidad en la que se dio a conocer la posición de la Mesa respecto a la problemática de la tenencia de la tierra en el país y en especial en la región de tierras bajas de Bolivia.

Asimismo se encaró una campaña radial y televisiva alternativa buscando el equilibrio de la información sobre los conflictos por la tierra que fueron noticia nacional.

También se contribuyó en la realización de diferentes encuentros y eventos con dirigentes campesinos e indígenas para analizar y generar propuestas concertadas sobre la problemática. Esto permitió también contrarrestar las acciones violentas de los empresarios del agro y de los grupos de poder.

Las perspectivas a futuro de la Mesa Técnica es elaborar y ejecutar una estrategia de comunicación en el ámbito local, regional, nacional e internacional y continuar con el apoyo a las organizaciones indígenas y campesinas en la generación concertada de propuestas sobre la tenencia de la tierra y el territorio.

Saneamiento de tierras: más sombras que luces en la gestión Banzer-Quiroga

Eduardo Mendoza, Eulogio Núñez • CIPCA SANTA CRUZ

Se va un gobierno sin resolver una de las cuestiones cruciales para el desarrollo rural sostenible como es el saneamiento y titulación de tierras. A seis años de la promulgación de la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, los avances son muy escasos. Solamente se ha saneado alrededor del 10% de la superficie del país, pese a que el plazo se agota, toda vez que la ley estipula un plazo de 10 años, a partir de su promulgación en 1996, para lograr el saneamiento y titulación de todas las tierras.

Según las autoridades del Instituto Nacional del Reforma Agraria (INRA), los recursos de la cooperación internacional y del Tesoro General de la Nación resultan ser insuficientes, se refieren a una cifra cercana a los 40 millones de dólares americanos. El avance en la titulación de algunas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) para los territorios ya ocupados por pueblos indígenas son ínfimos, pues de 17 millones de hectáreas se titularon apenas 2,8 millones. Peor aún son los avances respecto al sector campesino, lo que no permite apreciar positivamente la aplicación de la ley INRA.

Las esperanzas de que la Ley INRA sea el instrumento para profundizar y corregir los efectos negativos de la Reforma Agraria del 53 distribuyendo mejor y equitativamente las tierras se diluyen gracias a estos resultados. Es una constatación de que la estructura agraria y de tenencia de la tierra no ha sido afectada. Detrás de todo ello se encuentran fuertes intereses políticos y económicos de grupos de poder, quienes han logrado influenciar en la aplicación de la ley de manera que sus intereses no sean afectados: designación de autoridades

del INRA, del Tribunal Agrario Nacional, no afectación de propiedades latifundarias que no cumplen la función económico-social, conversión de concesiones forestales en propiedades, etc. logrando todavía detentar grandes extensiones de tierras.

Entretanto, el lento y distorsionado proceso de aplicación de la ley y la nula respuesta a las grandes demandas de miles de campesinos para el acceso equitativo de tierras son factores que contribuyen a la generación de un ambiente de tensión en el medio rural. Los conflictos de posesión y tenencia de tierra son recurrentes, se multiplican y, algunos, desembocan en hechos de violencia como los casos de Monte Verde, Canandoa, La Enconada, y el más paradigmático, el de Pananti en la provincia Gran Chaco de Tarija, en el que 6 campesinos sin tierra y un niño resultaron muertos. No es casual, entonces, enterarnos últimamente de los enfrentamientos y sentimientos beligerantes entre bolivianos a causa de las tierras. Estos acontecimientos son en realidad la consecuencia de problemas no resueltos por las vías legales en los despachos de las autoridades.

La desigualdad, el uso inadecuado y poco sostenible de la tierra son las principales causas de la pobreza de amplios sectores de la población, y ello tiene su correlato con la ausencia de políticas de desarrollo rural que en estos 5 años de gestión gubernamental, se acentuaron. Por ello, una de las más oscuras sombras de este gobierno es la falta de respuesta a los problemas de la distribución y acceso justo de las tierras.

Carga animal: el gran pretexto de los ganaderos del Beni

GERMÁN HUANCA • CIPCA Beni

En abril del 2002, la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Técnica del Beni ha realizado una propuesta de carga animal para el departamento del Beni, elaborado por el M.Sc. René Ibáñez. En ella, después de hacer las consideraciones generales, ambientales, biológicas, económicas, jurídicas, técnicas y todo aquello que justifique la tenencia de tierra en el Beni, ha recomendado las siguientes relaciones de carga animal para praderas nativas bajo un sistema de producción extensivo, o sea ¿cuántas hectáreas son necesarias para soportar una cabeza de ganado vacuno?

La carga animal para campos inundables con 80% de especies forrajeras y existencia de arrocillo (*Lasia bexandria*) 4,74 Ha/UA/Año, (UA= Unidad Animal) carga animal para campos en semialtura con 70% de especies forrajera y predominancia de Gramalote (*brizopodium pallens*) 8,59 Ha/UA/ Año, carga animal para alturas o cascajes con 60% de especies forrajeras y predominancia de especies de *Andropogon* 17,38 Ha/UA/Año. En el documento se hacen ajustes que elevan la carga animal a 7,3; 13,2 y 26,8 hectáreas por cabeza de ganado vacuno, respectivamente.

Este es el principal argumento sobre el cual la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI) intenta convencer a la opinión pública y a las autoridades del INRA para justificar las inmensas cantidades de tierra que están en poder de ganaderos que en muchos casos no justifican su tenencia. El razonamiento de que el Beni es una zona eminentemente ganadera no se justifica si ampliamos la visión de desarrollo, la extracción

de inmensas cantidades de productos maderables que muestran el potencial en rubros de largo plazo que a creces su rentabilidad es muchísimo más que los 12 \$us. que pueda reportar la ganadería por hectárea sin descontar sus costos.

Si bien se justifica que la opción es la carne biológica, esto no debe separarse de los criterios generales de la eficiencia económica. Si una cabeza de ganado producida en la tercera categoría de tierra (alturas o cascajes) requerirá cerca de 18 has, y al cabo de 2 años tan solo vale 100 \$us. en el mercado, entonces el valor generado por hectárea será de 2,7 \$us. por año, en consecuencia la decisión racional puede ser incluso de no optar por este recurso o emprendimiento productivo y ver alternativas como la captura del dióxido de carbono y otras.

Como quiera que sea, los principales cuestionamientos a este "estudio" son: a) la potencialidad de un recurso no debe eliminar de llano la existencia de otro, en todo caso la propuesta debe considerar el recurso agua, forestal y turístico; b) a medida que los costos de oportunidad de otros rubros sean mejores, habrá que cuestionar cualquier posición a nombre de la ecología que lo único que pretende en este caso es consolidar tierra para unos cuantos y c) la ganadería de forma extensiva, no está de la mano del empleo, es expulsora de mujeres y mantiene un sistema económico, social y político de servidumbre. Y en el caso del Beni, estos indicadores lo que pretenden es cumplir la función económica social (FES) para así justificar la tenencia en el proceso de saneamiento de las tierras.

Trampas del INRA en El Choré

Eulogio Núñez • CIPCA SANTA CRUZ

Uno de los logros de la tercera marcha indígena y campesina por el territorio y los recursos naturales de junio del 2000, fue que el gobierno levante la prohibición de asentamientos humanos en un área de 211.632 ha. en la zona "desafectada" de la Reserva de El Choré donde viven unas 7.000 familias procedentes del interior del país y nativas del lugar, desde hace más de 20 años. También en esta oportunidad, el gobierno se comprometió a iniciar de inmediato el proceso de saneamiento y titulación de esas tierras.

Han pasado 18 meses y hasta la fecha no existe ni un metro cuadrado de tierra con título de propiedad. La justificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fue la falta de recursos económicos para acelerar el proceso de saneamiento y titulación de tierras. Sin embargo el INRA ha manejado cerca de 50 millones de dólares provenientes de la Cooperación Internacional y del Tesoro General de la Nación. Además, muchos analistas señalan que el verdadero problema no es la falta de dinero, sino, tiene que ver con el cuoteo político y la ocupación de los cargos jerárquicos del INRA por parte de delegados de la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO) y la Confederación de Agropecuarios de Bolivia (CONFREAGRO).

Otra prueba es el avance que ha tenido el saneamiento de tierras hasta el momento. Uno de los mandatos de la ley INRA, contempla un plazo de 10 años para concluir el proceso de saneamiento de las tierras, pero han pasado 5 años de su aplicación y el INRA no ha saneado ni el 10% de las tierras.

Esta realidad se ve reflejada en la zona de

El Choré, agravada porque el INRA está pretendiendo consolidar derecho propietario de las tierras en favor de las empresas petroleras, madereras y terratenientes, pese a que por ley, en la Reserva Forestal de El Choré, nadie puede tener derecho propietario, ni ellos ni los campesinos que en todo caso están en el área "desafectada" de la Reserva. En esta área "desafectada", donde sí los campesinos pueden tener derecho propietario sobre la tierra, la situación también se complicó debido a que en las pericias de campo los funcionarios del INRA se parcializaron con los hacendados, alterando las fichas FES (Función Económica Social) y Catastral que les permitiría acceder a mayores extensiones de tierra, por lo que los campesinos del norte de Santa Rosa tuvieron que realizar fuertes movilizaciones a fin de impedir que esto se consolide.

El proceso de saneamiento de tierras en El Choré está paralizado. Sin embargo, se sabe que el INRA está realizando levantamiento de información técnica y jurídica en predios de algunos latifundistas a pedido de parte, sin que participen los dirigentes campesinos en el control social y pese a que la demanda de las organizaciones campesinas contempla, con anterioridad el compromiso con el INRA de realizar un saneamiento interno a nivel de todos los sindicatos agrarios y la corrección de las irregularidades existentes. Como se puede apreciar, el accionar del INRA ha sido dudoso y tiene muchas trampas en la aplicación de la ley y demandará mucho tiempo para ser resuelto el problema principal que es la posesión y tenencia equitativa de la tierra.

Ya no están solos: los mojeños llaman la atención del país

JUAN CARLOS ROJAS • CIPCA BENÍ



Inteligentes mojeñas en el río Apere, parte de su TCO.

(Foto: Arturo Casarón)

"Un contexto regional adverso y con el incremento de la tensión entre los dirigentes, había necesidad de evitar desenlaces fatales. Identificamos que lo mejor era sacar la problemática fuera de Mojos y del Beni..."

Era la tarde del 23 de agosto, cuando Lino Noza, vicepresidente del TIM, recibe una

llamada por radio desde la Comunidad de Puerto San Borja indicando que habían tomado la camioneta del INRA y requerían su presencia, por ello pide que lo traslademos. Habían decidido tomar acciones de hecho: se cansaron de las irregularidades del INRA y su parcialización con los ganaderos; esta vez contaron las

vacas del ganadero Ivo Ruiz sin presencia indígena siendo que estaban en el lugar, habían suspendido las clases para que todos participen de las pericias de campo, esperaron pero los del INRA nunca les avisaron que harían ese trabajo, cuando volvieron por la tarde luego de caminar bastante, los abogados les dijeron que ya se habían contado las vacas. Las negociaciones empezaron en Puerto San Borja y terminaron en la Prefectura de Trinidad después de 11 días de tensión.

Las reacciones inmediatas fueron la paralización del saneamiento en el TIM y TIMI, este último territorio no tenía problemas; una denuncia en la Policía en contra de los dirigentes y el acople de ganaderos, autoridades e INRA para "sentar la mano" a los indígenas. Sentimos una soledad única porque éramos nosotros contra todos, es decir dos subcentrales, CIPCA y CEJIS contra ganaderos, autoridades departamentales, INRA y medios de comunicación. Estaba claro el panorama con un contexto regional adverso y con el incremento de la tensión entre los dirigentes, había necesidad de evitar desenlaces fatales. Identificamos que lo mejor era sacar la problemática fuera de Mojos y del Beni para obtener apoyos efectivos y equilibrar un poco el contexto.

Una comisión acompañó a tres dirigentes del TIM y TIMI a la ciudad de La Paz, visitaron a parlamentarios, a la defensora del pueblo, a la asamblea de derechos humanos, la mesa técnica de tierra y algunos medios de comunicación, quienes se mostraron interesados en la temática y los invitaron a que visiten Mojos. Así fue, llegaron el 10 de noviembre y realizaron su trabajo hasta el 12 del mismo mes, del año 2002. La presencia de esta Comisión

infundió ánimos a las organizaciones y mostró a las autoridades locales que aquellas tenían apoyo en otras instancias. La Comisión visitó las comunidades en conflictos, conversó con la gente, capacitó sobre derechos humanos, escuchó las denuncias de voz de los protagonistas y recibió documentación de respaldo. Además visitó a las autoridades locales y coadyuvó en la constitución de un Comité Local de Derechos Humanos. Una semana después fueron difundidas por la red Unitel y el diario La Prensa, noticias de la situación en Mojos y una conferencia de prensa de la Comisión en La Paz que daba a conocer las denuncias recibidas y anunciaba acciones. Esto ocasionó dos efectos: puso la problemática de Mojos en el ámbito nacional y autoridades nacionales asumieron las denuncias presentadas para encararlas. Inmediatamente vino la reacción de los ganaderos con los intentos de expulsión a CIPCA y la agresión al padre Enrique y a nuestro compañero Arturo.

Por la solidaridad demostrada, sabemos que ya no estamos solos. En este proceso, logramos cambios en las actitudes de las autoridades, de los propios ganaderos y tenemos una opinión pública que nos apoya. Las denuncias sobre el Gobierno Municipal serán investigadas por la Unidad Técnica de Lucha Contra la Corrupción, la Defensoría ha aceptado 7 de las 39 denuncias y va a emitir resoluciones al respecto. Las denuncias sobre educación serán incorporadas en la investigación que realizan sobre la Reforma Educativa y las denuncias de tierra-territorio serán encaminadas ante el INRA y en una Mesa de Diálogo, comprometida por el Prefecto del Beni.

IV Marcha: una mirada desde los valles

Edwin Alvarado • CIPCA Cochabamba



Organizaciones campesinas e indígenas sensibilizaron a la opinión pública sobre la Asamblea Constituyente a su llegada a Cochabamba. (Foto: CIPCA)

Un conjunto de demandas de diversos sectores aglutinados en un movimiento con reivindicaciones políticas y técnico jurídicas relacionadas con la tierra y el territorio resurgió en 2002. Aquel movimiento inició un proceso cuyas dimensiones no podían preverse aún, ya que los medios tenían sus ojos en las pro-

puestas de reformas a la Constitución Política del Estado planteadas por el Consejo Ciudadano de Notables.

Esa propuesta de los "notables", en teoría consultada con la sociedad, desnudaba una vez más la exclusión de sectores sociales, sea por no haberseles consultado o por no consi-

derar los intereses campesinos; aunque incorporaba también un enfoque de género, fruto de la acción de instituciones comprometidas con la temática.

Por otra parte fue severamente criticada por no profundizar la participación política de la ciudadanía. En respuesta a esta propuesta surgiría la demanda de una Asamblea Nacional Constituyente con participación de todos los sectores, con el anuncio de la IV Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales.

Pero la IV Marcha traía mayor riqueza en su plataforma de demandas. Desde Cochabamba se hizo un seguimiento al grupo multisectorial liderado por Marisol Solano, Bienvenido Zacu, Luis Alberto Rojas, Manuel Cuadiay, Sixto Bejarano, Miguel Peña, Carlos Cuasace, Ignacio Parapaino, Pablino Parapaino, Diego Marquina, Miguel Calizaya, Limer Paz, Carlos Chupunavi, Florencio Orko, María Ester Pérez, Ana Flores y Nemesia Achacollo, dirigentes comprometidos con la demanda de archivo, anulación y modificación de diversos instrumentos técnico jurídicos que estaban claramente destinados a favorecer a quienes de manera fraudulenta han accedido a superficies latifundarias de tierra y recursos naturales por su vinculación con los entornos de poder.

El acompañamiento de CIPCA Cochabamba se inició en la población de Cristal Mayu, con despachos informativos para medios de comunicación de alcance regional y nacional. Inmediatamente se desplazó una avanzada de comunicación que asiste a diferentes medios de prensa, radiales y televisivos con un doble propósito: generar solidaridad de la población con la marcha para preparar su arribo a Cochabamba e informar detalladamente a la ciudadanía respecto a las demandas

de la IV Marcha.

Luego de un primer intento de algunos medios por desvirtuar la Marcha (reflejado en la orientación de la información publicada) se logró abrir un espacio claro, legítimamente conquistado por el trabajo de la avanzada de comunicación que centralizó una red de medios de comunicación de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, fundamentalmente, cuidando siempre el enfoque técnico jurídico de las demandas de los y las marchistas para mantener su legitimidad.

Fue delicada la información relativa a la fractura interna que procuró el Gobierno al movimiento, suscribiendo un convenio con algunos dirigentes del MST en Cochabamba, mientras ganaba tiempo demorando el reinicio de la Marcha hacia La Paz en improductivas negociaciones con los dirigentes que, por otro lado, tenían marcada urgencia de alcanzar la columna de marchistas del CONAMAQ que aguardaba en Caracollo.

La mejor lección ofrecida por los marchistas de la multisectorial fue la claridad y transparencia con que se explicó a los medios de comunicación, la necesidad coyuntural de seguir en camiones el tramo desde Parotani hasta alcanzar al grupo CONAMAQ. Algunos se desgarraron las vestiduras por esa "marcha sobre ruedas", pero no dijeron nada por el grupo que habiendo salido también de Santa Cruz nueve días después que la multisectorial llegó mucho antes a Cochabamba.

¿Quiénes estaban, dónde, con quién, contra quién y por qué? El tiempo juzgará la claridad y pertinencia de la lectura de ese fragmento de la historia que, a la postre, dio pie para sensibilizar a la "opinión pública" sobre la temática de la tierra y el territorio durante todo el año.

¿Cuánta tierra tenemos?

Eduardo Acevedo • CIPCA Cochabamba



El saneamiento y titulación de tierras en los valles avanza con dificultades.

(Foto: CIPCA Cochabamba)

Las organizaciones comunales, en sus Congresos y Ampliados, entre las varias resoluciones que sacan, permanentemente resuelven que se debe realizar los trámites necesarios para tener los títulos ejecutoriales de los terrenos dentro las comunidades. Los más ancianos y ancianas se preguntan: ¿Qué superficie de tierra tengo?. Los jóvenes dicen: ¡Quiero tener mis papeles al día!. Unos pocos sostienen: ¡Quiero ser propietario de mis terrenos!. Algunos dirigentes, hombre y mujer, dicen: ¡Debemos rechazar la

Ley INRA, porque está contra nosotros!

Las comunidades de la Subcentral Challaque (Sacabamba, Provincia Estéban Arze, departamento de Cochabamba) y la Subcentral de Julio (Torotoro, Provincia Charcas, departamento de Potosí), han solicitado el apoyo de CIPCA, para conocer con mayor profundidad la situación de sus tierras.

Lo primero que encontramos fue que hay familias que son muy susceptibles a mostrar sus documentos de propiedad, lo guardan bajo

"siete llaves" y otros los tienen sin mayor cuidado.

Frente a estas susceptibilidades y la urgencia de conocer los antecedentes legales, se ha realizado visitas a las oficinas del INRA en Cochabamba y Potosí, para recabar los expedientes de afectación de tierras. Después de realizar un análisis de los documentos, en muchos casos se pueden ver procedimientos y plazos ilegales, influencias, parcialización de las autoridades agrarias. Se encuentran trámites inconclusos y muchas veces dejados a medias, seguramente por falta de recursos económicos para seguir los tediosos caminos de la legislación boliviana. En varias reuniones se analizó los expedientes y la documentación encontrada.

En las subcentrales de Challaque y Julo, luego del análisis con los comunarios y dirigentes, se encontró diversas situaciones complejas, a saber:

a) Hay familias que no poseen las superficies que indican sus Títulos Ejecutoriales; b) No están ocupando las parcelas que indican sus Títulos Ejecutoriales; c) Están en posesión de tierras comunales que les fueron distribuidas por las organizaciones sindicales y no tienen ningún documento, sólo consta en el libro de actas del sindicato; d) Han comprado tierras de otras familias y sólo tienen un documento privado de transacción; e) Poseen Títulos Ejecutoriales en calidad de herederos.

Por tanto, en ambas regiones de nuestro ensayo existen familias que quieren realizar el saneamiento de tierras, para consolidar su propiedad, o tienen la expectativa de recuperar tierras; existen también familias que no quieren realizar el saneamiento porque pueden perder sus posesiones.

En la Subcentral de Julo, el problema de saneamiento de tierras, se presenta más complicado. Cuando la Reforma Agraria realizó la afectación de las haciendas, dejó un 30% de las mejores tierras para el ex-patrón.

Un artículo de la Ley de Reforma Agraria, disponía que "El dueño de la propiedad afectada tiene el derecho de escoger las porciones que más le convengan para la constitución de su propiedad...". Otro artículo disponía que "el propietario está facultado a elegir la parte que más le convenga. Esta superficie es inafectable".

Hoy, los piqueros consolidaron las pequeñas propiedades que adquirieron mediante compra al ex-patrón, también esos mismos piqueros fueron dotados de tierras en calidad de pegujaleros. Varias familias trabajan en la propiedad del ex-patrón en la modalidad de arrendamiento, mientras algunas familias han incrementado la superficie de sus terrenos mediante compra de tierras al ex-patrón.

Por eso, en la Subcentral de Julo existen comunarios que quieren realizar el saneamiento de tierras, porque quieren afectar las tierras del ex-patrón, reagruparla y redistribuirla entre los afiliados a los sindicatos de las ex-haciendas. También existen comunarios que no tienen interés en realizar el saneamiento porque piensan comprar las tierras al ex-patrón y así asegurar su posesión.

Con estos antecedentes podemos concluir que el proceso de saneamiento de tierras en los valles puede generar enfrentamientos al interior de las organizaciones, comunidades y las familias, entre sus hijas, hermanos, compadres, padrinos y ahijados. Al mismo tiempo constatamos que tarde o temprano es un tema que habrá que afrontar.

Carga animal en el Altiplano

ANTONIO COPA y VALENTÍN PÉREZ • CIPCA La Paz



Cambiar la forma de producción ganadera en el Altiplano tiene como objetivo cuidar la tierra.

(Foto: CIPCA La Paz)

Determinar la cantidad de pasturas que requiere cada cabeza de ganado en el Altiplano para una adecuada alimentación, es un tema sin duda polémico. Los estudios realizados por los investigadores han tratado de determinar la superficie óptima de pasturas que requiere cada especie animal; los datos de la carga animal que se maneja en el altiplano en

diferentes tipos de pasturas, son: 0,8 a 1 cabeza bovina por 1 ha de chilliwar y pajonal; 3 a 4 cabezas de ovinos por 1 ha de gramadal y pajonal; 3 cabezas de camélidos por 1 ha de pajonal, chilliwar y gramadal.

Pero si los animales del altiplano dependieran solamente de los pastos nativos no tendríamos ni un pedazo de tierra para cultivar.

Por tanto, la población andina estaría muriendo de hambre. Si existen animales como bovinos, ovinos, porcinos y camélidos es gracias al uso adecuado de los pastos nativos, del agua y la introducción de especies forrajeras altamente adaptadas a este ecosistema: cebada, avena, alfalfa y pastos perennes (pasto llorón, festuca alta, pasto ovello, ray gras y phalaris). También hay que decir que la cercanía de las comunidades a la ciudad de La Paz favorece para la adquisición de complementos alimentarios balanceados.

En el norte del altiplano del departamento de La Paz, en las proximidades del lago Titicaca, existe una presión demográfica preocupante y con mayor razón la carga animal se incrementa. Los aymaras han sobrevivido por siglos en esta parte del territorio boliviano (Kollasuyu) gracias a las estrategias de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y productivos. En los tres últimos años de intervención en los municipios de Ancoraimas y Guaquí, hemos logrado introducir el cultivo de alfalfa en el sistema de producción familiar.

El comportamiento del cultivo es altamente positivo. Se ha logrado 3 cortes al año con un rendimiento promedio de 2.4 Kg. de materia seca por m² /año; lo que significa un rendimiento anual 24 Ton/ha de MS (materia seca). En las cabeceras de valle del municipio de Ancoraimas, se ha logrado 7 cortes al año con un rendimiento promedio de 4.9 kg. de materia seca por m²/año significando un rendimiento anual de 49 Ton/ha de MS.

De acuerdo a estos datos, el cultivo de alfalfa estaría en condiciones de mejorar las posibilidades alimentarias del ganado del Altiplano. Sin olvidar que la composición de

la dieta de los animales es variada. Por eso en el altiplano, es posible la producción ganadera pues los recursos forrajeros naturales también contribuyen significativamente.

La ganadería no debe depender solo de lo que dá la naturaleza, sino que el ser humano debe contribuir en las mejoras del sistema de producción pecuaria, porque la actividad ganadera implica un proceso de artificialización de la naturaleza, pero que no debe dañar el ecosistema y el medio ambiente.

Para satisfacer las necesidades humanas no se deben deteriorar el medio ambiente. Para hacer un uso sostenible de los recursos debemos acudir al conocimiento de nuestros ancestros para recuperar las prácticas sostenibles del manejo de su sistema de producción, que hicieron viables la actividad productiva del altiplano.

Para los centros de investigación, debe ser una constante preocupación encontrar alternativas que mejoren la producción forrajera, que permita aminorar la carga animal por hectárea para hacer posible un uso óptimo de la tierra.

Los aymaras han desarrollado alternativas tecnológicas a lo largo de muchos siglos; por eso han logrado sobrevivir por siglos en lugares inhóspitos, que para muchos parece increíble que se desarrolle la vida y se vista de verde la Pachamama.

Al introducir nuevos cultivos bajo sistemas de manejo de suelos tradicionales, el mayor riesgo que pudimos encontrar es lo que me dijo una señora de Guaquí "no me gusta darles alfalfa a los animales porque se vuelven viciosos, después ya no quieren agarrar otra cosa".

Identidad amazónica se mezcla con la técnica en las pericias de campo

Julio Urapotina • CIPCA Norte



Los mojones, en el proceso de saneamiento, son un símbolo alentador para las familias campesinas. (Foto: CIPCA Norte)

En los vértices de una propiedad en el proceso de saneamiento de tierras del Norte amazónico de Bolivia (provincias Vaca Díez del Beni y de Pando) todos los interesados han plantado un pequeño poste, comúnmente denominado "mojón". En las comunidades todos tienen un nombre además de tener las

inscripciones técnicas: INRA, SAN SIM, número de vértice, fecha y año de realización. Por ejemplo, en la comunidad de San Juan del municipio de Guayaramerín se puso el nombre de "El Mojón de la Mujer"; "El Conflicto" en Santa Lucía; "La Buna" en 2 de Octubre; "El Tigre" en San Lorenzo, y "El Huilón" en Ribe-

ralta; en Consuelo del Rosario, Suárez y Cambero, "El Melero" en Buena Vista, "El Flojonazo" y "La Piña" en Villa Cotoca.

En la experiencia de los promotores jurídicos de Guayaramerín y Riberalta el nombre de un mojón es fundamental -de vida o muerte- y para los delegados comunales, dirigentes y miembros del Comité Ejecutivo tanto de la Central Campesina de Guayaramerín como de la Federación de Campesinos de Riberalta, el nombre del mojón encarna la estrategia de consolidación. El mojón pintado de color amarillo confirma la posesión legal y el pintado de color rojo significa la disputa y sobreposición de derechos.

Pero conozcamos la opinión de los protagonistas: promotores, comunarios y dirigentes: "... *de este mojón donde yo vivo al otro mojón de "La Pucarara", a todo aquel que quiere entrar lo detenemos y le decimos: ¡de aquí no pasa, ni me saca una varilla ni pa' su mosquitero!*" Estaban acostumbrados los del pueblo a que los comunarios no decíamos nada, ahora medido por el INRA, es otra cosa.

Este mojón se llama "El Peleo" porque antes que llegara el INRA los de la bandita del

arroyo ya habían plantado su mojón cruzando el arroyo y nosotros no sabíamos; entonces pusimos nuestro mojón al otro lado. También sin conocimiento, a unos 50 metros estaba otro mojón de un tercero y cuando vino el INRA fue la cosa, aparecimos los tres dueños con mojones diferentes y nadie quería mover el suyo, hasta que el Topógrafo, a quien le decían "Lobito", dijo que debía colocarse un solo mojón tripartito al que le pusimos por nombre "El Peleo".

Los dirigentes no se quedaron atrás, entre ellos Don Carlos Chipunavi, ex-ejecutivo de la Federación Campesina de Madre de Dios, que en decenas de oportunidades durante los talleres de capacitación en comunidades, se expresaba sobre la importancia del nombre de los mojones: *"cuando pongan su mojón, lo tienen que bautizar, ponerle un nombre. Por ejemplo en mi comunidad "Las Piedras" en el Municipio de Gonzalo Moreno, hemos bautizado a nuestros mojones con nombres que identifican a toda la comunidad.*

El nombre de cada mojón tiene un por qué, una historia, una anécdota, una reseña histórica, un hecho real, humor, picaresca y conocimiento del terreno.

Visión Andina fue clave en el Foro del Agua, en Kyoto

MARÍA ESTHER UDAETA • CIPCA General

En marzo de 2002 se llevó a cabo el "III Foro Mundial del Agua" en Kyoto, Japón. Se trató de un espacio donde se reunieron en primer lugar los representantes de los gobiernos, como también las organizaciones internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. La visión que todos ellos han llevado al Foro ya era conocida desde mucho tiempo atrás: "el agua es un bien escaso y hay que usarlo de la manera más 'efectiva' y 'rentable' posible; la mejor manera para asignar los recursos es a través del libre mercado". Para tal efecto, estas instituciones y gobiernos plantearon: privatización del agua; pago según consumo, también para la agricultura; uso del agua para los sectores más rentables: si el agua genera más utilidad en la minería o en la industria que en la agricultura, entonces el agua tendrá que ser usada en estos sectores. Para disminuir la necesidad del agua en la agricultura, plantearon el uso generalizado de transgénicos con baja necesidad del recurso agua.

Por suerte las organizaciones sociales ya lo veían venir y se organizaron de antemano. Toda el área andina se

dió a la tarea de sistematizar la visión que existe sobre el agua desde muchos siglos, particularmente entre sus pueblos originarios.

En Bolivia se juntaron a más de 100 pequeños agricultores provenientes de las cuencas del Río Grande, Altiplano, Pilcomayo y región del Chaco, con el apoyo de la Unida de Acción Política de CIPCA en el marco de la Comisión de Gestión Integral del Agua en Bolivia (CGIAB), con el objeto de hacer una sistematización ideal. Después esta visión fue integrada con las visiones de los pueblos de Ecuador, Argentina, Chile y Perú.

Las preguntas claves que respondieron los compañeros, en grupos mixtos de trabajo, fueron las siguientes:

¿Qué es el agua para nosotros?

- Es vida, es un elemento vital, indispensable para los seres vivientes de la naturaleza.

- Es un derecho vital para todo ser viviente.

- Es un Derecho Humano

- Es un ser vivo.

Ésta es posiblemente una de las visiones que tiene más homogeneidad dentro de las comunidades indígenas y cam-

Toda el área andina se dio a la tarea de sistematizar la visión que existe sobre el agua desde hace siglos, particularmente entre los pueblos originarios.

pesinas de los andes bolivianos.

¿De quién es el agua o de quién debería ser?

- Es de la naturaleza y de dominios originarios de acuerdo a usos y costumbres.

- Es de todos los seres vivos que habitan el mundo.

- Es de la madre naturaleza: la Pachamama.

- Es de todos y de nadie.

- Es de la comunidad, por sus sacrificios.

El agua es un bien colectivo y no debe pertenecer a alguien en particular porque hace a un derecho consuetudinario (usos y costumbres), todos coincidieron en que el agua no se puede vender ni comprar como una mercancía más, de allí la expresión "es de todos y de nadie".

Sin embargo, es interesante observar las diferencias de concepción entre participantes de comunidades originarias que afirman de que el agua pertenece a los dominios originarios

y de aquellos participantes de comunidades que poseen formas organizativas basadas en estructuras sindicales no tradicionales que expresan de que el agua es de la comunidad "por sus sacrificios".

¿Un derecho para cada uso? ¿O sin derecho multiuso?

- Un derecho para todos los usos que decida la comunidad

- Un solo derecho multiuso de acuerdo a usos y costumbres

Como se puede ver, la visión andina del agua tiene una idea bien clara sobre los derechos con respecto al recurso agua. Y por primera vez, las organizaciones campesinas tenían una propuesta bien clara, bien reflexionada para llevar a Kyoto.

Y lograron que la oposición en Kyoto sea tan fuerte que el Foro -que tenía sus conclusiones ya escritas con mucha anticipación-, acabó sin atreverse a tomar conclusiones.

Plan tierra: más dudas que soluciones

JUAN CARLOS ROJAS • CIPCA GENERAL



La política actual del gobierno respecto al saneamiento de tierras no convence a campesinos e indígenas. (Foto: CIPCA La Paz)

Los distintos sectores sociales esperaban que el nuevo Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, dé agilidad al saneamiento de tierras en el país como forma de resolver los conflictos. A su vez el gobierno, tampoco mostró señales claras de que éste sea un tema prioritario, la muestra más gráfica puede ser el últi-

mo aniversario de la Reforma Agraria, que pasó sin pena ni gloria en Ucureña.

Creó un Viceministerio de Tierras, que parecía la instancia encargada de dar un renovado impulso a esta temática y se institucionalizaron algunas direcciones departamentales del INRA. El Viceministerio promovió el Plan

Tierra con los objetivos de relanzar el proceso agrario y resolver los problemas de tenencia de la tierra, para lo cual pretende distribuir 30.000 ha. a 500 familias de manera inmediata, posteriormente 700.000 ha. para 1.000 familias, y en total 500.000 ha. para 10.000 familias hasta el año 2006. Como los principales resultados visibles de esta acción.

Además, para completar esta propuesta, se contrató consultorías que elaboraron dos propuestas: un Plan Nacional de Saneamiento y un Plan de Distribución de Tierras y Asentamientos Humanos; con lo cuales se pretende tener una estrategia más global y de largo alcance.

Sin embargo, los últimos acontecimientos relativos al problema agrario dejan más dudas que certezas sobre los resultados del Plan, mientras que la poca difusión de los últimos abre las dudas acerca de su pertinencia. Los movimientos sociales siguen demandando

acceso a la tierra, con saneamiento previo o con acciones directas y posterior legalización, mientras que los sectores empresariales siguen demandando seguridad jurídica sobre las propiedades que detentan y sus inversiones.

Por otro lado, existen fuertes cuestionamientos a los resultados que arrojaron los procesos de saneamiento porque, en general, no se estaría realizando una redistribución de tierras sino más bien consolidando propiedades que no cumplen la función económico social.

Por estas razones y la conflictividad creciente a raíz de estos problemas, es urgente que tanto sectores involucrados, pero principalmente el Estado, tomen decisiones claras respecto del futuro de la reforma agraria en Bolivia como una de las bases del desarrollo rural, a tres años de finalizar el plazo para el saneamiento de tierra de todo el país, que luego de siete años, ha tenido avances insuficientes.

Tenencia de la tierra, agenda pendiente en el desarrollo rural

MARCELO ARANDIA • CIPCA CONDILLERA



Guaraníes participaron activamente en las pericias de campo para la titulación de sus TCO. (Foto: Mauro Huetado)

La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) en su artículo 64 establece que el saneamiento de la propiedad agraria es el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte; y de acuerdo al artículo 65 de la misma Ley, se establece un plazo máximo de 10 años

(a partir de octubre de 1996, fecha de promulgación de la Ley) para ejecutar y concluir el saneamiento. Ya han transcurrido cerca de siete años desde la promulgación de la Ley y no se ha saneado ni un 20% de las tierras.

Del conjunto de demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), con un total de 17.616.206 hectáreas, presentadas por diversos

pueblos indígenas sólo fueron tituladas 2.821.419 ha, es decir el 16%. Estos resultados no son nada alentadores ante la expectativa que tienen los pueblos indígenas y campesinos demandantes.

La problemática actual de la ocupación del territorio, la tenencia de la tierra, el acceso y uso de los recursos naturales es preocupante como consecuencia de la concatenación de varios factores que han incidido a lo largo de la historia, a saber: el despojo del que fueron objeto los pueblos indígenas y comunidades campesinas, la marginación que los hizo invisibles en la sociedad y especialmente en la ejecución de políticas estatales, el permanente acecho a los recursos de sus territorios, la expansión creciente de la frontera agrícola, la falta de políticas públicas que regule la problemática de la tenencia de la tierra y el uso indiscriminado de recursos naturales; además de la debilidad del Estado ante los intereses de sectores contrarios a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, etc.

Bajo esas características, el concepto de tenencia de tierra cubre una amplia problemática: existen definiciones dispares, unas que ponen énfasis en la temática de distribución de la tierra entre los diferentes actores sociales y las relaciones que entre ellos se generan y otras que hacen énfasis en las formas de derechos de propiedad, de acceso y uso de los recursos.

En ese entendido surge la figura de las Tierras Comunitarias de Origen, que según la Ley INRA la definen como "los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades inembargables e imprescriptibles".

Ante esta figura jurídica surge el cuestiona-

miento sobre si estas propiedades son de acceso común o son de libre acceso. Dicho análisis no es tan simple, pues existen territorios que conjugan diferentes tipos de propiedad, desde las más restringidas hasta las de acceso más abierto. Al interior de los mismos se complementan diferentes derechos de propiedad: la hacienda y la comunidad.

En algunos momentos se vuelven funcionales: el ganado de las haciendas ramonea en las comunidades y muy frecuentemente los comunitarios se emplean en las haciendas de forma temporal, complementando la producción de su chaco, con algunos ingresos por su trabajo en las haciendas vecinas. Lógicamente se generan también relaciones, aparte de las laborales (peón/patrón), de compadrazgo, criándose por ejemplo ganado al partido dentro de las comunidades. También es frecuente que el guaraní saque miel y se dedique a la caza dentro de las haciendas. La figura de la TCO no es en la realidad como la Ley INRA la dibuja, como un tipo de propiedad separado de los otros. Por esto es posible que, una vez titulada, las formas de uso y explotación de los recursos no cambien totalmente.

El problema es que la TCO actualmente surge como una nueva forma de propiedad, pese a que en su interior subsisten diferentes formas de tenencia que se combinan e interrelacionan generando distintos tipos de uso de los recursos y diferentes modos de gestión. Esta complejidad no es casual pues responde a diferentes contextos ecológicos, económicos, sociales y demográficos. Lo lamentable es que estos aspectos fueron pasados por alto en la formulación de la Ley INRA. El desafío actual es pensar sobre la gestión territorial desde esta complejidad. El reconocimiento de los derechos indígenas mediante la titulación de las TCO es un hecho. (Sin embargo, las condiciones de extrema pobreza y abandono de esta población no cambiarán sólo con la titulación).

Contra viento y marea: evitar que la Reforma Agraria se desvíe

JUAN CARLOS ROJAS • CIPCA GENERAL



Indígenas marcan mojones en las peñas de campo durante el proceso de saneamiento de tierras.

(Foto: Marco Harado)

Si bien la historia reciente de Bolivia ha sufrido un giro importante, la problemática de la tierra ha mantenido una constante marcada por los conflictos, las presiones hacia el gobierno y la propia actitud del gobierno. Es significativo que, a pesar de que la tierra es uno de los temas que mayor tiempo ocupa a autoridades de gobierno, éste no se ha referido al mismo en sus

mensajes oficiales ni lo ha incluido entre las prioridades de su agenda.

La experiencia de las regionales de CIPCA en el saneamiento, en diferentes regiones de las tierras bajas y la percepción de las regionales en tierras altas, aprovechando un seminario interno, nos han permitido tener una valoración acerca del curso que está tomando este tema, los proba-

bles resultados, las concepciones de los campesinos e indígenas sobre la tierra y varias iniciativas para acelerar este proceso a favor de las demandas indígenas y campesinas.

Esta reflexión colectiva en CIPCA sirvió para iniciar acciones sistemáticas orientadas a llamar la atención sobre problemas y regiones concretas. El director general del CIPCA, Oscar Bazoberry, presentó la problemática agraria y los resultados del saneamiento en el Chaco boliviano en el Seminario Internacional "50 años de la Reforma Agraria"; se escribieron artículos sobre la problemática agraria en el Chaco y la amazonía, difundidos en revistas especializadas y medios impresos; se posicionaron los problemas centrales en la Mesa Técnica de Tierra y los eventos de las organizaciones; mientras las regionales afinaron estrategias con las OC/OI.

En el marco de la Mesa de Tierra realizamos análisis de las políticas y normas que el anterior gobierno estaba empeñado en promulgar para, según ellos, agilizar el proceso de saneamiento y ofrecer seguridad jurídica a la propiedad agraria. De ahí nacen las observaciones presentadas formalmente al Plan Nacional de Saneamiento, 3 decretos supremos y una Ley que afectan al proceso de saneamiento, a un proyecto de Decreto Supremo que afecta al saneamiento del norte amazónico y al instructivo que reconoce al certificado de vacuna como instrumento válido para verificación de la FES. Estas observaciones fueron presentadas a 3 autoridades que pasaron por el Ministerio de Desarrollo Sostenible, como también a las OC/OI las que asumieron posición de rechazo a las mismas y definieron acciones de presión para lograr su anulación. Por otro lado, también las OC/OI y las regionales obligaron a las autoridades y la Mesa Técnica en varias oportunidades a asumir posición sobre sus problemas y demandas.

La coyuntura previa a octubre se tornó particularmente difícil para las demandas campesinas

e indígenas, puesto que el gobierno de Sánchez de Lozada, fruto de la "democracia pactada", contaba con una fuerte presencia de sectores ligados a los propietarios de tierra, además de representantes en el parlamento. Quizá el caso más llamativo fue el Director Nacional del INRA, René Salomón, ex asesor de la Cámara Agropecuaria del Oriente, que si bien concluyó el período de la gestión para la que fue elegido, los resultados de su paso por el INRA son claramente insatisfactorios.

Ante los resultados previsible del proceso de saneamiento, que apuntaban a que muchas propiedades debían ser recortadas por no cumplir con la FES, desarrollaron la vía más fácil, aquella de los Decretos Supremos para atacar aspectos puntuales (tierras de FFAA, patente forestal, superficies excedentarias, productores tradicionales de castaña, certificados de vacuna, etc.), pero que en conjunto tienen efectos negativos en el proceso de reforma agraria porque van en contra de la Ley INRA, principalmente contra la fuente de verificación del cumplimiento de la función económico social, como elemento central de reconocimiento de derechos. A este conjunto de propuestas, que desconoce la normativa agraria vigente y distorsiona el sentido del proceso de saneamiento, es lo que llamamos "paquete de contrarreforma".

El cambio de gobierno modificó un tanto el escenario institucional, mientras la movilización social equilibró la correlación de fuerzas. En este nuevo escenario se lograron frenar la aprobación de algunas de estas propuestas o la implementación de medidas concretas de contrarreforma; sin embargo no es suficiente, quedan varios temas pendientes. Las OC/OI, CIPCA y sus aliadas, deberán trabajar para restituir el espíritu de la reforma agraria: redistribución de las tierras y acciones de vigilancia social para que los mecanismos institucionales del Estado actúen con autoridad y equidad.

**ORGANIZACIONES CAMPESINAS
INDÍGENAS,
LOGROS y dificultades**



Mujeres guaraníes se incorporan lentamente en espacios de decisión

FERNANDO HEERDIA • CIPCA Cordillera



A pesar de los procesos de capacitación, los cargos de autoridad para las mujeres todavía son un reto. (Foto: Mario Botelho)

La exclusión de las mujeres guaraníes en los espacios formales de decisión política fue y es un fenómeno presente. Por ejemplo, durante la gestión 2001 en la zonas de Charagua Norte, Parapitiguasu, Kaami, Kaaguasu, Ingre y Guakareta, sólo hubo un 20% de mujeres en las directivas comunales, un 25% en las directivas zonales y un 20% en el nivel máximo

de la APG. Es decir, las propias políticas de la APG relacionadas a la participación de las mujeres guaraníes, no se están aplicando, a pesar de la existencia de mujeres líderes en las comunidades.

Por otro lado, la mujer aún no tiene presencia ni participación gravitante en los espacios oficiales de poder local: comités de vigilancia,

concejo municipal, juntas educativas. Este hecho dificulta que las demandas estratégicas de las mujeres puedan ser incorporadas, priorizadas e implementadas por las instancias de decisión.

En opinión de Justina Pinto, este fenómeno se presenta porque "la misma mujer, no se anima a compartir el trabajo de la casa con el trabajo de autoridad, ya que piensa que esto sólo es un oficio del hombre". Julia Fernández añade que hay una dualidad de intereses entre hombre y mujer: "Los maridos siempre andan diciendo que la mujer es para la casa y el hombre para ser autoridad. Ser autoridad significa saber leer, escribir y lo que es más importante, saber hablar frente a los demás ..."

Por otro lado, actualmente, la creciente importancia del dinero en la economía familiar y la progresiva orientación hacia el trabajo remunerado, tienden a sustituir la diferenciación cualitativa de las actividades productivas de hombres y mujeres por una valoración cuantitativa. La progresiva incorporación de

las mujeres en la esfera tradicional de trabajo masculino y la mayor responsabilidad económica que ahora asumen, no conlleva a un reconocimiento social sobre su trabajo y conocimiento. Grupos de mujeres de los diversos municipios, han llevado adelante actividades de producción y comercialización hortícola, han participado en la construcción de internados educativos, coadyuvan en campañas de vacunación para niños, han gestionado proyectos de ovinos y de transformación de granos, elaboraron propuestas para construcción de viviendas, sistema de agua potable, etc.

En Chuquisaca, la mujeres han ido más allá, su participación fue determinante en el proceso de democratización de su organización departamental. Aunque hay avances, sigue siendo un desafío, para mujeres y hombres guaraníes, ampliar la participación política pública de las mujeres guaraníes en los espacios ya consolidados de su máxima instancia organizativa como es la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

Sólo dirigentes, ¿y la organización para cuándo?...

Adolfo Morales • CIPCA La Paz



Encuentros para reflexionar sobre la representatividad de la dirigencia

(Foto: CIPCA La Paz)

En reiteradas oportunidades se escuchó hablar a varios y varias dirigentes de provincias, en representación de alguna organización (aluden muchas) o una supuesta y fortalecida federación provincial, central agraria u otra. ¿Será real?

CIPCA La Paz realizó un diagnóstico preliminar con los siguientes resultados: 4 de las

20 provincias no participan de forma permanente en la federación departamental. Son las 4 de tierras bajas, con cocaleseros y colonizadores: Nor y Sud Yungas, Garanavi e Iturralde. ¡Oh sorpresa!, de las otras 16, hay directivas de mujeres en 14 provincias, pero en algunos casos las pocas dirigentes que se "atribuyen" la representación de la provincia viven en la

ciudad de El Alto y La Paz. Tal es el caso de la provincia Muñecas, cuya ejecutiva provincial va sólo en ocasiones a la provincia para hacer algún curso y la mayor parte del tiempo reside en el centro urbano.

En realidad, de las 14 provincias con ejecutivas provinciales, solamente 8 tienen organización propia y vida orgánica junto a sus centrales agrarias, subcentrales y comunidades. Son cabalmente estas últimas las que tuvieron activa participación en las movilizaciones del sector en los años 2000 y 2001.

Estas 8 provincias con verdaderas organizaciones de mujeres, han logrado tener la fuerza necesaria para realizar diferentes acciones, estuvieron presentes en las discusiones con los hombres, plantearon propuestas que fueron incorporadas en los pliegos petitorios, estuvieron en las negociaciones con el gobierno y participaron del control en el cumplimiento de los acuerdos y convenios.

La ausencia de las organizaciones constituidas desde los niveles intermedios, ha provocado que muchas comunarias no tengan referencia de una organización a la que puedan acudir para defender sus derechos y deberes y ha permitido que algunas dirigentes tengan la potestad de presentarse en los eventos departamentales a nombre de determinadas provincias.

Un problema central es la ausencia de control por parte de las bases sobre estas dirigentas eternas, lo que provoca actos de corrupción y nepotismo.

En la actualidad está de moda la presencia de mujeres dirigentes en eventos mixtos como en congresos, en los que ya se exige la presencia de dos representantes para alcanzar mejores resultados.

Sin embargo, para lograr un rol protagónico de las dirigentes en congresos y/o reuniones, todavía hace falta seguir un proceso largo de formación y organización, debido a que existe una especie de subestimación de los hombres hacia ellas, reflejada en la desconfianza, celos y machismo e incluso acoso sexual, sobre todo en las directivas departamentales y provinciales.

La presencia de directivas en estas instancias puede ser un primer paso. Pero hay que ir avanzando también en la organización de las bases, para que todas las mujeres tengan acceso a ella y desde allí puedan plantear sus propuestas. Esta debe ser es una tarea esencial, nada fácil por cierto, que debe encarar la dirigencia departamental para los próximos años. Queda mucho por recorrer hacia un enfoque integral y equitativo para hombres y mujeres.

Democracia "desde abajo", un ejemplo del Consejo de Capitanes de Chuquisaca

FERNANDO HEREDIA • CIPCA Condillera

En la perspectiva de responder y desarrollarse en el cambiante contexto, las organizaciones indígenas demuestran cotidianamente su cohesión y madurez frente a sus problemas estructurales y la construcción de su destino. Un ejemplo de esto vivió la organización de los guaraníes de Chuquisaca.

En el año 1994 se conformó el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH), con el apoyo y bajo la conducción de un equipo técnico y líderes guaraníes de la región. Desde la constitución del CCCH, su estructura, objetivos y normas estatutarias, fueron la expresión de una organización naciente, pero sin bases firmes en las comunidades. Muchas de ellas de reciente formación por la creación de nuevas comunidades y asentamientos humanos.

Hasta el año 2000, la relación de la organización regional con las comunidades se mantuvo sin mayores dificultades. En esos siete años las relaciones externas se fueron consolidando, mientras tanto las comunidades iban creciendo y madurando en su accionar. Desde fines de ese año, la falta de comprensión de la dinámica organizativa y del surgiendo de nuevos liderazgos, los llevó a vivir momentos muy tensos. En diciembre del año 2000, se reunieron las organizaciones indígenas de la región en Muyupampa (Prov. Luis Calvo/Chuquisaca) para evaluar la marcha del CCCH y cuyo resultado derivó en la insatisfacción de los presentes. Se rechazaron los informes presentados a la asamblea por el equipo técnico y se retiró la confianza a sus dirigentes como al directorio de aquel entonces, porque se observó que avalaron acciones poco claras durante mucho tiempo. Ante esta reacción de las comunidades, los dirigentes y su equipo técnico, solicitaron un

plazo de ocho meses para cerrar proyectos, elaborar informes y poner sus cargos a disposición de las bases.

Pasado los doce meses de aquella reunión, el directorio y el equipo técnico persistieron en su indiferencia, subestimando a las organizaciones y dirigentes comunales. Ante este panorama, las 9 organizaciones zonales reunidas en asamblea, en noviembre del año 2001 y luego de realizar un profundo análisis deliberando sobre su realidad organizativa departamental, decidieron llevar adelante un proceso de democratización. Este acto político significó un paso trascendental en la vida de esta organización. No fue sólo la expresión orgánica de la voluntad popular, sino también la puesta en marcha de una nueva visión organizativa.

Sin embargo, ante la resistencia del equipo técnico y de los dirigentes salientes, el nuevo directorio del CCCH organizó y convocó a una segunda concentración departamental con la finalidad de ratificar las decisiones ya tomadas y elaborar un plan dirigido a consolidar el proceso democrático. Por la autonomía en sus deliberaciones y el autofinanciamiento, esta gran concentración tuvo sus méritos propios.

El principal aprendizaje es que la institucionalidad de las organizaciones se encuentra en la fortaleza de sus bases: en las comunidades se encuentra el poder y la debilidad de las organizaciones campesinas e indígenas. Se equivocaron aquellos que creyeron que su legitimidad se encontraba en la administración de proyectos, en la confianza de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, o en autoridades de gobierno. El nuevo directorio tiene la tremenda responsabilidad, de seguir adelante y responder ante la expectativa de las comunidades.

Sin documentos, un obstáculo para ejercer el derecho ciudadano

Iván San Miguel • CIPCA Norte

Tres organizaciones campesinas del Norte de Bolivia (Federación de Campesinos Regional Vaca Díez, Federación de Campesinos Regional Madre de Dios-Pando y la Central de Campesinos de Guayaramerín), preocupadas porque gran parte de la población de las comunidades campesinas no tiene documentos de identidad, instruyeron a las comunidades afiliadas para que realicen censos comunales con el propósito de conocer y documentar el problema que afecta a cientos de campesinos.

Los datos correspondientes a 62 comunidades (50,5 % del total de comunidades afiliadas) de las provincias Vaca Díez del Beni y Madre de Dios de Pando, muestran que en esas comunidades viven 7.109 habitantes, de los cuales 42,7 % no está inscrito en el Registro Civil; 54,6 % no tiene Certificado de Nacimiento y 81,7 % de los adultos no posee el Carnet de Identidad.

La situación es preocupante y quizás ésta sea una de las causas para la baja participación de los campesinos en las elecciones nacionales y municipales. En todo caso, la falta de documentos de identidad es un obstáculo para el ejercicio de los derechos ciudadanos también en muchas otras áreas. Otra prueba de ello es que muchos campesinos e indígenas no pueden beneficiarse del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE) por cuanto para acceder a cualquiera de los programas de empleo se requiere presentar algún documento de identidad.

Por otro lado, durante el acompañamiento y seguimiento al INRA, en el saneamiento de tierras y revisión de carpetas, se ha verificado que la falta

de documentos de identidad también afecta al derecho a la tierra; por ejemplo se ha detectado que en la ficha Anexo de Beneficiarios no se toma en cuenta a los comunarios y comunarias que no tienen Carnet de Identidad, es decir, no son considerados como beneficiarios comunales de la propiedad colectiva a pesar de figurar sus nombres en los censos comunales que presentan al INRA, los dirigentes de las comunidades y los representantes de tierra y territorio de las Federaciones de Campesinos de Pando y la provincia Vaca Díez del Beni.

Con estos antecedentes las organizaciones campesinas elevaron una demanda al gobierno nacional en la que plantearon la formulación y promulgación de 3 decretos supremos.

Un decreto que disponga la inscripción en el Registro Civil; un segundo que instruya la entrega gratuita de Certificados de Nacimiento y un tercero que disponga la entrega gratuita del Carnet de Identidad, pero para todos los campesinos e indígenas de las 551 comunidades del Norte amazónico.

CIPCA Norte ha apoyado este proceso tanto en el diagnóstico como en los tres planteamientos presentados al gobierno. Una respuesta favorable podría ayudar mucho a resolver los problemas de ciudadanía, a disminuir la ilegalidad, la informalidad en las relaciones comerciales y civiles y será un fuerte aporte para el ejercicio del sufragio universal de los campesinos e indígenas de la región. Ojalá que el gobierno atienda positivamente la demanda planteada, que no trate de electoralizar el problema y la solución.

50% de mujeres sólo en el papel

Gina Taboada • CIPCA NORTE



Las actrices dirigentes se capacitan y abren sendas para las futuras generaciones.

Foto: CIPCA Norte

Las organizaciones de campesinos del Norte Amazónico -Federación de Campesinos Regional Vaca Díez, Federación Departamental de Campesinos de Pando, Federación de Campesinos Regional Madre de Dios y Central Campesina de Guayaramerín-, han discutido la temática de la participación de las mujeres en sus mesas directivas y aprobado un mayor espacio para ellas.

El Comité Ejecutivo de la Federación de Madre

de Dios, en una asamblea ordinaria, aprobó que las mujeres pueden ocupar hasta un 50% de las carteras de la mesa directiva, al igual que la Federación de Pando. Ambas organizaciones, en sus respectivos congresos, presentarán oficialmente la decisión a todas las bases para que se ponga en vigencia. La Federación de Vaca Díez ya realizó un primer taller sobre modificación de estatutos, instancia en la que se analizó y planteó la necesidad de otorgar

mayor espacio de representación femenina en el Comité Ejecutivo. Por último, la Central Campesina de Guayaramerín, en una asamblea, aprobó que las mujeres pueden ocupar hasta el 50 % de las carteras del Comité Ejecutivo de la Central, al igual que los varones.

Sobre la escasa participación de las mujeres en las directivas de las organizaciones campesinas, con frecuencia se escucha que éstas no lo hacen porque tienen muchas trabas de parte de sus esposos, desde celos hasta el hecho de que deben cumplir con las tareas del hogar; además se sostiene de que lo que ellas puedan aprender no les servirá de mucho. Lo cierto es que ser dirigente demanda tiempo y dedicación, lo que resulta un tanto difícil para las mujeres. No ocurre lo mismo a nivel de las organizaciones comunales por cuanto las mujeres dirigentes viven en la comunidad y sólo salen de ella cuando se necesita realizar alguna gestión.

A pesar de ello, muchas mujeres se quejan del trato que reciben de sus esposos, sobre

todo en el momento en que manifiestan interés y deseo de participar en eventos de capacitación o incorporarse en alguna mesa directiva, incluso, a petición de las bases.

Esta situación nos muestra que la relación de pareja es uno de los principales aspectos en los que más se debe trabajar si se quiere aportar al cambio de las actuales relaciones de género; por tanto, se requiere generar espacios de reflexión con participación de varones y mujeres, donde se tomen en cuenta aspectos relacionados con la cotidianidad familiar, las relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos(as) y así, poco a poco, ir construyendo escenarios familiares con mayor confianza, viendo las necesidades de superación de todos los miembros de la familia.

Por último, es importante encarar procesos de transformación en las relaciones de género de una manera integral para lograr que estos procesos no tengan desfases y, de esta manera, lograr que las nuevas y futuras generaciones no carguen el tabú que tienen las generaciones actuales.

Mucha voluntad, pero grandes limitaciones para las mujeres dirigentes

Teodoro Andía • CIPCA SANTA CRUZ



Las mujeres campesinas se organizan para lograr equidad al interior del sector campesino. (Foto: CIPCA Santa Cruz)

Las mujeres de El Chorré tienen una rica experiencia en la organización de Encuentros de Mujeres que realizaron anualmente, durante dos días. En ellos reflexionaban temáticas relacionadas con sus demandas cotidianas y estratégicas, pero también constituían un excelente espacio para desarrollar habilidades que favorezcan su participación en las instancias públi-

cas, pues además hacían otras actividades como veladas culturales, campeonatos de fútbol entre mujeres y clausuras con un almuerzo familiar comunitario.

Esta experiencia favoreció la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones de la Central Única de Trabajadores Campesinos del Norte de Santa Rosa y a participar

orgánicamente en las elecciones municipales. Resultado de ello fue que, en sus cabildos, las comunidades nominaron a varias líderes como candidatas.

Posteriormente la Central Campesina incorporó el enfoque de género en su estructura organizativa, situación que se refleja en los estatutos donde expresan que la central es una organización que representa a hombres y mujeres y que su directiva debe estar compuesta por ambos géneros.

Paralelamente a este proceso, las mujeres decidieron crear la Central de Mujeres Campesinas de El Chorré, como una instancia que les permita mejorar su participación tanto a nivel de la Central de Campesinos como en los programas de las instituciones de apoyo. Al inicio de la gestión 2001, la Central crea las Carteras de Coordinadora de Mujeres y de Deporte Femenino, puestos que fueron asumidos por mujeres.

Sin embargo los tropiezos no estuvieron ausentes en los procesos de participación pública de la Central de Mujeres. Y es que la directiva de esta organización, en sus inicios, quedó acéfala ante la determinación de la máxima dirigente de retirarse a trabajar en su subcentral. Entonces las mujeres organizadas asumieron el reto de convocar a un ampliado para completar el cargo más importante de su directiva.

A la fecha, la Central de Mujeres, aunque con limitaciones, ha participado activamente en festivales culturales, en movilizaciones convocadas por la Central y en la coordinación con el Proyecto de Desarrollo Sara-Ichilo. Su

participación casi siempre reflejó el sentir de su sector, pues realizaban eventos de informe y levantamiento de demandas productivas de las mujeres.

Pese a estos avances, a fines del 2001 cuando se eligió a la nueva directiva de la Central, no fue nominada ninguna mujer. Los varones dicen que las compañeras no quieren asumir cargos y las mujeres indican que las anteriores dirigentes "no han respondido". Sin embargo, en contraste con esta ausencia de mujeres en el directorio de la Central, en un ampliado han determinado nuevamente que la concejal suplente, una dirigente de la Central, asuma por un año más la titularidad.

En un evento de reflexión entre el directorio de la Central y el equipo de CIPCA, se identificó que uno de los problemas principales que dificulta la participación de las mujeres campesinas en cargos dirigenciales, es la distancia que deben recorrer para llegar a las reuniones y que muchas veces ni existen medios de transporte para hacerlo. Como solución se planteó realizar algunas reuniones del directorio en las comunidades donde viven las compañeras dirigentes. También solicitaron que CIPCA incorpore en su equipo una mujer que apoye a las dirigentes de la central y a la organización de mujeres.

Finalmente, el directorio de la Central ha determinado fomentar la participación de las mujeres en la gestión 2002. Para ello, una de las acciones a tomar es lograr la participación de mujeres en los cursos sobre derechos ciudadanos destinados a los jóvenes, en un 50%.

La carita del futuro dirigente campesino

Silvia Candona • CIPCA Cochabamba



Participación de adolescentes en los procesos de capacitación.

(Foto: CIPCA Cochabamba)

Son aproximadamente un centenar de compañeros, entre hombres y mujeres, que forman parte de los diferentes sindicatos de la Central Campesina de Torotoro, quienes acuden a un segundo curso de capacitación convocado por la Central Campesina y CIPCA. El mismo está diseñado para jóvenes, hombres y mujeres campesinas. Todos marcha-

mos de un lugar a otro para iniciar la capacitación, debido a que no nos fue permitido utilizar el "Salón de Honor" del Concejo Municipal (pudimos observar el arrebato de los funcionarios al imaginar tanta gente en tan privilegiado lugar). Todos los presentes, muchos hombres y -como siempre- pocas mujeres, vienen al parecer antes que a un evento formal de capaci-

tación a la celebración de una festividad; sostengo esto por el ánimo festivo, la ropa y las expresiones de sus rostros.

El ambiente en el cual nos reunimos es propicio (a mi juicio): una sala grande diseñada para este tipo de reuniones, ventanales grandes, pizarra, mesas, sillones de plástico blanco y una cocina reluciente que resta aún implementar. Los colores de las paredes tonos "pastel", colores con los cuales los campesinos se desencuentran porque la primera recomendación de los encargados del cuidado de estos lugares que no han sido inaugurados todavía, es: "por favor no se apoyen en las paredes", "cuidado que ensucien" y la mirada angustiosa que parece decir: "creo que era mejor no prestarles...".

Pero todos están listos para comenzar, las mujeres tratando de garantizar el silencio de sus *waswas* (bebés), los hombres de diferentes edades con expresiones "del deber cumplido" (cada uno de ellos viene delegado por su sindicato) de acuerdo a lista, otros más jóvenes con cierta expectativa. Las sesiones a desarrollar están referidas al control social desde las comunidades, derechos humanos y el ALCA, todos los temas enfatizados por aspectos de género.

¡Ahí está!! Un adolescente entre 12 y 13 años; en los eventos de capacitación que realizamos anteriormente para dirigentes de la Central Campesina, él estuvo presente; cuando tocó el turno a las mujeres volví a verlo; en esta ocasión vienen los jóvenes y él también está presente. De entre todas las caras que veo es la que logra un sentimiento de mayor satisfacción, porque durante la capacitación se ubica en un lugar clave, rodeado por adultos

(pienso que busca protección...) y su atención durante el taller es algo que impulsa a continuar como quien dice: "con calidad".

Durante la sesión, él no se mueve como otros, pero tampoco pregunta y nuestras miradas se encuentran varias veces (creo saber que quiere preguntar.). Pero en vez que los adultos de su comunidad se preocupen por su representante, el joven demuestra preocupación por ellos y a su vez dirige el grupo. Y es más, los mayores son quienes recurren a él para despejar sus dudas antes de cualquier intervención. En los debates, luego de la sesión no participa, pero es fácil darse cuenta que él prepara a sus compañeros acerca de sus intervenciones.

Una vez que concluye el debate y todos vamos a un descanso es mi oportunidad! Porque al salir debe firmar el formulario de asistencia y finalmente le toca el turno, le pregunto su apellido y me responde *jucha sara* que en idioma quechua es "culpa del maíz" y yo continúo "*jucha sapa*, debe ser" que traducido al español es "alguien que siempre tiene culpa...". Todos quienes nos rodean rompen en una carcajada y él no ríe me mira como un niño enojado y me reitera su apellido, hace una señal a sus compañeros (que algunos bordean los 60 años) y se retiran al consabido "*pijcho*" (masticado de coca) -casi estoy segura que todavía no "*pijched*".

Finalmente, con el formulario en mano luego de nuestro breve encuentro, mentalmente pienso que aún con la expresión de un niño, con sus 1, 57 mt de estatura, con esa imagen de "pequeño gran hombre" con sus cintas y espejos en el sombrero y sus hermosos colores en la ropa, será el futuro dirigente.

Ancoraimes: la organización campesina se fortalece

Fidel Mamani • CIPCA La Paz



Planificación y control comunal en los centrales sindicales.

(Foto: CIPCA La Paz)

En la Unidad de Apoyo Campesino apoyé a la organización campesina de Ancoraimes, Provincia Ormasuyos, en reemplazo del compañero Saturnino Tola Mamani, que había ingresado al parlamento como Diputado Nacional por el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP).

Teniendo presentes nuestros desafíos de apoyo a la organización, *contribuir al fortale-*

cimiento de las organizaciones campesinas e indígenas para que respondan ante los nuevos retos y fortalecer en el ámbito municipal el ejercicio de los derechos ciudadanos de hombres y mujeres, la participación y el control social, concertamos varias reuniones con los dirigentes de las dos Subfederaciones, para programar cursos de capacitación, que se dictaron de

mayo a julio, sobre los temas: Roles y Funciones de los dirigentes (Sindicalismo Campesino), Planificación Comunal, Importancia del Estatuto Orgánico, Elecciones generales nacionales, Control Social y vigilancia ciudadana.

Concluidos los talleres a nivel de Central Cantonal y Subcentrales, en los que participaron un total de 1070 personas, la pregunta de los dirigentes era *¿cómo podemos mejorar los roles y funciones en el cargo?*. Algunos líderes indicaron que se debe elaborar el estatuto orgánico de la Subfederación, con la finalidad de promover la gestión de los dirigentes en el nivel superior, medio y de bases.

Algunos dirigentes propusieron que la organización campesina debe estar preparada para responder ante los nuevos desafíos, razón por la cual se empezó a discutir sobre la inclusión del Comité de Vigilancia dentro de la estructura organizativa de la Subfederación Sindical Única de Trabajadores Campesinas de Ancoraimes Tupak Catari. Este documento es una propuesta de la organización, que fue aprobado en el congreso orgánico de la Subfederación.

La planificación comunal, se realiza sólo en forma verbal en cada gestión de los dirigentes, no en forma escrita ni sistemática para varios años. Viendo esto, las dirigentes de la Subfederación Bartolina Sisa, llevaron adelante el recojo de las demandas de ocho Centrales

Agrarias Cantonales, con la finalidad de que exista una propuesta de agenda de género elaborada con amplia participación de las mujeres y hombres a nivel municipal: Educación Alternativa, Sanidad vegetal y animal, Cursos Agropecuarios y Artesanía. La primera propuesta de educación alternativa, educación para hombres y mujeres ha sido incluida en la Plan Operativo Anual (POA/2003) y aceptada por el Gobierno Municipal.

También interesa a las organizaciones campesinas el tema de las elecciones generales. En elecciones anteriores los votos blancos y nulos eran muy altos y esto sucedía por falta de información del sufragio a la población. Para el 2002 y fruto del apoyo organizativo la situación cambió, pues el dato más significativo indicaba pocos votos blancos en todo el municipio: 16 votos.

En cuanto al ejercicio de control social, se empieza a ejercitar la vigilancia social desde las bases, es decir que se genera análisis de la gestión del Gobierno Municipal. También ahora exigen a los representantes del Comité de Vigilancia de cada Cantón, que ejerzan los roles de control social y además exijan, a su vez al Ejecutivo Municipal. Hace un año y medio el Comité de Vigilancia era cooptado por el Gobierno Municipal y no realizaba informes a los dirigentes y bases de las comunidades del municipio. Hoy esa realidad está en proceso de cambio.

Organizaciones de mujeres campesinas crean su propio espacio de participación

Gina Taboada • CIPCA NORTE



Las mujeres combinan sus labores domésticas con sus actividades dirigenciales.

Gina CIPCA Norte

El propósito de trabajar con mujeres en organizaciones propias y mixtas, trae consigo un ajuste en todo lo que se relaciona a participación y toma de decisión, que conlleva un proceso de cambio en cuanto a estructura y manejo de su autonomía en cada una de ellas, donde el resultado esperado es que existan ambas, trabajando unidas y con mayor represen-

tación.

En el transcurso del 2002, en la provincia Madre de Dios del departamento de Pando, por primera vez se formó un Comité Ad-Hoc de Mujeres Campesinas Regional Madre de Dios, que fue posesionado por la Secretaría General de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas. Esto es resultado del tra-

bajo conjunto de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa" y CIPCA Norte, después de haber realizado un taller con mujeres líderes de las comunidades afiliadas a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Regional Madre de Dios, evento en el que también participaron algunos dirigentes.

Al mes de haber sido posesionado el Comité Ad-Hoc, con el apoyo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios, empezó un árduo trabajo: visitar a las comunidades, organizar a las mujeres y posesionar a las nuevas directivas comunales de mujeres.

Este trabajo concluyó con la realización del Primer Congreso de Mujeres Campesinas de la provincia Madre de Dios, donde se constituyó la Federación Sindical Única de Trabajadoras Campesinas Mujeres Regional Madre de Dios. Es necesario resaltar el trabajo con-

junto realizado por el Comité Ad-Hoc y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios, cuyo apoyo fue importante para la constitución de la Federación de Mujeres, puesto que esta alianza generalmente no ocurre, ya que las Federaciones mixtas tienen un cierto recelo ante el surgimiento de federaciones exclusivamente de mujeres.

En el mes de mayo del 2003 se realiza el II Congreso de la Federación de Mujeres, instancia en la que se elige la nueva directiva.

En consecuencia, el reto para las mujeres es doble, pues debe consolidar su organización y coordinar el trabajo con la Federación que es dirigida por los hombres, buscando una mayor participación y reconocimiento. Este período de cambios debe conducir a una mayor y efectiva participación femenina en las organizaciones campesinas superiores, propias y mixtas.

Diálogo y acuerdos: paquete de promesas que el Gobierno nunca cumple

Eulogio Núñez • CIPCA SANTA CRUZ

El año 2002 las organizaciones campesinas indígenas del Oriente boliviano han generado en forma concertada varias propuestas orientadas a solucionar sus problemas más urgentes, tendentes a mejorar políticas públicas de nuestro país.

Plantearon incorporar en la Carta Magna, la Asamblea Constituyente como mecanismo constitucional participativo, para reformar la Constitución Política del Estado. También elaboraron una propuesta para reglamentar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Ley 1257), en la parte referida al derecho de consulta y participación que tienen los pueblos indígenas y originarios en decisiones y acciones que les afectan. Además, formularon plataformas regionales que recogen sus demandas estratégicas. Pasaron de la protesta a la propuesta.

Posteriormente, sus dirigentes, mujeres y varones, optaron por el diálogo. Intentaron negociar sus propuestas con las autoridades gubernamentales. Pero es aquí justamente cuando empezó la etapa más dura, lar-

ga y con pocos resultados positivos. El trajín en esta fase, fue sin duda, el más ingrato porque los representantes gubernamentales trataron a los dirigentes como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase. Así lo confirmó una dirigente indígena al salir de las citadas reuniones con el gobierno: *"negociar con estas autoridades es como pedir un favor a quien no quiere hacerlo"*. Eran diálogos infructuosos que siempre angustiaron a los y las dirigentes, quienes se vieron presionados (as), por un lado, por sus propias bases que esperaban respuestas rápidas y concretas; y por otro, por las autoridades que en lugar de entablar un diálogo franco, desplegaban -como siempre- estrategias orientadas a romper la unidad de todas las organizaciones.

Durante las negociaciones, por lo general, había buena participación de hombres y mujeres dirigentes. No ocurría lo mismo con las autoridades gubernamentales que siempre llegaban tarde a la cita, muchas veces delegaban a personal subalterno sin poder de decisión o incluso enviaban a técnicos "muy expertos" que partían de la hipó-

Hechos como los ocurridos en el 2002, demuestran que las autoridades de gobierno firman acuerdos y convenios con el movimiento campesino e indígena para "atender" sus demandas, pero acaban siendo compromisos que no se cumplen nunca o son, como se dice comúnmente, "papel mojado".

tesis que los dirigentes campesinos e indígenas "no saben lo que quieren" o que "están mal asesorados", y por tanto se les debe "enseñar" para que desistan de sus posiciones y planteamientos.

Estas actitudes confirmaron que aquellas personas no conocían ni el contexto en el que estaban planteadas las propuestas. Esto y las pocas respuestas concretas a sus demandas provocaron un gradual cansancio en las dirigencias. La paciencia y las esperanzas de encontrar soluciones a los problemas mediante el diálogo se fueron agotando y las diversas organizaciones campesinas indígenas se vieron obligadas a trazar nuevas formas de presión como las marchas de protesta y los bloqueos de carreteras.

Ante los conflictos sociales las autoridades gubernamentales reaccionaron, en principio tratando de restar legitimidad por todos los medios, a las organizaciones movilizadas y sus dirigencias. La otra acción del gobierno fue distraer a la opinión pública con información distorsionada, para justificar el uso de

las fuerzas policiales y militares, violentando la vigencia de los derechos humanos. La represión gubernamental ha dejado decenas de indígenas, campesinos, obreros y soldados muertos, heridos, encarcelados y desaparecidos; los autores materiales e intelectuales quedaron en la impunidad y bajo la protección de las autoridades judiciales y políticas.

Hechos como los ocurridos en el 2002, demuestran que las autoridades de gobierno firman acuerdos y convenios con el movimiento campesino e indígena para "atender" sus demandas, pero acaban siendo compromisos que no se cumplen nunca o son como se dice comúnmente, "papel mojado". Esta forma de gobernar se repite de manera sistemática en cada régimen.

Las organizaciones sociales siempre apuestan por el diálogo. En cambio, el gobierno convoca al diálogo después de agotar y desgastar la paciencia de las organizaciones en la etapa de negociaciones, en un intento por frenar las medidas de presión más que por dar solución a los múltiples problemas sociales. ¿Hasta cuándo?

“Nos querían sacar de la lista de candidatos y ahora Inés es diputada”

IVONNE BALLESTEROS • CIPCA SANTA CRUZ

Esa es una de las frases que mencionaba, con alegría, una compañera de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Santa Cruz “Bartolina Sisa”, pocos días después de las elecciones nacionales, cuando los resultados de la Corte Electoral confirmaban la elección de Inés Miranda, campesina de origen quechua, como diputada plurinominal por Santa Cruz.

La alegría de la compañera y de muchas como ella, tiene un doble significado. Por un lado, tuvieron que sostener la confrontación de ideas y posturas en las reuniones de las organizaciones campesinas, al momento de definir las listas de candidatos plurinominales y uninominales; cuando sus compañeros estaban en la disyuntiva de reemplazar a la compañera Inés Miranda, representante de la Federación de Mujeres Campesinas de Santa Cruz “Bartolina Sisa”, por la representante de otro sector social.

Las “bartolinas” defendieron el derecho de que su representante elegida organizándose fuera nominada como candidata. Como en

anteriores oportunidades, los opositores alegaban “falta de conocimiento y de experiencia” o en su defecto sacaban a relucir sus prejuicios sobre las mujeres.

¿Puede alguien no tener conocimiento y experiencia, cuando ha participado en diferentes acciones, que reivindican sus demandas sectoriales? Hablamos de la participación de las mujeres que han estado presentes en todos los momentos y espacios de debate, elaboración de propuestas, negociación de demandas y firma de convenios con el Gobierno por la defensa de los derechos colectivos.

Participaron en reuniones, en largas jornadas de discusión, sobre temas de interés regional y nacional, caminaron junto a sus compañeros

en la IV Marcha Indígena Campesina por la Soberanía Popular, los Recursos Naturales y Tierra Territorio, estuvieron en los diferentes momentos de negociación con el Gobierno.

Son múltiples los espacios que fueron ganando como mujeres y protagonistas. Discutir sus problemas, participar en una marcha o en un taller de capacita-

Son múltiples los espacios que fueron ganando como mujeres y protagonistas. Discutir sus problemas, participar en una marcha o en un taller de capacitación, asistir a una reunión, etc. les ha ido formando y construyendo como dirigentes.

ción, asistir a una reunión, etc. les ha ido formando y construyendo como dirigentes.

Han generado espacios en los que fueron cuestionando la costumbre y tradición que las excluye de las instancias de decisión política. Vencer los obstáculos, perder el miedo a hablar y traspasar las fronteras de su cultura, aprender a negociar en sus relaciones familiares y comunales, combinar sus diferentes roles y construir liderazgos, son los frutos de estas mujeres que hoy ocupan espacios de decisión y poder.

El otro significado es que una mujer de origen indígena haya logrado ser electa como diputada, a pesar de que los pronósticos la dejaban fuera de las posibilidades de ser diputada por Santa Cruz. Así, fueron varios escenarios en los que las compañeras tuvieron que demandar un espacio de representación para

las mujeres campesinas de Santa Cruz: el de sus organizaciones campesinas, del partido y de la misma contienda electoral a nivel departamental, para finalmente sentir que sus esfuerzos no han sido en vano.

En un país donde la igualdad formal y jurídica es todavía un enunciado y donde coexisten grandes desigualdades sociales y políticas al interior de la democracia, además de discriminaciones étnicas y de género, las demandas de representación de las mujeres, y más aún, de las mujeres campesinas, constituye un reto para el conjunto de la sociedad boliviana. Por esta razón, causa alegría que una mujer campesina de origen indígena ocupe cargos en espacios de representación política. Este es un resultado más de la lucha, que continúa, por lograr la igualdad en la diferencia.

Interculturalidad en el ojo del huracán de octubre

Xavier Albó • CIPCA General



Campeñinos del Altiplano, entre los principales actores del levantamiento de octubre.

(Foto: CIPCA/La Paz)

Durante la rebelión popular de octubre y en los días siguientes, me llovieron las llamadas de periodistas internacionales con la misma pregunta: "¿Se trata de una rebelión indígena?". Mi respuesta fue matizada: "No, no ha sido una rebelión indígena sino una rebelión de carácter más general, sobre todo de los pobres contra el mal gobierno. Pero en ella los indígenas han tenido mucho que ver." Voy a relatar cómo me tocó vivirlo esos días.

La semana del 15 de setiembre estaba en Cochabamba dando un módulo sobre el carácter multiétnico de Bolivia y la necesidad de tomarlo en cuenta, en una maestría de economía. Tuve que interrumpirlo porque se realizó la primera de las muchas marchas multitudinarias contra la venta indiscriminada del gas. Yo también me asomé a la plaza principal y calles aledañas, a donde confluían miles y miles de marchistas desde los cuatro puntos

cardinales. Muy ruidosos, con gritos, slogans y petardos, pero también muy pacíficos. Los más eran de sectores populares, con sus rostros de bronce andino, pero había también estudiantes, docentes, funcionarios. El impacto final lo dieron los cocaleros llegados desde el trópico. La vistosidad policroma de las polleras de cholitas y mujeres chapareñas llenaba cuadras y cuadras. El lema central de todos era de política económica internacional. Pero quienes marchaban eran mayormente quechuas, indios o cholos.

El domingo 20 ya estaba de retorno en La Paz y ahora "la" noticia en la prensa oral y escrita era que unos pobres "turistas" habían quedado atrapados por los desconsiderados indígenas aymaras que, con sus bloqueos (por el gas y otras demandas, o simplemente para expresar su empuje y su fuerza) no les permitían dejar el paradisíaco valle de Sorata, más allá de Achacachi. Para liberarlos el Ministro de Defensa -abogado y raspután de la línea dura- armó un operativo policial y militar viajando en uno de los pocos helicópteros que puede cruzar la Cordillera Real, lo que provocó la reacción airada de los bloqueadores. El resultado, un hotel incendiado, varios muertos allí y sobre todo en Warisata, donde sigue la primera e histórica normal rural del país, que ahora funciona como intercultural bilingüe. Desde este lugar tropas especializadas de "acción inmediata" se desplegaron más allá del camino para "disuadir" a la gente local. Una de las disuadidas para siempre fue Marleni, una niña aymara de ocho años que estaba cuidando a la mamá con su *aywa* recién nacida, dentro de su casa bien alejada del camino. Miró por detrás del vidrio del cuarto y una bala le segó la vida. A la hora de la verdad los turistas eran la minoría de los rescatados. Los

más eran paisanos residentes en La Paz que habían ido a la fiesta de Sorata. Un joven alemán decía haber encontrado lo que buscaba: "turismo aventura". El dueño del hotel dijo que todos estaban tranquilos hasta que apareció el helicóptero.

El gobierno culpó de todo a los maestros y alumnos de la normal de Warisata, decidió cerrarla y concluyó que la educación en aymara provocaba ese odio entre razas. Ignoró detalles claves: Esos días la normal estaba cerrada. La causa no era el nuevo enfoque intercultural sino la falta de ese enfoque en uno y otro bando. Pocos días después la Asamblea de Derechos Humanos dirigió el rescate de otro contingente que había quedado aislado en un pueblo cercano a Sorata que también estaba de fiesta; y todo llegó a feliz término sin armas, con sólo diálogo respetuoso. Por entonces Amalia Anaya y yo estábamos dando los últimos toques al libro sobre EIB que nos había encargado UNICEF. Cuando vimos con dolor las amargas y penetrantes imágenes de Warisata, mostradas días después en (sólo) algunos medios escritos y de TV, no dudamos y dedicamos el libro "a Marleni Rojas, de ocho años, víctima de nuestra poca sensibilidad intercultural".

Semanas después, el paro y ulterior masacre de El Alto me pescó allí, en El Alto. Estábamos preparando con un colega un texto sobre "Iglesia andina inculturada e identidad", que será objeto de talleres y reflexiones en El Alto y el Altiplano aymara. Estaba en la casa del amigo y ahí tuve que quedarme cinco días, sin más comunicación que la radio y -a pocos metros de nuestra casa- los disparos de soldados para desalojar grupos y dar paso a cisternas de gasolina "ensangrentada". La radio informaba que había muertos en tal calle, por teléfono un amigo nos avisaba que a un cura amigo la

policía le había disparado un balín cuando, revestido de estola iba a reclamar a los responsables de un operativo por su brutalidad... Acabamos nuestro texto la noche del domingo 12 de octubre, "fiesta de la raza" o "de la hispanidad", como se dice ahora. Pero esa vez cerramos el documento con la frase: "Concluido el 12 de octubre de 2003, en plena masacre de El Alto".

El lunes 13, tuve que postergar una cita con una misión del gobierno de Dinamarca, que había venido a dar el visto bueno final al plan quinquenal de DANIDA sobre educación intercultural bilingüe. Estaban encerrados en el hotel Ritz, en el centro de La Paz, sin poder desarrollar su programa de visitas. Tuvimos que postergar el encuentro. Caminando me fui, por fin, a mi propia casa en otra parte de El Alto, cargado como "equeco" (el dios andino de la abundancia, expresado como un muñeco cargado con todo tipo de vituallas), con mi computadora portátil, un maletín lleno de libros y una bolsa con ropa. Una hora a pie por calles llenas de corrillos, grupos marchando, en varias partes se oía música fúnebre de gente que velaba a sus muertos. Me acerqué a uno de ellos, les dije que era cura y me pidieron un rezo por la finada: una cholita aymara de 19 años, de origen rural, a la que estaban velando en plena calle. Había subido a la azotea y se había trepado a un ladrillo para alcanzar a ver qué pasaba con tanto tiroteo y una bala de guerra le reventó la cabeza. Me subieron allá. Había todavía un gran charco de sangre junto al ladrillo. En el otro extremo de la azotea vi el agujero de salida de la bala, con algunos cabellos de Roxana. Más allá la avenida principal era una alfombra de piedras y vidrios rotos con pasarelas para peatones tumbadas para bloquear el paso de convoyes

militares. Al caminar escuché en la radio que el vicepresidente Carlos Mesa se descolocaba del Poder Ejecutivo por considerar inaceptable la matanza del día anterior, a la que él se había opuesto. Por fin llegué a mi casa.

En el templo un grupo de mujeres seguía velando a dos muertos no identificados. Me empezaron a contar historias del día anterior. Mientras Enrique -el párroco- trasladaba uno de los cadáveres en una carretilla de albañil, otro grupo traía a la posta a dos oficiales mal heridos. Habían querido abrirse camino en moto disparando al aire pero desde una honda de pastor les lanzaron una piedra certera que bloqueó la rueda y los hizo caer. Los golpearon y ahora los traían a la posta de salud. Una multitud los intentó linchar hasta que se los calmó y al fin fueron trasladados a un hospital. De noche me pidieron avisar por los altoparlantes que la gente mantuviera sus viglias y fogatas en las esquinas porque por el barrio rondaban unos desconocidos. Se oían tiros aislados. Y podría seguir horas y horas, páginas y páginas.

El miércoles nos pusimos de acuerdo con los daneses para la postergada entrevista. Ya se alistaban para pagar entre varios un helicóptero que los trasladaría al aeropuerto para irse en un avión especial. De nuevo recogí mis bártulos de equeco y caminé tres horas hasta llegar al Hotel Ritz. En unas calles los vecinos estaban abriendo zanjas para impedir el paso de carros militares. En la avenida principal empezaban a confluír marchas de juntas vecinales hacia la ciudad de La Paz. Adoloridos pero no amedrentados sino airados pedían ya la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada: "¡Goni asesino!, ¡Goni, hazte gas!". En estas idas y venidas, saber aymara me ha ido de perlas para charlar y establecer rápida sintonía

con gente mayor que no conocía. La lengua y la indumentaria femenina ha ganado realce como símbolo de identidad.

Terminado nuestro almuerzo trabajo, llegué por fin a la casa de Oscar, director general de CIPCA, para intercambiar impresiones. Estando ahí, con otro de CIPCA, nos enteramos por la TV que Ana María Campero -la ex defensora del pueblo a la que el gobierno no quiso confirmar pese al clamor universal- iniciaba una huelga de hambre. Era el principio de un movimiento de sectores de clase media, dentro de la sociedad civil, que ratificaba que el movimiento protagonizado por grupos más populares e indígenas contaba con la solidaridad de otros muchos. La masacre los decidió y aceleró el desenlace.

Allá fuimos a ofrecerle también nuestro apoyo y servicios. En ese primer piquete encontramos a otros dos antiguos miembros de CIPCA, incluido el rector de la Universidad de la Cordillera, donde funciona ahora nuestra biblioteca. A mí me pidieron recorrer los diversos piquetes que se irían formando para

explicar mi experiencia, 25 años atrás, por haber participado en una célebre huelga de hambre iniciada por cuatro mujeres mineras y que fue el principio del fin de las dictaduras militares y de la restauración de la democracia. Así lo hice en los tres días siguientes hasta que, con otros miles y miles que colmaban calles, plazas, el viernes 17 por la noche vivimos la renuncia y fuga de Goni y su cambio constitucional por su vicepresidente Carlos Mesa.

Las siguientes semanas escribí un relato reflexión que me solicitó CEJIS. Una cosa es elucubrar sobre interculturalidad desde un cómodo escritorio y otra vivirla y olerla en medio de esas convulsiones sociales. Trabajar desde ella no es un simple ejercicio académico. Es una tarea nacional urgente.

Firmé el documento el 14 de noviembre e hice cálculos: se cumplían exactamente 222 años de la ejecución del líder aymara Tupak Katari, que había cercado la ciudad de La Paz, desde El Alto. Su memoria sigue viva y actuante hasta hoy.

Mujeres regantes: el trabajo "adicional"

MARÍA ESTHER UDAETA • CIPCA GENERAL

La ausencia de mujeres regantes en varios talleres locales, departamentales y nacionales, entre el 2001 y 2002, para dialogar y construir una propuesta de normativa de riego desde la perspectiva campesina e indígena era un problema a resolver. El recuento indicaba que por cada 10 varones, participaba eventualmente una mujer. Así lo comprobamos con los propios regantes en el taller nacional de diciembre del 2002, donde eligieron su primer Comité Nacional, allí habían asistido 110 participantes, de los cuales sólo 10 eran mujeres.

Comentamos con el equipo técnico y con los dirigentes de la FEDECOR que así no podía seguir el proceso, ignorando la opinión y los criterios de las mujeres regantes sobre la normativa en construcción. Además las mujeres regantes en notoria desventaja por la falta de información, tampoco tenían conocimiento sobre la legislación vigente del agua en general y otros temas de interés que se habían considerado en los talleres pasados.

Fue unánime la decisión para incorporarlas en los objetivos del Proyecto FEDECOR-FOSC, fiján-

dose el cupo mínimo de 10 mujeres participantes para cada uno de los 7 talleres departamentales. Se ha responsabilizado a cada delegado departamental el asegurar la convocatoria y la participación de las mujeres.

Iniciamos el primer taller y, efectivamente, participaron 10 delegadas. Para el segundo y los sucesivos, la presencia de mujeres se incrementó hasta 30. Recogíamos en cada uno de los eventos testimonios conmovedores; por ejemplo en Tarija, una de las participantes estaba conociendo la ciudad por primera vez y solicitó permiso para conocer por lo menos la plaza principal y sacarse una foto para el recuerdo.

Con Carmen Peredo, asesora de la FEDECOR y encargada del trabajo con las mujeres regantes en los talleres, comentando estas y otras experiencias concluimos en la necesidad de generar un espacio de encuentro de carácter nacional. Uno de los obstáculos era el financiamiento. El proyecto en ejecución no contemplaba esta actividad, además había transcurrido medio año y ya era difícil conseguir re-

Este primer taller nacional de mujeres regantes fue una grata e imperdible experiencia por la novedosa aplicación de la metodología lúdico creativa que permitió por ejemplo, apreciar las prácticas rituales en torno al riego

cursos adicionales.

Y nos pusimos en la tarea de buscar apoyo para concretar el primer encuentro nacional de mujeres regantes. El Programa Mujer y Agua de la Fundación Solón, a través de Elizabeth Peredo, se sumó a la iniciativa con financiamiento e ideas para el evento.

El programa, nos comentaba Elizabeth, recibía mucha demanda de información sobre el ALCA y su impacto en la vida de las mujeres. A Carmen Peredo y a mí nos interesaba recoger algunos testimonios sobre ritos culturales que las mujeres practican en torno al riego, pero además queríamos reforzar pesados contenidos temáticos de la normativa de riego en construcción. ¿Cómo cubrir semejante agenda y en dos días de taller? Recurrimos entonces a Carmen Shulze, experta en metodología lúdico creativa, y en varias reuniones logramos elaborar un programa que permitiría alcanzar nuestras expectativas.

Ya en el evento nacional, participaron 50 mujeres predominantemente rurales y de ciudades intermedias, seleccionadas de 7 departamentos del país, algunas ocupan cargos directivos en sus organizaciones locales y departamentales, otras son jueces de agua y las demás,

regantes de base.

Este primer taller nacional de mujeres regantes fue una grata e imperdible experiencia por la novedosa aplicación de la metodología lúdico creativa que permitió por ejemplo, apreciar visualmente las prácticas rituales en torno al riego y a obtener una explicación sencilla en plenaria: "Nosotras menstruamos, por eso no podemos ser autoridades ni podemos estar cerca de donde se esta perforando un pozo porque el agua se seca o no se la encuentra".

Otra mujer regante compartía: "en el Norte de Potosí hacemos rogativas a la Pachamama en las épocas de sequía para no perder nuestra producción y ganado, tenemos nuestros propios cantos, hombres y mujeres cantamos lo mismo y hacemos pelear a las aguas de un río con las de otro río para que el dios *uiragbocha* provoque más lluvias."

Y así, recogimos algunos testimonios más. Constatamos que a través de la explicación de las prácticas rituales del agua y riego, podemos empezar a comprender mejor los niveles de participación de la mujer con relación a los puestos de decisión. Lección aprendida: el trabajo con las mujeres regantes no puede ser más de carácter "adicional".

¡Al fin existo...!

ARTURO CASANOVA • CIPCA Beni

"Al fin existo..." le escuché decir en tono de broma a la señora Carmen de la comunidad Santa Rosa del Apere, después de haber obtenido por primera vez y a sus 36 años de edad el certificado de nacimiento y posteriormente su carnet de identidad.

Como la señora Carmen, son más de 200 las personas que han logrado obtener por primera vez su certificado de nacimiento, con orden judicial de la oficialía de registro civil de San Ignacio de Mojos, a través del apoyo legal que prestó CIPCA.

En Mojos el índice de indocumentados es bastante elevado. Para citar un ejemplo, en la comunidad Rosario del Tacuaral, por falta de documento de identidad, en las elecciones del 2002 sólo sufragaron 4 personas de las 22 familias que habitan en esa comunidad. Las causas de la indocumentación son varias, entre las que resaltan la falta de oficialías de registro civil en las comunidades o su inadecuada distribución, el elevado costo del certificado de nacimiento y, muchas veces, la dejadez de los mismos padres de familia que no hacen inscribir oportunamente a sus niños y niñas.

Sacar un carnet de identidad es más difícil de lo que se piensa, pues necesariamente hay que viajar hasta la capital del departamento (Trinidad) con lo que los gastos económicos se elevan considerablemente, no por el costo del carnet, que es de 22 Bs., sino por los pasajes y la estadía en Trinidad.

Durante las campañas políticas o en vísperas de elecciones generales o municipales, los partidos consiguen llevar comisiones de identificación y carnetización para sus militantes, lo que muchas veces raya en la irresponsabilidad y trae consecuencias posteriores para esos ciudadanos, por la duplicación, la repetición de números y otras irregularidades que se descubren después del escrutinio o cuando se tiene que realizar algún trámite.

Sin embargo a medida que se avanza en la difusión y conocimiento de las leyes, también se logra el ejercicio de los derechos ciudadanos, puesto que los documentos de identidad son tan necesarios, como para aquellas 200 personas que por fin tienen sus documentos.

Octubre histórico

Della Pinto • CIPCA Cochabamba

Octubre, ¿quién puede olvidar el mes de octubre en Bolivia? Mes que la historia nos recuerda el "encuentro o desencuentro de dos mundos", fue a partir de un octubre que se transformaron las visiones del mundo tanto de europeos como de americanos.

¡Octubre maldito! ¡Octubre bendito! o simplemente ¡Octubre profético!, estos son algunos de los calificativos que asignamos los bolivianos al mes de octubre haciendo referencia a los acontecimientos más trascendentales de la historia como: la nacionalización de las minas, la nacionalización de los hidrocarburos, el fin de la guerrilla de Nancagua con la muerte del Ché y por último, en 2003, la "Guerra del Gas", ¡con más de 60 muertos!

"Guerra del gas", "insurrección", "revolución", "revuelta" o "levantamientos populares", llámese como se llame, los hechos de octubre nuevamente marcaron historia en nuestras vidas, porque como bolivianos tuvimos algo que decir, algo que sentir y algo que hacer. ¿Cómo quedarse indiferentes cuando día a día nos informábamos de la masificación paulatina de movilizaciones, enfrentamientos, heridos y muertos?, y el Gobierno de Sánchez de Lozada y los

partidos MNR, MIR, NFR y la UCS continuaban con su tozudez de calificar estos levantamientos de "narco sindicalismo y político partidarios".

En ese proceso me preguntaba: ¿Qué pasó con Cochabamba? ¿Por qué no podía retomar el papel protagónico como en otras movilizaciones? Probablemente se debía a que el centro de movilizaciones no estaba en Cochabamba; aún así, vale destacar el trabajo persistente de los dirigentes que recorrían por los barrios, organizaciones y comunidades, con el objetivo de informar y concientizar sobre la importancia de la recuperación de nuestros hidrocarburos y la solidaridad con las movilizaciones de El Alto.

Gas, Hidrocarburos y Asamblea Constituyente eran demandas de todos los sectores, aunque también había demandas sectoriales. Sin embargo, cuanto más se masifi-

caban las movilizaciones y se unían entre sectores sociales, los intereses sectoriales eran absorbidos por los intereses y demandas generales.

Fue con la masacre de El Alto que las organizaciones populares de Cochabamba que masificaron y multiplicaron sus medidas,

Cuanto más se masificaban las movilizaciones y se unían entre sectores sociales, los intereses sectoriales eran absorbidos por los intereses y demandas generales.

de pronto, los estribillos fueron cambiados por "muera Goni asesino!", "¡muera el gobierno masacrador!", "¡fuera Goni!". Muchos y muchas nos sumamos a la huelga. Ya en la huelga, encerrados entre cuatro paredes, pese a la solidaridad de los(as) compañeros(as) y de sus constantes visitas, me desesperaba por saber y ver lo que pasaba fuera, por ver si los sectores movilizados crecían o disminuían; cada instante me cuestionaba si era lo más adecuado estar en la huelga o más bien estar en las calles para difundir las voces, el pedido y la protesta de los sectores movilizados.

La huelga duró pocos días y el esfuerzo de los bolivianos y las bolivianas se vio plasmado en la renuncia y huida de Sánchez de Lozada, un 17 de octubre del 2003 -irónicamente la misma fecha que fue nacionalizada la Gulf Oil en 1969-, fecha histórica para la mayoría del pueblo boliviano.

Si bien hasta ahora no se han dado cambios significativos con el nuevo gobierno, queda latente el sabor a victoria y el precedente histórico ante el mundo, de que los bolivianos somos capaces de cuestionar al sistema político y luchar hasta alcanzar nuestros objetivos.

Mujeres, madres y esposas en octubre

Pascuala Parra • CIPCA La Paz



Las mujeres también fueron protagonistas en las movilizaciones populares que terminaron con el mandato de Sánchez de Lozada.
(Foto: CIPCA La Paz)

En El Alto habitan muchos "residentes", que tienen un pie en el campo y el otro en la parte urbana. Es decir, se dedican a tareas agrícolas, pero también son "ciudadinos". Los días de conflicto del mes de octubre de 2003, no quedará en el olvido para las mujeres campesinas y alteñas, sobre todo las "residentes". Como mujeres, madres y esposas participaron decididamente en todas las actividades de la

movilización.

El día jueves 16 de aquel mes, muchos alteños marcharon hacia La Paz ocupando las carreteras troncales. Desde las zonas alejadas, la caminata era de 3 a 5 horas, a pasos largos. Entre los marchistas había una señora que caminó desde la zona de Río Seco. Ya era su cuarto día de caminata hacia la ciudad. Ella dijo "Mañana va renunciar el Presidente" y

cómo lo sabe? "Soy cristiana, hablé con el Señor y me recomendó que debemos continuar con las movilizaciones porque es una injusticia para la población, eso es pecado y por eso todos deben continuar con la lucha hasta lograr la renuncia del presidente", dijo. "Y tus hijos, dónde están?", le pregunté. "Están en mi casa, mi esposo los está cuidando, no los dejo salir, prefiero salir yo; como mi merienda, que me lo cocinó mi esposo". Fue interesante la conversación con la señora. Ya el día domingo 11 de octubre, en la masacre de Río Seco, ella había comandado la batalla. Era testigo de las muertes, al final sólo quedaron dos mujeres de las cincuenta que estaban protestando. Por último, fue obligada por el poderoso fusil del militar a desaparecer en una casa ajena donde estuvo por dos horas, oculta.

La Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz "Bartolina Sisa", como organización matriz, junto a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Tupaj katari", inició los intentos de movilización desde el mes de junio. Una vez que lograron la convocatoria, iniciaron con la marcha de resistencia desde las provincias entre el 6 y 8 de septiembre y realizaron una masiva concentración campesina. El 10 de

septiembre instalaron la huelga de hambre en el teatro de la Radio "San Gabriel" y el 21 de ese mes, el levantamiento de la huelga de hambre y bloqueo de caminos, decidido en la Plaza de los Héroes.

Según las manifestaciones de las dirigentas, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz "Bartolina Sisa" ve con mucha preocupación, "la imposición de políticas neoliberales a nuestro país y que el pueblo milenario sufra una deuda social, con consecuencias irreproducibles, donde las familias se empobrecen más y donde los sectores productivos se achican aún más, llevando a nuestro país a una pobreza sin límites". Esta es la situación que ha obligado a las mujeres campesinas, indígenas, originarias y residentes aletañas a cargar sobre sus espaldas la economía de sus familias, pero también a cumplir un rol protagónico dentro del sindicalismo.

La Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, fruto de su participación en la lucha, logró publicar su boletín "Numero 1", como memoria de la participación de la mujer campesina y residente en la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada y como contribución a la historia del movimiento campesino.

¿Hay un límite entre lo orgánico y lo partidario en las organizaciones campesinas?

Pelaño Parí • CIPCA La Paz

CIPCA trabaja con las organizaciones campesinas y busca contribuir a su empoderamiento. El año 2003 se trabajó con las dos Federaciones Departamentales en el marco de un Convenio. Trabajar con ellas exige tener cada vez más tino, más cautela. Lo ideal es que las organizaciones campesinas (OC) concentren y enmarquen su trabajo en sus estatutos orgánicos. Sus estatutos indican que pueden tener relación con los diferentes partidos políticos, pero como personas individuales, no como organización, a no ser que el cabildo y los ampliados decidan trabajar de manera orgánica con dichas instancias. Aún así, es muy difícil saber cuál es el límite entre lo orgánico estatuido y lo político partidario. Hablamos con los dirigentes, quienes dicen "todo está dentro del marco orgánico y hasta los papeles lo dicen", pero después nos damos cuenta que lo orgánico ya había estado en el tercer plano. Las prioridades, para algunos, cambiaron: primero es el partido y segundo lo personal u organizativo.

Entonces salta la pregunta, ¿qué necesidad tienen las organizaciones y sus líderes de trabajar en y con lo político partidario? Las OC sienten la necesidad de ser representados en las instancias públicas y políticas de manera orgánica o simplemente como gremio o pueblos indígenas y originarios; pero la estructura legal no les permite actuar de manera orgánica en el campo político, pues el monopolio de

la representación está en los partidos políticos y en el último tiempo estos se cerraron mucho. Por ello se sienten obligados a relacionarse, orgánicamente o no, con los partidos políticos para tener acceso a este campo.

Pero luego se produce un proceso riesgoso. Los partidos monopolizan y manipulan a las organizaciones por el simple hecho de que las organizaciones requieren de ellos, no para pertenecer a su partido, sino, como un intermediario que puede viabilizar sus demandas y sus reivindicaciones. Al final las OC terminan siendo debilitadas y divididas, donde los partidos se disputan la "propiedad" de las organizaciones. Los partidos políticos creen protagonizar los movimientos, al menos eso piensan sobre lo ocurrido en octubre, donde cada uno reclama su protagonismo. Sin embargo, lo que se observó es que en los movimientos existe un gran valor, como es la solidaridad, que cualquier momento puede emerger. En las reivindicaciones, sean comunes o específicos, la solidaridad orgánica en el movimiento es el factor que se debe tomar en cuenta.

Cómo hacer que las OC no estén obligadas a pertenecer al partido para ser representadas y canalizar sus demandas? Será posible pensar su participación en el campo político, con sus propias lógicas estatutarias? El tiempo y la historia lo dirán, entretanto seguiremos apoyando a las OC para defender los intereses de campesinos e indígenas.

Las organizaciones fortalecen su unidad en la adversidad

Eulogio NÚÑEZ • CIPCA SANTA CRUZ



El Bloque Oriente es un espacio de concertación y alianzas de las organizaciones indígenas y campesinas. (Foto: Lolo González)

En la gestión 2003, las organizaciones indígenas y campesinas de tierras bajas de Bolivia: Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Coordinadora de Pueblos Étnicos de Mojos del Beni (CPEMB), Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB),

Federación Departamental de Colonizadores de Santa Cruz (FDCSC), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUT/CSC), Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (FDMCBS), Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas

(CIOEC-SC), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de las 4 Provincias de Norte (FSUTC 4 PN), Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B), han fortalecido sus alianzas en el denominado Bloque Oriente, lo que les ha permitido concertar propuestas, mejorar la capacidad de movilización e interrelación al gobierno y a la sociedad en su conjunto.

Algunas propuestas concertadas están relacionadas con aspectos de fondo y de forma para la realización de la asamblea constituyente; mejoramiento de la aplicación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria; reglamento de la Ley 1257 (Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo), en lo referente al derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas y originarios en decisiones y acciones que afectan a sus tierras y territorios, y proyecto de ley sobre Biodiversidad, como propuesta alternativa al proyecto de Ley del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, impulsada por el gobierno. El propósito era, luego de concertarla entre las organizaciones, negociarlas con el gobierno para que se constituyeran en políticas públicas; sin embargo, esto no ocurrió, más bien las autoridades públicas optaron por ignorarlas y se dedicaron a desarrollar una estrategia de comunicación para desprestigiar e intimidar a los dirigentes campesinos indígenas, incluso en alguna ocasión el propio presidente de la república Sánchez de Lozada acusó a los dirigentes de "narcosindicalistas" y "subversivos".

Aprovechando esta coyuntura adversa para los movimientos sociales, la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y las diferentes Federaciones de Ganaderos de Santa Cruz, Pando y Beni, a tiempo de demostrar el poder

económico y político que ostentan, se dedicaron a incidir para modificar la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Ley Forestal y otras normas, afectando conquistas sociales importantes de los pueblos indígenas y campesinos.

Ante esta situación, las organizaciones campesinas indígenas reaccionaron declarándose en estado de emergencia y movilización permanente en defensa de sus derechos. Ante las movilizaciones populares, el gobierno tomó la actitud de amedrentar, reprimir y encarcelar a dirigentes; incluso se tuvo que lamentar la pérdida de vidas humanas, haciéndose evidente la violación a las garantías constitucionales. La Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos intentaron jugar un rol de mediación entre los actores en conflicto, sin embargo, pese a estos esfuerzos, no se pudo lograr un acercamiento entre las partes y las posiciones de ambos lados poco a poco se fueron endureciendo y el desenlace de la represión del gobierno acabó con la sucesión constitucional del presidente de la república, Gonzalo Sánchez de Lozada que finalmente tuvo que refugiarse en los Estados Unidos de Norteamérica.

La actitud autoritaria del anterior gobierno limitó a las organizaciones campesinas indígenas en su afán de avanzar en la incidencia en políticas públicas, sin embargo, motivó a que las diferentes organizaciones afrontaran un proceso reflexivo sobre su accionar y funcionamiento y sobre sus relaciones con las instituciones del Estado. A partir de ello se fueron consolidando las alianzas entre organizaciones indígenas y campesinas de tierras bajas de Bolivia y profundizándose el debate sobre una democracia más participativa y con justicia social.

Ejercicio de ciudadanía

Lourdes Chávez • CIPCA SANTA CRUZ

Con la Ley de Participación Popular y la de Municipalidades, se busca la fórmula para que los Alcaldes proporcionen información a la sociedad civil; para que tomen el "informe" como instrumento fundamental de gestión; para que asuman que no es una obligación, sino una forma de legitimar su gestión, y para que sea una vía de respeto y respuesta a la gente que los eligió, sin olvidarse que ellos son parte del Municipio, que el cargo es temporal y que ellos volverán a ser ciudadanos corrientes con necesidades de información.

La práctica de evitar dar información de la Gestión Municipal está presente en Uru-bichá. El Alcalde guarayo no quiere dar información a sus hermanos indígenas. Durante el 2003, esta situación ha sido el caldo de cultivo para que los indígenas guarayos y sus organizaciones, cansados de esperar informes del gobierno municipal y en el ejercicio de sus derechos, dijeran ¡Basta señor Alcalde!

Agotaron todas las instancias legales establecidas: solicitud de las Centrales Comunes y del Comité de Vigilancia para que les dé la información, peticiones de informes de las zonas agrarias, de los grupos de jóvenes y de los grupos de mujeres. Cartas que iban y venían, sin respuestas. Realizaron Cabildos donde instaron a la autoridad a que se presente con sus técnicos municipales a dar su informe. Conformaron comisiones para asistir a las sesiones del Concejo Municipal y solicitar por intermedio de ellos los informes. Cada organización comunal en coordinación con el representante de distrito ante el Comité de Vigilancia emitió pronunciamientos y reiteró la solicitud de información.

Los dirigentes comunales organizaron talleres de capacitación sobre los derechos ciudadanos, en los que explicaban la necesidad de solicitar información al Gobierno Municipal y la de participar en la planificación municipal. Elaboraron boletines informativos mostrando los techos presupuestarios del municipio, la planilla presupuestaria del Gobierno Municipal y la Programación Operativa Anual. Cada distrito pudo ver lo que el Alcalde debería haber ejecutado.

A fines de noviembre, el Alcalde envía una carta al Comité de Vigilancia y a las Centrales Comunes indicando que ante la presión que se le había hecho, el domingo 7 de diciembre presentaría el informe solicitado. Las organizaciones prepararon al pueblo para que participara ese día. Lamentablemente el ejecutivo no se presentó, lo que motivó la reacción de las Centrales Comunes y el Comité de Vigilancia, quienes se pronunciaron por escrito pidiendo que el Alcalde renunciara a su cargo y exigiendo al Concejo que realicen el "Voto de Censura". Acto seguido, toman las instalaciones municipales cambiando el candado a la puerta principal de la Alcaldía y entregan simbólicamente las nuevas llaves al Cacique Mayor, principal autoridad en la cultura guaraya.

Todas estas acciones no fueron suficientes para que José Urañavi abandonara el cargo de Alcalde; pero sirvieron para dejar claro que los guarayos se cansaron de esperar, que saben pedir informes y que no están tan dormidos como se piensa. Los que se quedaron dormidos fueron los miembros del Concejo Municipal.

Las mujeres quieren participar

LILIANA CARDOZO • CIPCA SANTA CRUZ

El año 2003, la sociedad civil y las organizaciones de diferentes departamentos del país expresaron su descontento por el accionar del gobierno de Sánchez de Lozada. Tras la renuncia de éste, los movimientos sociales de hombres y mujeres exigieron a las nuevas autoridades gubernamentales la convocatoria a la asamblea constituyente, el referendo sobre el gas y la modificación de la ley de hidrocarburos, demandas que los indígenas, campesinos, colonizadores, mujeres campesinas y otros sectores excluidos plantearon expresamente. Actualmente tales demandas son parte de la agenda del gobierno.

En ese contexto, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa realizó su X Congreso Ordinario en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se debatieron temas internos y eligieron a su nuevo comité ejecutivo. El congreso centró su atención en el debate sobre la asamblea constituyente, el referendo sobre el gas, las elecciones municipales y el tema del ALCA.

En este congreso, las mujeres campesinas, conocidas como "Bartolinas", exclamaron: "...las mujeres debemos ser partícipes de la (asamblea) constituyente". Para ellas, participar es un desafío, dada la desigualdad social; por ello exigen equidad y las mismas oportunidades que los hombres; quieren capacitarse para ejercer su liderazgo apropiadamente y aportar con propuestas.

Leonilda Zurita, secretaria ejecutiva saliente, afirmaba en el congreso: "Nos discriminan porque piensan que mejor es un hombre que una mujer, debemos cambiar esa manera de

pensar". Por su lado, la nueva secretaria ejecutiva, Nemesia Achacollo, señalaba: "...las mujeres debemos hacer prevalecer nuestros derechos, debemos ser partícipes de todos los procesos en el país, por ejemplo en las próximas elecciones municipales y en los temas coyunturales; ¡hay que acabar con el machismo compañeras!".

Las "Bartolinas" tienen como desafío transmitir a sus bases los temas de la agenda nacional, lo discutido en el Encuentro Nacional de OC/OI y en el Encuentro Social Alternativo. Esto les permitirá tener mayor información y elementos de análisis para una mejor participación en la toma de decisiones, ya que en la asamblea constituyente se discutirá sobre el país que queremos los bolivianos y las bolivianas. De la misma manera, el referendo sobre el gas será un elemento determinante, pues lo que decida el pueblo, será indiscutible. También tienen el reto de lograr que las mujeres campesinas sean escuchadas y tomadas en cuenta a pesar de ser discriminadas por su condición de pobres, campesinas e indígenas.

Hay conciencia de la envergadura de los temas y la importancia de participar en ellos; por ello las "Bartolinas" hacen hincapié en trabajar para superar las debilidades de su organización, principalmente en el aspecto comunicacional: "la falta de comunicación nos trae problemas a la hora de tomar decisiones... Muchas compañeras no conocen la situación por la que atravesamos y cuando se presenta un conflicto en el que debemos intervenir, algunas ni están enteradas", explicó Leonilda.

Encuentro Social Alternativo, una decisión acertada

LEILA CORTÉZ • CIPCA SANTA CRUZ



La diversidad de rostros e ideas del país se conjugaron en el ESA.

(Foto CIPCA Santa Cruz)

El Encuentro Social Alternativo-ESA, realizado en noviembre de 2003 paralelamente a la XIII Cumbre Iberoamericana de Presidente y dignatarios de Estado, se constituyó en el primer foro social boliviano que congregó a alrededor de 8.000 personas, más allá de lo esperado; tuvo un carácter plural y diverso;

tuvo la capacidad de interpelar al gobierno.

En ese espacio inclusivo que logró deliberaciones, disensos, articulaciones, alianzas y encuentros, CIPCA tuvo una destacada participación. Su capacidad institucional se vio reflejada al ser parte activa del Comité Organizador del ESA, pues formó parte de la Comi-

sión de Programa y tuvo a su cargo la Coordinación de Prensa; pero además coordinó cuatro foros de los 8 que se convirtieron en los ejes temáticos del evento: Tierra y Territorio, Asamblea Constituyente, Economía Campesina y Acuerdos de Libre Comercio, y El Oro Azul (Agua) del Comercio, no solo por la importancia de los temas y la calidad deliberativa sino, por la convocatoria que rebasó las expectativas; sobre todo los foros de Tierra y Territorio y Asamblea Constituyente concentraron a cerca de mil personas cada uno cuando estaba previsto recibir a 500.

Otro aspecto sobresaliente fue la cobertura de prensa lograda a nivel local, nacional e internacional, desde medios alternativos muy progresistas hasta los medios más conservadores; ni el hecho de llevarse a cabo paralelamente la Cumbre Iberoamericana de Presidentes opacó la cobertura del ESA.

Más al contrario, la prensa pudo reflejar con mucho impacto la Bolivia pluriétnica y multicultural, hombres y mujeres de todas las edades provenientes del Chaco, Oriente, Amazonía, Valles y Altiplano, una Bolivia 'acompañada', pues recibió la visita de organizaciones sociales de Perú, Ecuador, Brasil y Paraguay.

Pero el impacto alcanzó su punto máximo al lograr, por primera vez en la historia de las Cumbres, que un representante del foro social entregara y leyera las conclusiones del ESA en la inauguración misma de la XIII Cumbre Iberoamericana de Presidentes y dignatarios de Estado, un indígena que reivindicó la pluralidad, la igualdad de derechos, la soberanía, el espíritu democrático con que se desarrolló el

ESA y todo lo que la sociedad civil, concentrada en el Encuentro, sueña para Bolivia.

Discurso e imagen del indígena Eduardo Medina dio la vuelta al mundo, como dio la vuelta al mundo un ESA propositivo más que de choque, un foro paralelo a la Cumbre oficial que no intentó boicotear, sino incidir, ser escuchado, proponer y ser parte activa de la toma de decisiones sobre la vida social, política y económica del país.

Pero no solo el ESA fue a la Cumbre, la interlocución sociedad civil-Estado fue de ida y vuelta. El presidente Carlos Mesa pidió hablar a la población en el propio escenario del ESA y así fue; allí una multitud lo esperaba, pero con respuestas a las propuestas. El presidente no pudo dar respuesta a todo, pero quiso dirigirse con la verdad, con sus posibilidades de gobernar. Hoy los temas del ESA son parte de la agenda nacional y políticas de gobierno: gas e hidrocarburos, asamblea constituyente, ALCA, tierra y territorio y derechos humanos. Temas que además incidieron en la Declaración de la Cumbre y parte de ellos los mandatarios se comprometieron a atender en sus países.

Por todo ello, el ESA marcó un hito en la historia de las Cumbres.

Sin duda, el esfuerzo interinstitucional, de personas y organizaciones que dieron vida al ESA recogió resultados más allá de los esperados. En ese marco, CIPCA puede hoy confirmar que la posición institucional de ser parte de este espacio, en la organización y realización, fue una decisión acertada... confirmación que anima a seguir protagonizando junto a otros actores y actrices el ESA 2005.

¡Ahora sí...! Las mujeres estamos a la cabeza

Gina Taboada • CIPCA Norte

En un Ampliado de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios se determinó, después de mucho análisis sobre la trayectoria que tuvieron los anteriores Secretarios Ejecutivos y el saliente, poner por primera vez a la cabeza de la Federación a una mujer, Zuleide Pessoa Terrazas, como Secretaria Ejecutiva.

El año 2002, después de haber realizado muchos eventos de capacitación y concienciación sobre género y participación, en la provincia Madre de Dios se conformaron 11 sindicatos de mujeres. Entre estos está el sindicato de la comunidad Las Piedras, del que la compañera Zuleide era la Secretaria Ejecutiva.

Los sindicatos de mujeres participaron en todos los eventos convocados por las organizaciones superiores y han sido un puntal importante para que en los Comités Ejecutivos de las organizaciones mixtas se vaya incorporando a mujeres. Es así que las dos Federaciones provinciales (Vaca Díez y Madre de Dios) y la Central Campesina de Guayaramerín han reformado sus estatutos y han aprobado que

el 50% de las carteras de las directivas sea ocupado por mujeres. Por otro lado, el año 2003 en la Federación de Vaca Díez se formó un comité ad-hoc para que éste impulse la formación de sindicatos de mujeres en las comunidades del municipio de Riberalta, por lo que es posible que para las próximas elecciones del directorio de esta organización se tenga otra mujer más en la directiva de la Federación.

Por otro lado, 22 mujeres de la región Norte Amazónica participaron en el X Congreso de la Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa, en Santa Cruz, en el cual realizaron la elección del nuevo comité ejecutivo para la gestión 2003-2005. La Central de Guayaramerín forma parte de dicho directorio, con una representante en el comité ejecutivo, ocupando la primera vocalía.

Estos avances nos permiten afirmar que el proceso de participación de mujeres en las directivas de las organizaciones y en la toma de decisiones va avanzando. A pesar de ello, éste sigue siendo un reto para ellas, sus organizaciones y para CIPCA.

Octubre en "la otra Bolivia"

LEILA CORTÉZ • CIPCA SANTA CRUZ



Sectores sociales de Santa Cruz también se movilizaron por la restauración de Sánchez de Lozada. (Foto: Leila Cortéz)

Mientras Bolivia en su conjunto, la Bolivia de los Andes, la de los Valles, la del Norte Amazónico, la del Chaco Guaraní en octubre de 2003 se movilizaba por la nacionalización del gas y posteriormente contra la brutalidad, la represión, las muertes y los desaparecidos provocados por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; en Santa Cruz, otra lógica se movía.

Grupos con poder económico y político sostenían una campaña mediática: "Santa Cruz la Otra Bolivia, la Bolivia Productiva, la Bolivia Pacífica", la que rechaza el caos, las movilizaciones y las protestas. ¿Y dónde estaba el pueblo, aquel que sufre la exclusión, la pobreza, la explotación, el que piensa y cree en la democracia y la soberanía popular como cualquier otro boliviano o boliviana? Unos rechazaban

dicha campaña porque escondía la realidad y el sentir de los sectores populares, otros se dejaron convencer aunque sus condiciones de vida eran igualmente duras y nada tenían que ver con los intereses de estos grupos dominantes.

El 15 de octubre no muchos dirigentes campesinos e indígenas, hombres y mujeres, gremialistas, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas de a pie, marcharon por el centro de la ciudad en concordancia con las protestas del resto del país. A la vez, en pocos medios de comunicación y por el internet, circulaban pronunciamientos de las organizaciones sociales, los demás medios preferían apoyar la campaña de los poderosos. Lo que no pudieron dejar de publicar fue el primer piquete de huelga de hambre que se instalara en el atrio de la Catedral realizada por la APDH de Santa Cruz, ni el segundo piquete protagonizado por la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) ya el día jueves 16, ni el tercero de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Entretanto, una numerosa marcha campesina indígena que llegaba del Norte había llegado a Warnes, su última parada antes de entrar a Santa Cruz. Ese jueves, "jóvenes cruceñistas" se replegaron con bates de béisbol en el 4to. anillo de circunvalación para frenar y reprimir la marcha campesina indígena. En un show mediático, sus madres, las "damas cruceñas" fueron a disuadir a estos jóvenes para que se fueran a sus casas, pues estaban preocupadas por un probable enfrentamiento en el que sus hijos quedarían malheridos por la "agresión de aquellos violentos campesinos que estaban por invadir Santa Cruz".

El Comité Pro Santa Cruz y el prefecto de aquel entonces fueron hasta Warnes, en un

intento de impedir el ingreso de la marcha campesina a la ciudad de los cruceños pacíficos. La marcha no continuó, pero los marchistas llegaron al centro de la ciudad en micros y camiones sin que nadie lo percibiera y pernoctaron en la universidad pública U.A.G.R.M.

El viernes 17 de octubre nada pudo impedir el ingreso de otra inmensa marcha campesina indígena y de los sectores populares urbanos -hacia mucho tiempo que no se veían una concentración tan numerosa-. Todos y todas con la única consigna, con el único profundo deseo y sed de justicia, con indignación, pedían la renuncia de Sánchez de Lozada. La marcha era aplaudida por los transeúntes, creció al llegar a la UAGRM donde se plegaron los universitarios y campesinos del Norte. Mientras la marcha ingresaba a la plaza principal, otra multitud mucho menor, con pañuelos blancos los interceptaba. De pronto desaparecieron los pañuelos blancos y los estribillos de "queremos paz" fueron sustituidos por bates, banderas cruceñas y estribillos "fuera raza maldita", "fuera collas de mierda". En minutos patearon y golpearon a hombres y mujeres campesinos o no, que marchaban pacíficamente. ¿Cómo entonces Ud. se explica que 200 jóvenes armados hayan hecho huir a 5 mil campesinos, indígenas, hombres y mujeres valerosas de todos los estratos y orígenes que se manifestaban en un acto ciudadano y en defensa de la democracia?. Nada los detuvo, la policía no movió un pelo para impedir las agresiones, muchos fueron los beridos, entre ellos, muchas mujeres de pollera de avanzada edad, ni las canas fueron motivo de respeto. El refugio fue el atrio de la catedral junto a los huelguistas de la APDH, nada fue considerado, incluso ellos tuvieron que salir desavoridos, pero indignados.

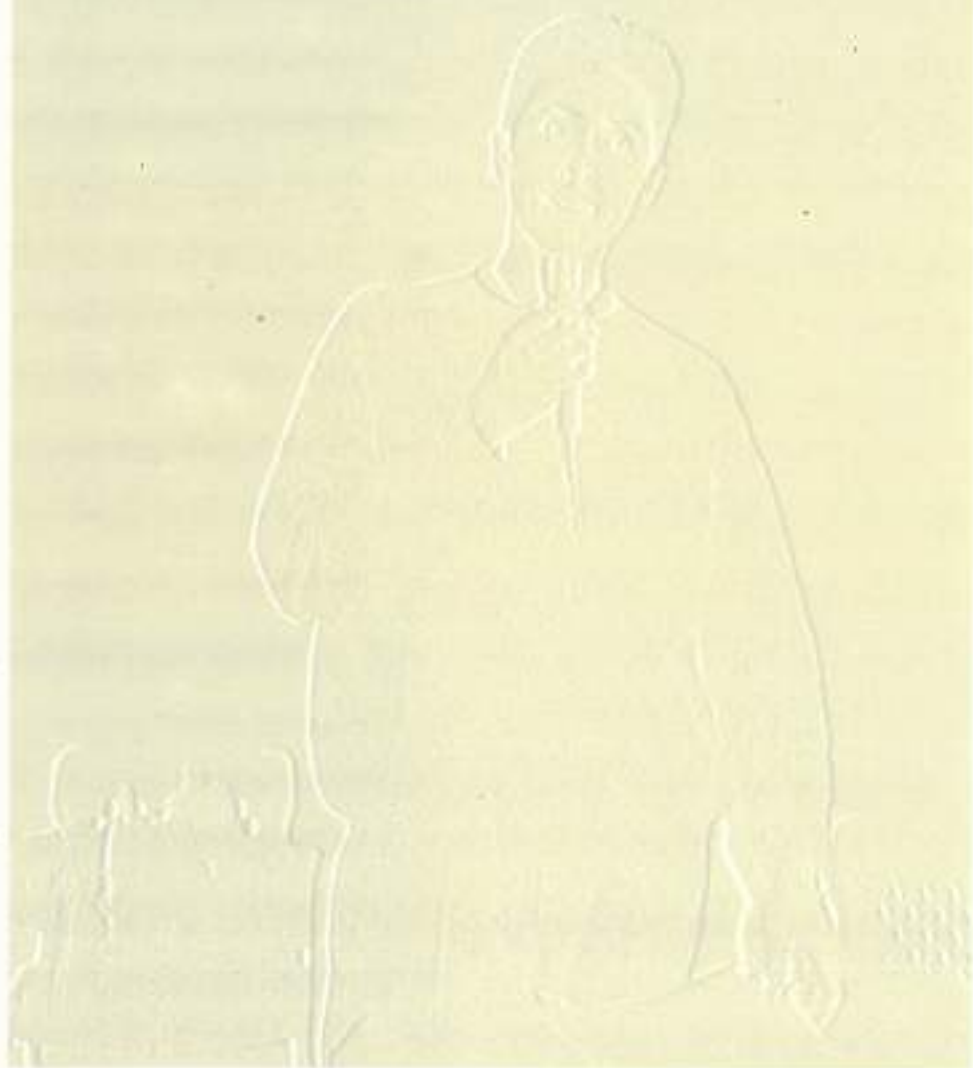
Cala la noche y Sánchez de Lozada había renunciado, aterrizó en Santa Cruz, decían con la esperanza de "golpear" desde esta ciudad, pues tenía a los grupos de poder que incitaron tan brutal agresión, humillación y racismo, de su lado, defendiéndolo. No otra cosa fue lo sucedido en la plaza; mientras en todo el país la gente salió a las calles gritando la renuncia de Sánchez de Lozada, en Santa Cruz, salieron para *waigmar* (agredir físicamente a una persona entre varios) a los collas revolucionarios e irracionales. Los irracionales fueron ellos, los racistas, los amigos de Sánchez de Lozada y los que no quieren perder el dominio de Santa Cruz que a título de reivindicar su identidad, -quienes sin embargo no escatimaron en apalear a indígenas ayoreos, chiquitanos y otros-, se niegan a la inclusión y a la conviven-

cia intercultural.

Al día siguiente la opinión pública nacional se volcó contra ellos, los medios daban cuenta de la violencia que provino de este sector constatando que habían incluso jóvenes con armas blancas.

Hoy este acontecimiento es más que un pasaje histórico, es un reto para quienes apostamos por la democracia, la inclusión, la interculturalidad y la justicia social, pues se reavivaron los regionalismos fundamentalistas, el racismo retrógrada que posteriormente dio sustento a la Media Luna y a futuro tomará otra forma de expresión, otros nombres, pues ha llegado la hora de la equidad, de otra democracia, asuntos que les molesta y no escatimarán esfuerzos para evitar que lleguen estos cambios.

CONVERSANDO CON LÍDERES
CAMPEÑINOS (AS)
INDÍGENAS



Isaías Rojas

Ex-presidente del Comité de Vigilancia
Municipio de San Julián

ENTREVISTA: LEILA CORRÉZ • 25 de JUNIO de 2002

Durante cuatros años (2000-2003) estuvo a la cabeza del organismo fiscalizador del tercer Municipio más poblado del departamento de Santa Cruz. En sus inicios, tuvo problemas de gestión. Nos cuenta sus experiencias y desafíos como representante de la sociedad civil

Tierra y Democracia.- ¿Cómo se animó a formar parte del Comité de Vigilancia?

Isaías Rojas.- En principio el Gobierno Municipal de San Julián estaba muy inestable, no había gobernabilidad, no había gestión. Necesitábamos un cambio y eso fue lo que me animó a ser parte del Comité de Vigilancia, para contribuir a que haya estabilidad y mantener la relación entre la sociedad civil y el Gobierno Municipal, ser el nexo entre ambos.

T y D.- ¿Por qué el Municipio de San Julián era ingobernable?

IR.- Tanto el Ejecutivo como el Concejo Municipal obedecían al Comité Cívico, que dicho sea de paso, hasta apadrinaba a las coaliciones. Era un pequeño grupo el que manejaba

el municipio desde el '94 hasta el '99; cada año cambiaban de alcalde, entre ellos se decían ahora te toca a vos. Mientras tanto el municipio era un desastre porque se cambiaba el personal, lo que significaba un costo adicional al presupuesto por la liquidación a los trabajadores. Cada año se tenía que presupuestar alrededor de medio millón de bolivianos para el pago de indemnización al personal. Realmente era un negociado para los partidos políticos que designaban a su personal. En el 2000, con la capacitación que recibimos, fuimos rompiendo esas anomalías.

T y D.- ¿Cuál fue el momento de mayor dificultad para el Comité de Vigilancia?

IR.- Cuando asume el nuevo gobierno el 2000, entran nuevas autoridades municipales que quieren tomar el Comité de Vigilancia y justo el Comité también tiene un nuevo directorio que me toca presidir, entonces hemos sido arremetidos por la influencia político-partidaria; esto hizo que nos dividiéramos, no podíamos coordinar por intereses político-partidarios. Cada concejal quería agarrar a un miembro del Comité de Vigilancia para apalancar sus intereses.

Para salir adelante, en enero hicimos los reglamentos del Comité de Vigilancia, eso nos ayudó mucho. Posteriormente en mayo, presenté una propuesta a CIPCA para que nos capacitáramos en lo que es autoestima, porque el bajo nivel de autoestima de los dirigentes hacía que los integrantes del Comité sean manipulados por los partidos políticos.

T y D.- ¿Qué otros problemas enfrentó el Comité de Vigilancia?

IR.- Enfrentamos muchos, entre ellos el desconocimiento de las funciones y del espíritu del Comité de Vigilancia. Porque si analizamos la ley de Participación Popular en detalle, sin ninguna visión político-partidaria, encontramos que este organismo debe ser imparcial, debe trabajar con todos los partidos políticos y con toda la sociedad civil. Entonces dijimos: por favor dejemos nuestros colores políticos afuera de la oficina del Comité de Vigilancia, aquí adentro hablemos como institución y demos que la sociedad civil sí se puede organizar y en ese sentido fuimos madurando con los cursos que hicimos sobre liderazgo y autoestima.

T y D.- ¿Fue importante la capacitación?

IR.- Para el primer curso en el que nosotros participamos, todo el temario lo había diseñado yo con el apoyo de los técnicos de CIPCA, todos los ejemplos que tomamos en el taller eran realidades que se vivían en el municipio, yo había coordinado con el técnico: "de esto vamos a hablar, este problema tenemos y tenemos que ponerlos a manera de ejemplo, pero con el nombre de otro municipio". El problema que sucedía en nuestro municipio yo se lo planteaba como si sucediera en otro municipio, los compañeros sabían que eso ocurría aquí y les

caía bien para sus conciencias. Eso ayudó bastante al cambio.

T y D.- ¿De qué otra manera les sirvieron los cursos de capacitación?

IR.- Los compañeros empezaron a manejar sus leyes, actuaron de manera más técnica, ya no mediante la presión o el ataque, sino que buscaban normas y argumentos con respecto a lo que hacían. Entonces nuestra primera acción oficial como Comité de Vigilancia fue pedir al Ejecutivo su informe del octavo mes de gestión.

T y D.- ¿Cómo vieron la primera ejecución presupuestaria que les tocó revisar?

IR.- Había más del 80% del presupuesto invertido en gastos de funcionamiento. Hicimos una proyección para el Ejecutivo y le dijimos que si seguía con el mismo personal, con los mismos presupuestos, hasta el octavo mes iba arrojar un déficit de un millón y medio de Bs. en gastos de funcionamiento; justo llegó el octavo mes de gestión y sucedió lo que habíamos previsto, ni siquiera sus asesores de finanzas, ni asesores técnicos habían advertido en ese sentido al alcalde. Cuando presentaron su informe final del 2000, había un millón y medio de déficit en gastos de funcionamiento y eso fulminó al anterior ejecutivo.

T y D.- Usted nos comentó que entre las primeras determinaciones que tomaron como Comité de Vigilancia fue presentar al Gobierno Municipal un plan de actividades y requerimientos, ¿cómo realizó esto el Concejo Municipal?

IR.- Cuando hicimos nuestro presupuesto y nuestro plan, nosotros pusimos como prioridad una computadora y como anécdota le comento que todo el Concejo Municipal se nos hizo la burla como si nosotros estuvié-

semos pidiendo un cohete para viajar a la Luna, "están locos" nos decían. A mí me molestó eso porque manejar una computadora para mí era como manejar un calculadora, "como es posible que el Comité de Vigilancia esté manejando computadora eso es para los técnicos", nos dijo un concejal. Pese a eso, nosotros insistimos, pero al Ejecutivo no le dio la gana de comprarnos. Recién cuando pasamos nuestro primer informe nos compraron la computadora, un equipo no de buena calidad, pero aceptamos porque era muy difícil obtener las cosas y además estábamos en un proceso de cambio y para evitar la guerra aceptamos, y así muchas cosas teníamos que aceptar para no entrar en la confrontación y después vengan otros a destruir nuestro trabajo.

T y D.- Háblenos ahora de su relación con la sociedad civil de la cual son parte. ¿Qué hacen para llevar la información a las OTBs?

IR.- Hacemos talleres a nivel de distrito en los que participan dirigentes de las comunidades, aunque también pueden hacerlo personas particulares. Se les entrega los informes que nos llegan, se les entrega cartillas; todo se les lleva documentado. También tenemos encuentros a nivel municipal con las asociaciones comunitarias y las Centrales Comunes, así participamos en todas estas instancias siempre con nuestro material informativo para no dar lugar a malas interpretaciones. Aparte de eso informamos a la población por radio.

T y D.- ¿Cuál cree que es el principal problema que impide que un municipio salga adelante?

IR.- Los problemas de la alcaldía me parece que no son propiamente de los alcaldes, tal

vez en algunos casos, pero aquí en nuestro municipio el problema es el Concejo Municipal, porque los concejales son los que deciden las coaliciones y además son los que definen qué tipo de personal van a contratar, ponen las condiciones y deciden cuantos de cada partido van a entrar al gobierno municipal. El alcalde es solo un títere y esto hace que los funcionarios no sean calificados. Ahora vamos a exigir que se seleccione mejor al personal de acuerdo a la Ley de Municipalidades, aunque sabemos que esto va a ser muy duro para el Concejo. Sin ir lejos, cuando el chofer del cuerpo deliberante recibe un memorandum de despido del Ejecutivo, surge la amenaza, "te vas a ir vos primero, porque si yo me voy rompemos la coalición". Así no puede funcionar un municipio.

T y D.- ¿Les ha costado entender y aplicar la ley de Participación Popular?

IR.- Haciendo un poco de historia, yo he participado de varios procesos de planificación, antes de la ley de Participación Popular. De ahí que en Berlín, distrito de donde yo vengo, habíamos soñado en una entidad que pueda hacer la gestión en el ámbito local. Cuando salió la ley de Participación Popular vimos que era lo que habíamos soñado en el distrito, pues allí ya trabajábamos de manera organizada, porque no tenía el apoyo del Estado. Por eso teníamos que organizarnos para superar algunos problemas de caminos, educación y salud. Lefimos la ley de Participación Popular y vimos que era buena tanto en lo económico, como en lo social.

T y D.- ¿Cuál es la fórmula del éxito que tiene el Comité de Vigilancia de San Julián?

IR.- El Comité ya no es dependiente de

los concejales como en gestiones anteriores cuando tenías que apadrinar con un concejal para tener una obra, entonces lo que nosotros hemos exigido es que se respeten las normas de planificación. Además concientizamos a la población y a los dirigentes, que todos los que trabajan en la alcaldía, concejales, alcalde y personal, reciben un sueldo y por eso hay que pedir que hagan un trabajo eficiente. De ese modo las cosas cambiaron, ahora los dirigentes van a la alcaldía a exigir sus derechos y no van a pedir limosnas, van como ciudadanos a ejercer sus derechos.

Otro cambio logrado, es el respeto a los planes operativos anuales; antes las OTBs del pueblo no respetaban los planes. Como tenían padrinos en el Concejo, cada vez cambiaban las obras, mientras a las comunidades que eran más formales y querían cumplir con el plan, no le hacían obras. Teníamos serios problemas porque varios dirigentes que estaban acostumbrados al padrinazgo no venían a la elaboración del POA. Cuando ya se estaba ejecutando el plan, venían a pedir que se les haga una obra. Ahora ya están conscientes de que deben participar en la elaboración de los planes si quieren alguna obra. Nos satisface haber logrado que la sociedad civil y en especial los dirigentes tengan compromiso y responsabilidad para pedir y respetar la ejecución de las obras.

T y D.- ¿Qué tareas o desafíos quedan todavía pendientes?

IR.- Necesitamos que la sociedad civil tome conciencia de la importancia que tiene el hacer control y seguimiento de las obras.

Por otro lado, lo que nos falta es capacitar a las bases, pues surgen problemas a veces solo porque se hacen pedidos que no competen al Gobierno Municipal, por ejemplo tractores, camiones y otros. Falta priorizar y analizar el tipo de demandas que se deben atender; creo que el municipio ya debe dejar un poco lo que son las obras de educación, salud e infraestructura y hacer solo mantenimiento. Más bien debe abocarse a obras de mayor envergadura como apertura de caminos, electrificación para las comunidades, aunque éstas no dejan de pedir siempre una obra aunque sea pequeña o un baño que no necesitan. En esto nos falta trabajar mucho. Otro problema es la falta de participación de la mujer, que hay que trabajarlo también desde las comunidades.

T y D.- ¿Tienen las condiciones necesarias para realizar el control social?

IR.- Como Comité de Vigilancia te pagan tu alimentación, tu pasaje y tu alojamiento, que no siempre es suficiente, pero ¿Qué te pasa si te enfermas o alguien de tu familia, o si tienes un accidente en el camino? ¿Quién te paga? Nadie. Yo varias veces me he salvado de accidentes haciendo el control social, pero ¿Qué hubiera ganado mi familia? En este sentido la labor es un poco ingrata.

Florinda Juchani

Dirigente de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Santa Cruz - "Bartolina Sisa"

ENTREVISTA: LEILA CORRÉZ • 9 de Julio de 2002

Candidato a diputada plurinominal por Santa Cruz en las elecciones generales del 2002. Nos cuenta sobre la doble discriminación que enfrentan las mujeres del campo.

Tierra y Democracia.- ¿Hasta qué punto es verdad que día a día hay discriminación hacia la mujer campesina e indígena?

Florinda Juchani.- Quizás las mujeres no nos queremos dar cuenta o en verdad no nos damos cuenta, pero somos discriminadas, para comenzar desde la forma en que vestimos, del rostro que tenemos, del campo de donde venimos, la forma en que hablamos. Nosotras no tenemos esa grandeza de sentirnos más que otras como por ejemplo los de la clase burguesa que nos tratan de "hijas" y eso es una forma de menospreciarnos, de achicarnos.

Si nos damos cuenta, las compañeras y nuestras hijas que vienen a la ciudad para servir a los patrones son mal pagadas y además ni siquiera les dan las condiciones para poder trabajar, lo único que saben estos patrones es exigir. Entonces la discriminación está en todos los ámbitos. Si nosotras vamos a las oficinas, especialmente a instituciones públicas, igual nos discrimi-

nan por el hecho de que venimos del campo. Desde la vestimenta que llevamos es motivo para que nos miren mal y de paso, como si no fuésemos humanos, como si no tuviésemos los mismos derechos, nos hacen esperar horas y horas para ser atendidas o por último no nos atienden, tenemos que volver otro día.

Así nuestras cosas, por muy pequeñas que sean, hasta las más importantes son discriminadas. Para nosotras como mujeres campesinas y mujeres indígenas es preocupante esta situación. Yo considero que ya es hora de que tanto los hombres como las mujeres del campo y de los barrios, comencemos a elevar nuestra autoestima porque nosotras somos las verdaderas dueñas de esta tierra.

T y D.- ¿Cuáles cree que son las causas para que la autoestima de las mujeres campesinas e indígenas esté tan venida a menos?

FJ.- Yo creo que esto viene de muchos años atrás, desde la colonia, y ahora el sistema neoliberal está dirigido a hacernos sentir menos, a que nos valoren menos, siendo que tenemos los mismos derechos que cualquier persona. La clase burguesa a costas de la injusticia se hace cada vez más rica y pudiente, las mujeres del campo, así estemos marginadas, debemos sentirnos orgullosas porque somos el reflejo de la dignidad, de la honestidad y la responsabilidad. Más bien debe-

ríamos tener nuestra autoestima alta. En el aspecto político también se refleja esta situación. Por ejemplo, cuando la clase popular, ya sean trabajadores, campesinos o indígenas, hacen sus reclamos o plantean una propuesta al gobierno de turno y éste no las cumple, no queda otra opción que tomar medidas de presión para hacer cumplir un derecho, entonces las autoridades nos ven como a un estorbo, como algo ilegal, siendo que solo exigimos el cumplimiento de un derecho como ciudadano y que no deberíamos hacerlo con marchas en las calles. Como padres de la Patria, las autoridades nacionales o departamentales deberían dar garantías para que podamos gozar de nuestros derechos.

T y D.- ¿Por qué cree que se da la discriminación?

FJ.- Entre hermanos campesinos e indígenas nos tratamos con mucha sensibilidad, pero la gente que defiende otros intereses, especialmente de las clases pudientes, ya están con esa idea de que por ser pobres no tenemos el mismo valor como personas. Yo creo que el valor moral no se debe medir en función al poder económico, ni tampoco por el color de piel. Si usted conversa con una compañera campesina o indígena se va dar cuenta que es la mujer más sencilla, además de sincera y honesta, mientras que otras personas que tienen que defender sus intereses solo te cuentan mentiras. Entonces la discriminación hay que contrarrestarla, porque no puede ser que el 70% de la población boliviana sea pobre y discriminada. Así no puede haber democracia donde solo el 30% de la población ejerce sus derechos.

T y D.- ¿En las propias organizaciones campesinas los hombres también discriminan a las mujeres?

FJ.- Sí existe discriminación. Es muy difícil que la mujer participe en los niveles de decisión o de dirección; hay muchos factores que intervie-

nen, ya sean económicos, de tiempo o de responsabilidad con la familia, porque no nos olvidemos que nosotras somos madres de tres, cuatro y hasta siete hijos y además somos dependientes económicamente. Estos son los factores que limitan nuestra participación activa porque nosotras como mujeres campesinas no contamos con empleadas para que nos laven la ropa o nos cuiden a los niños. No solo es el machismo que nos discrimina, también el modelo económico; es por eso que los hombres y mujeres del campo estamos empezando a luchar por la justicia social, pero somos las mujeres quienes tenemos que comenzar a superar esto.

T y D.- ¿También hay discriminación en la educación?

FJ.- Sí también existe. Esto venimos arrastrando desde hace muchos años, pero tenemos que empezar a superarlo. Por ejemplo antes decían las mamás que era menos importante que las mujeres se eduquen, mayor posibilidad tenía el varón. Tenemos que cambiar esa mentalidad, tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades, solo que no tenemos las mismas oportunidades. El sistema nos ha hecho sentir que no somos capaces de capacitarnos y así nuestras madres han desmerecido la importancia de que las niñas puedan ir a la escuela. Por eso nosotras, las mujeres del campo, hemos analizado la reforma educativa para ver de qué forma nos favorece y ahora estamos asumiendo el reto de lograr que nuestros hijos e hijas sí o sí reciban educación tanto primaria como superior. Si no tomamos conciencia, que tanto hombres como mujeres deben tener las mismas oportunidades para capacitarse, vamos a seguir adormecidas donde estamos.

T y D.- ¿Y en el aspecto laboral, la mujer campesina es discriminada?

FJ.- Hay discriminación en el campo laboral, por ejemplo en las oficinas públicas usted puede

ver que una chica elegante y con buenas curvas es la que atiende. Preguntémosnos quiénes son ellas? Son hijas de las que tienen poder económico, pero están acomodadas así no sean bien capacitadas, sin embargo nuestras hijas que vienen del campo o de algún barrio, la tienen que mirar primero cómo visten, de qué color es su pelo, qué tamaño tiene, etc., esto es una gran discriminación. Incluso cuando nuestras hijas vienen a la ciudad en busca de trabajo, se capacitan en un instituto o van a la universidad, les exigen tres o cuatro años de experiencia cuando ni siquiera le han dado una sola oportunidad de trabajo. Y cuando no estamos capacitadas tenemos que empezar a trabajar en puestos de limpieza o mensajería en condiciones muy desfavorables, haciendo grandes sacrificios.

Es por eso que las mujeres del campo hemos empezado a reflexionar, pues a pesar de que en Bolivia tenemos buenas profesionales, no han podido ser verdaderas protagonistas, claro no podemos desmerecer lo que hasta ahora han logrado algunas mujeres, pero no es suficiente.

T y D.- ¿Cómo es la participación política de la mujer campesina?

FJ.- Tenemos a la compañera y diputada Inés Miranda que es de pollera y es quechua, ella es el ejemplo de la mujer campesina discriminada. Es fruto de ello y sirve para desenmascarar a los gobiernos que a nivel internacional han dicho que en Bolivia no hay pobreza, que se ha reducido el analfabetismo, pero la otra cara de la moneda está ahí, en la compañera Inés, de quien nosotras estamos orgullosas por mostrar y tener a una mujer de pollera en el Parlamento. Los que deben avergonzarse son los llamados padres de la patria que nunca han hecho nada en favor de la clase popular y de las mujeres.

Cuando ellos dicen que la compañera Inés Miranda no es preparada, preguntémosnos por culpa de quién. No es por culpa de nosotros,

sino del sistema que nos empuja más a la pobreza y a la discriminación de género. Esas mujeres campesinas que están ahora en el Parlamento van a decir lo que realmente sucede con el pueblo, con las mujeres rurales y ya no nos van a tapan la boca.

T y D.- ¿Y en los medios de comunicación, se siente la discriminación?

FJ.- La verdad es que antes no nos daban tanta importancia, íbamos a la sala de prensa y nos daban cobertura pero era para guardar en el archivo; posteriormente cuando vieron que la mujer campesina se estaba levantando, ahí es donde empezaron a darnos cobertura e importancia. Por ejemplo, a mí me encuentran en las calles y me preguntan qué estamos haciendo, qué actividad tenemos o nos hacen una entrevista, pero la expectativa que creamos en los medios de comunicación, no se debe a que ellos nos valoren, sino que nosotras nos hemos animado a salir al frente, para decir nuestras verdades y exigir nuestros derechos, guardando el respeto que todo ciudadano merece.

T y D.- ¿Cuál cree usted que debe ser la actitud de las mujeres campesinas e indígenas frente a estos problemas?

FJ.- Yo creo que la mujer campesina e indígena debe salir a defender lo que es suyo, a pesar que no estamos formadas en las universidades, pero igual conocemos nuestra realidad en la escuela de la vida. Quisiera invitarlas a todas aquellas mujeres pudientes, a que pasen un día en el campo, pero no como turistas sino como trabajadoras, para que conozcan cómo es nuestro sacrificio, cómo es no tener los medios para poder vivir y poder acceder a un centro médico, cómo es verdaderamente sentirse discriminada cuando una va a exigir un derecho. Por la equidad y la justicia, es que debemos trabajar. Ese debe ser nuestro papel sobre todo de las dirigentes.

Pablo Rubén Martínez

Dirigente del Movimiento Sin Tierra de Terebinto

ENTREVISTA: LEILA CORTÉZ • 22 DE AGOSTO DE 2002

Habla sobre los aspectos que motivaron el surgimiento del Movimiento Sin Tierra en la zona de Terebinto.

Tierra y Democracia.- ¿Cómo surge el Movimiento Sin Tierra en Terebinto?

Pablo Martínez.- Somos campesinos sin tierra mayormente jóvenes, hijos de vivientes de diferentes comunidades del cantón Terebinto, somos nacidos en el lugar. El Movimiento Sin Tierra está surgiendo y no se va acabar, pues hay mucha pobreza, hay personas que trabajan solo por veinte bolivianos al día y eso no les dá ni siquiera para la comida.

Las mujeres son viudas que necesitan mantener a sus hijos; hay también jóvenes que están formando sus familias y necesitan un lugar digno para vivir, "porque ya estamos cansados de servir y deambular de un lugar para otro, de trabajar como peones, de terrateniente en terrateniente".

T y D.- ¿Usted cree que al acceder a la tierra superarán estos problemas?

PM.- Necesitamos salir de la pobreza, queremos ser dependientes de nuestro propio trabajo si pretendemos algún futuro para nosotros los jóvenes.

Como Movimiento Sin Tierra, tenemos una visión, más allá de tener nuestras tierras, también tenemos la visión de poder manejarlas, de ser agricultores agroecológicos; estamos interesados en cuidar la tierra y no en destruirla. Vivir de ella y no como hacen los brasileños, menonitas, japoneses y otros que tienen 5 a 10 mil hectáreas; desmontan los bosques y le meten insecticidas destruyendo la tierra y contaminando el medio ambiente.

Nosotros no estamos con ese pensamiento, creo que los terratenientes piensan que toda la vida vamos a estar de peones, pero se equivocan porque no lo vamos a permitir, vamos a luchar dando nuestras vidas para alcanzar nuestro propósito, salir de la miseria a la que ellos nos condenaron.

T y D.- ¿A través de los medios de comunicación se ha dicho que los que están reclamando tierras ya poseen algunas hectáreas, qué dice Ud. sobre eso?

PM.- Bueno, son jóvenes que todavía viven en la casa de sus padres, quizás sus papás tengan entre cinco y ocho hectáreas, pero hay que anotar que también tienen ocho o nueve hijos en su poder. Imagínese ¿en cuánto tienen que repartir ese pedazo de tierra? Los padres no han tenido la oportunidad de estudiar para

superarse y prosperar. Lamentablemente, muchos de los hijos, tampoco tuvieron las posibilidades y por esa razón emigran a las ciudades en busca de una vida mejor, pero al no encontrarla acaban convirtiéndose en drogadictos o temibles pandilleros, aumentando el índice delincencial que es la causa principal de tanta inseguridad ciudadana. El germen de la delincuencia, está en la pobreza y este mal lleva a los hombres al robo. No hay oportunidades para que podamos salir adelante, no hay el apoyo del gobierno. Por eso es que nosotros estamos luchando por alcanzar el desarrollo del campo y de todos sus habitantes.

T y D.- Se dice también que los supuestos propietarios de estas tierras son prósperos empresarios que hacen producir la tierra ¿Esto es cierto?

PM.- Son prósperos con su profesión, en la ciudad, pero en el campo no. Estas familias que dicen tener 500 hectáreas, no es así; tienen miles de hectáreas que son cultivables, pero están ociosas y las quieren hacer aparecer como reserva ecológica para justificar su posesión. Aparte de eso tienen una gran extensión de pampa, como decimos tradicionalmente, son grandes tierras con pastizales que ni siquiera ellos las han cultivado. Además preguntémoslos cómo están sus hijos, no están descalzos, no tienen desnutrición, ellos están cómodos.

T y D.- ¿El Movimiento Sin Tierra de Terebinto es un grupo de personas avasalladoras

de tierras?

PM.- Para el Movimiento Sin Tierra no hay avasallamientos, por qué no dijeron cuando los extranjeros se estaban apoderando de inmensas tierras cultivables, nosotros como bolivianos nos sentimos indignados porque somos los dueños de estas tierras, no como dice la Nación Camba que ellos son los dueños. Esta agrupación está conformada por gente que ha llegado después de la guerra del Chaco. Además respetamos las tierras que cumplen con la Función Económica Social, lo que no permitimos son los latifundios, que la misma ley INRA y la Constitución Política del Estado los prohíben.

T y D.- ¿Qué piensan hacer de aquí en adelante?

PM.- Para el hambre no hay balas, ni gases que pueda detenerla, yo no estoy llamando a ningún enfrentamiento, que no se entienda mal, más bien estoy haciendo un llamando a la conciencia de la opinión pública, pues nosotros al igual que todos, sabemos comer, vestimos y necesitamos un sustento para poder vivir; mientras los hijos de unos tienen comodidades, nuestros hijos no tienen futuro, es por eso que ahora estamos luchando y velando por nuestra generación y por las que ya vienen. Ese pedazo de tierra no nos hará millonarios, vamos a tener que trabajar duro para salir adelante, pero estamos dispuestos a hacerlo. Luchamos por un pedazo de tierra y porque esta sociedad nos reconozca y nos respete.

Nemesia Achacollo

Concejal suplente en el Municipio de Santa Rosa
Jefa Departamental del MAS en Santa Cruz

ENTREVISTA: RICARDO ONTIVEROS • 5 de Diciembre de 2002

Actual secretaria ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa". Durante el 2001 fue concejal titular en su municipio.



Tierra y Democracia.- ¿De cómo nace la inquietud por llegar a ser dirigente sindical?

Nemesia Achacollo.- Eso tiene que ver mucho con mi familia. Desde mi infancia yo recuerdo haberlo visto a mi padre yendo a sus reuniones, él ha sido dirigente durante 15 años

en la provincia Ichilo, fue Secretario de Hacienda de la organización. He visto que los mismos compañeros confiaban mucho en su persona. Entonces yo he aprendido de él, pues me llevaba para que le apoye y le ayude en la parte de contabilidad. Pero lo que más me motivó fue

la injusticia en la que se desenvuelven las familias campesinas.

T y D.- ¿Cómo recibió la invitación para ser candidata en las elecciones municipales del 2000 y su posterior elección como concejal suplente?

NA.- Yo no sabía qué era municipio, ni qué era candidatura; es cierto que he estado participando en la vida dirigencial, pero no en la vida política. Entonces yo no tenía conocimiento, porque cuando una persona incursiona en esta actividad -de la noche a la mañana- no tiene la suficiente experiencia para desenvolverse, pero con el apoyo de los compañeros he salido adelante. Otro factor fue que había que cumplir con la ley de cuotas y por eso entré a la carrera política a nivel municipal. En principio fue muy difícil porque se reciben muchas críticas, dicen: "la mujer no ha respondido". Y es que a veces no estamos bien formadas en esta parte, pero también con las críticas que nos hacen los compañeros y las compañeras, a una le animan más. Eso me sirvió de experiencia para hacerlo mejor en lo posterior.

T y D.- ¿Por qué aceptó ser candidata por el Movimiento Al Socialismo y no otro partido?

NA.- Por la propia injusticia que existe hoy en Bolivia, por tantas promesas que nunca se cumplen. Durante las campañas en el campo, los partidos políticos tradicionales vienen y hacen muchas promesas que después no las cumplen cuando están en función de gobierno. Además, ni bien terminan las elecciones, ya están haciendo alianzas, cosa que desde 1982 está pasando lo mismo y hasta ahora no hay ningún cambio. El pueblo ya está cansado de esta clase de política y es por eso que los propios compañeros han dicho basta a esto, hay que cambiar y poner gente nueva que realmente

sea representativa; que surja desde las bases para que así nuestras demandas puedan ser escuchadas.

Hasta ahora, ¿cuántas marchas, cuántos bloqueos, cuántos muertos han habido y qué cosa ha hecho el gobierno? No ha hecho nada. Los partidos tradicionales son buenos para robar, para ser campeones en corrupción. Por eso creemos que es hora del cambio, porque ya estamos acobardados de esta política. Y la forma de combatirlo ahora es a través de nuestro propio instrumento político: el M.A.S.

T y D.- ¿Con qué problemas tropezó al inicio de su trabajo como concejal suplente?

NA.- Realmente, en mi familia nadie me apoyaba. Solita he tropezado con todo, no sabía cuánto era el presupuesto de la participación popular, qué recursos obtenía el municipio, cómo se podía hacer un programa de gobierno municipal. Entonces yo andaba a la par del compañero que era concejal titular hasta que pude aprender. Fue muy duro, pero aprendí.

T y D.- ¿Cuál fue el trabajo que realizó como concejala titular?

NA.- Me ha tocado la parte del análisis del Plan Operativo Anual del año 2001. Al principio no sabía cómo desenvolverme, pero gracias al apoyo de las instituciones que me cooperaron, pude sobresalir. A dos meses de gestión ya me podía desenvolver bien; he formado parte de las comisiones y ahí ya pude trabajar con más firmeza. Reconozco que no siempre fui bien tratada, porque cuando una es representante del sector campesino, los compañeros o las señoritas concejales te discriminan y a pesar de que las mujeres éramos mayoría en el Concejo, los varones nos menosprecian y creen que por ser mujer cam-

pesina no vas a poder hacer el trabajo. Te dicen que porque vienes del campo no puedes saber sobre gestión municipal, pero yo he podido vencer esta discriminación. El ser campesina me favoreció mucho, porque pude ver y conocer las necesidades de la gente, porque una también las vive y así puede presentar las demandas. No somos como los políticos tradicionales que vienen de arriba, nosotras venimos de abajo, de nuestras bases y nos debemos a ellas.

¿Cómo es el trabajo de los campesinos y campesinas que logran llegar al Concejo Municipal?

R.- Aquí para el Municipio de Santa Rosa, nosotros los campesinos somos sus entenados, siempre hay discriminación por parte de los dirigentes de la zona urbana. Nosotros como oposición, no hemos podido lograr la atención de todas nuestras demandas porque el oficialismo siempre ha desviado la mayor parte de las obras a la zona urbana. Hicieron construir canchas polifuncionales o más pozos de agua, por aquí o por allá. Para el área rural, la mayor demanda es lograr el mejoramiento de caminos y lamentablemente no hemos avanzado en este punto; hemos conseguido algunos proyectos que nos hicimos aprobar con el Fondo de Participación Social, pero hasta ahora no se están ejecutando porque somos minoría en el Concejo. Considero que esto puede cambiar si es que nuestros compañeros y compañeras fueran más capacitados, pues los actuales concejales nunca fueron a pasarnos talleres para saber cómo hacer el Plan Operativo Anual, cuál es el presupuesto municipal. Pero ahora nosotros estamos en ese plan de capacitar a nuestros compañeros y compañeras, ya hemos hecho seminarios y con mucho optimismo hemos

visto la participación de nuestra gente.

T y D.- ¿Cómo se las próximas elecciones municipales del 2004?

N.A.- En el Municipio de Santa Rosa, en dos gestiones hemos sacado un concejal, creemos que para las elecciones municipales del 2004 tenemos segura la Alcaldía. Al menos estoy con ese optimismo, porque vemos que ha crecido la conciencia de nuestros compañeros y compañeras. Este año, en el sector de El Choré, hemos logrado el primer puesto en las elecciones generales; si seguimos a este paso, trabajando y concientizando a nuestros compañeros y compañeras, vamos a tener nuestro alcalde en el Gobierno Municipal.

T y D.- ¿Cuál es su mensaje para los hombres y especialmente para las mujeres del Municipio de Santa Rosa?

N.A.- Decirles a todas las compañeras y también a todos los compañeros, que no se desanimen en la lucha, hay que estar de pie, si nosotros estamos organizados y más informados todo será posible. No por ser mujer, solo vamos a servir para lavar y para atender a nuestros niños; esta es una tarea que no debemos descuidarla. Además tenemos las responsabilidades de velar por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque si nosotras no luchamos hoy, nuestros recursos van a desaparecer. Si nuestros padres siendo analfabetos pudieron hacer la revolución del 52, ¿por qué ahora nosotras no podemos hacer el cambio desde abajo? Por esta razón tenemos que seguir adelante, preparando y capacitando a nuestras compañeras y compañeros, así cuando una se traza una meta, la puede conseguir con éxito.

Diego Marquina

Ex-Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz - Apiaguaqui Tumpa (FSUTCSC-AT)

ENTREVISTA: LEILA CORTÉZ • 13 DE MARZO DE 2003

Fue Secretario Ejecutivo de la FSUTCSC-AT en la gestión 2002-2004. Nos habla sobre su experiencia al frente de la máxima organización campesina de Santa Cruz.

Tierra y Democracia.- ¿Cuál es su trayectoria como dirigente sindical?

Diego Marquina.- Bueno si bien soy un dirigente joven, mi trayectoria sindical data de unos diez años atrás. Mis padres también han sido agricultores, sindicalistas, ex-dirigentes, en la sangre llevo la vida del campo y el sindicalismo. Primero en mi comunidad he ocupado cargos en la directiva, posteriormente he subido a la subcentral. Estando allí pude participar en congresos y ampliados de la Federación. Así el año pasado, primero me eligen para representar a la provincia Sara como candidato a la Federación, luego en el Congreso fui elegido como secretario ejecutivo por las otras provincias más.

T y D.- ¿Cómo ha sido trabajar al frente de la FSUTC-SC?

DM.- Al inicio hemos tenido muchos

tropiezos, sobre todo porque el problema de la tierra se está agravando y los terratenientes cada vez se están organizando más. Además, aquí en Santa Cruz el poder político y económico es cada vez más fuerte, incluso las organizaciones de la ciudad son manejadas, manipuladas por partidos políticos tradicionales.

Primero hemos tenido una confrontación con la Central Obrera Departamental que en vez de apoyarnos -estando nosotros afiliados- más bien nos dieron la espalda. La Central Obrera nos prestaba un ambiente para nuestras oficinas, pero a raíz de los choques nos quitaron. Como un mes estuvimos deambulando por las calles, perdiendo un poco el contacto con nuestras bases. Otro hito, fue la cuarta marcha a la ciudad de La Paz, de más de treinta y siete días. Participamos como Federación y logramos anular algunas leyes y decretos que estaba sacando Tuto Quiroga en contra de nosotros y de nuestras conquistas, antes de dejar el Gobierno. Este año, los terratenientes han organizado la "Nación Camba" para contrarrestarnos, pero hemos seguido participando activamente y con movilizaciones para exigir y dar a conocer nuestras demandas y propuestas.

T y D.- ¿Como dirigente campesino departamental, cómo ve la lucha por la tierra en Santa Cruz?

DM.- Bueno aquí el poder político y económico es muy fuerte, se ha visto ante la opinión pública cómo los terratenientes empiezan a organizar sus comités de autodefensa de la tierra, empiezan a perseguir a dirigentes para defender sus tierras ilegales que no las están trabajando. Por otro lado, los mal llamados empresarios que han hipotecado todas esas tierras y que supuestamente las están trabajando, están avalados por el INRA. El desafío para nosotros es redistribuir la tierra equitativamente en el Oriente, porque pese a la Reforma Agraria del 52, los patrones de esta región continuaron. Por eso es que la tierra nunca ha pasado a manos de los peones, de los pongos, como nos llamaban antes. Ahora ellos se hacen llamar "Nación Camba", habría que ver quiénes son los verdaderos cambas, los verdaderos originarios son los guaraníes, chiquitanos, ayoreos y demás pueblos que han sido marginados de sus tierra y están ahora mendigando en las calles. Por todo eso y más la lucha por la tierra es y será dura.

T y D.- Ustedes sostienen que las instituciones públicas y privadas en Santa Cruz están al servicio de los terratenientes. ¿Explíquenos por qué?

DM.- Ellos manejan la Prefectura, que está al servicio de los de la Cámara Agropecuaria del Oriente, de Pegasacruz, Comité Cívico; lo mismo pasa con los jueces agrarios, los fiscales y con tantos otros más.

Por ejemplo, en el INRA que está siendo manejado políticamente y por algunos grupos de poder, el año pasado estuvo como director

departamental Jorge Aguilera que es de ADN, siendo que ese cargo supuestamente está institucionalizado. Ahora que se fue ADN y entró el MNR, son éstos los que están ocupando el INRA al igual que en su tiempo hicieron los miristas. La mayoría de esos políticos están ligados de una u otra forma al latifundio.

Nosotros pedimos una reestructuración del INRA para que gente idónea y profesional entre a ocupar cargos, mediante concurso de méritos; desde la cabeza hasta el último funcionario, lo que a la fecha no se está dando y mientras tanto se agrava más el problema de la tierra. El INRA se puso diez años de plazo para hacer el saneamiento y titulación de todas las tierras en Bolivia, pero ya han transcurrido siete años y no ha salido ni un solo título para nuestros afiliados.

T y D.- ¿Cómo frenar esta situación?

DM.- En este país nada se puede lograr por las buenas, todos nuestros logros hasta la fecha han sido mediante marchas, bloqueos; después de haber muertos, después de haber derramado sangre, después de tener presos en la cárcel... Porque cuando queremos ir por la vía del diálogo no somos escuchados. La mayor parte de la tierra en Bolivia ha sido distribuida durante las dictaduras de García Meza y de Banzer. Varios obtuvieron tierras de manera fraudulenta, sin embargo, trabajaremos para arreglar todo eso vigilando la aplicación de las leyes, exigiendo y cuidando con celo la redistribución de tierras a campesinos e indígenas.

T y D.- ¿Qué están pidiendo al gobierno en el tema de tierras?

DM.- El tema tierra lo manejamos bien, lo que estamos pidiendo al gobierno es la

titulación a todas las comunidades antiguas; también saneamiento y titulación a los asentamientos nuevos. Luego estamos pidiendo la derogación de todos los papeles y títulos falsos que tienen los terratenientes y la reversión de tierras que no cumplen con la función económico social, porque deberían ser tierras fiscales y no de engorde. Posteriormente exigiremos la redistribución de esas tierras a campesinos e indígenas. Hasta ahora el gobierno en su Plan Tierra habla bonito pero es una mentira. En el INRA indican que identificaron 500 mil hectáreas de tierras fiscales, nosotros el año pasado hemos identificado 708 mil hectáreas en Santa Cruz. Como prueba, tenemos el informe del INRA, tenemos el mapa, las coordenadas, sabemos dónde están, hemos ido en comisión a reconocer todas esas tierras, pero una vez que presentamos la lista de los compañeros que no tienen tierra, nos quedamos con las manos vacías. Las tierras "desaparecieron" reubicándolas como áreas forestales municipales, ASL y concesiones forestales.

El año 2000, el gobierno se comprometió a entregarnos tres millones de hectáreas, también fue otra mentira, estaban en áreas protegidas, eran reservas forestales o parques y tampoco estaban libres. Si el INRA no actuara de manera parcializada y por lo menos cumpliera la reversión de todos aquellos latifundios que no cumplen con la función económico-social y anularía los papeles falsos y fraudulentos que tienen muchos, habría en el país como siete u ocho millones de tierras fiscales que serían suficientes para realizar una redistribución de tierras a toda aquella gente que no tiene.

T y D.- ¿En el departamento de Santa Cruz hay tierras que no cumplen la FES y que pueden ser revertidas, como dice la ley LNR-A?

DM.- En Santa Cruz se puede revertir cuatro millones de hectáreas que están ociosas, solamente la utilizan para traficar, para hacer negocios o las tienen hipotecadas en el banco. Yo le demuestro con documentos, con informes del INRA, cómo en Cordillera diecisiete personas tienen 204 mil hectáreas, en El Choré lo mismo; a nosotros no nos dejan entrar a la reserva forestal, sin embargo hay más de nueve grandes propietarios adentro, incluso el ex-ministro Mario Serrate y Julio Leigue tienen tierras encima de dos comunidades.

T y D.- ¿Quiénes tienen derecho a la tierra, campesinos o indígenas?

DM.- Acá todos somos iguales, desde hace más de quinientos años que nos han colonizado en nuestra propia tierra, ahora nos llaman colonizadores, campesinos, indígenas, movimiento sin tierra; en nuestra propia casa nosotros no tenemos un pedazo de tierra, estamos marginados. Acá tienen más derecho los extranjeros que los originarios. Lo que nosotros pedimos al gobierno es que se respete lo que hemos logrado con una marcha que es el artículo primero de nuestra Constitución Política del Estado, donde dice que este país es multiétnico, pluricultural, pues en ese sentido no existe un verdadero reconocimiento a nuestros pueblos.

T y D.- ¿Además del acceso a la tierra, cuáles son sus demandas sectoriales?

DM.- Nuestra plataforma de demandas no es diferente a las anteriores; en el tema tierra por ejemplo son años que seguimos demandando el saneamiento, titulación, reversión y distribución, pero todo sigue igual. El otro tema álgido, son los caminos. A pesar de lo poco que producimos, no tenemos cómo sacar-

los al mercado y si llegamos a transportarlo no tenemos dónde venderlos, los estamos regalando en las ciudades; el otro tema es la electrificación porque hay comunidades que todavía no tienen energía. Hay otros más. Algunos de nuestros afiliados ni siquiera tienen Certificado de Nacimiento y no pueden sacar su Carnet de Identidad, por lo tanto no puede acceder a sus derechos; en el tema de educación, tenemos bachilleres que están enseñando en nuestra escuelas y no hay una educación de alto nivel, estamos pidiendo que vayan a las comunidades por lo menos profesores normalistas para que haya una buena educación y progrese la zona rural.

T y D.- ¿De sus demandas y exigencias, cuál es la que menos apoyo ha recibido hasta ahora?

DM.- Prácticamente no hay apoyo en el área productiva, por ejemplo venimos pidiendo créditos desde hace años, incluso coordinamos con el Comité Cívico para demandar al gobierno, y se consiguió diez millones de dólares, pero quienes realmente se beneficiaron fueron los empresarios agropecuarios, no llegó ni un centavo para los campesinos. Después vino la reprogramación, aquel entonces nuestra deuda era de unos 8 millones de dólares de un total de 5.000 campesinos, pero los empresarios o mal llamados empresarios no pasan de los 150

deudores y su deuda asciende a unos 400 millones de dólares; recuerdo que hemos conseguido 15 millones, ellos han conseguido 150 millones, pero al final ni un centavo ha llegado al movimiento campesino. Tampoco hay apoyo en semillas o en maquinarias. Cuando tenemos suerte nos va bien y cuando no, nos vamos a la quiebra total. Nadie nos reconoce, sin embargo, a los agropecuarios que tienen sus representantes en el ministerio, se les perdona, se les reprograma, se les apoya, se les regala plata y ni siquiera invierten donde deberían hacerlo.

T y D.- ¿Qué les puede decir a los miles de campesinos que hoy están luchando por mejores días de vida?

DM.- Decirles a los compañeros que la organización es la única arma para reclamar nuestros derechos, si no estamos organizados estamos arruinados, a cada uno nos van a seguir atropellando, vamos a seguir cada vez más pobres. Además hay que tomar en cuenta que las leyes están en contra de nosotros, ahora no nos queda otra cosa que seguir trabajando para hacer uso de los espacios que nos da la democracia e incidir en el Parlamento. Ahí recién podremos dirigir nuestro destino, aprobar leyes que nos beneficien y no aprobar aquellas leyes que vienen de afuera y las traducen al castellano para luego aplicarlas a nosotros.

Venancio Mborobainchi

Presidente de la Central Comunal de Urubichá - CECU

ENTREVISTA: RICARDO ONTIVEROS • 3 de Abril de 2003

Nos relata sobre la lucha del pueblo guarayo por la titulación de su Tierra Comunitaria de Origen, TCO.

Tierra y Democracia.- Dos Venancio, ¿existen irregularidades en el proceso de saneamiento de la TCO?

Venancio Mborobainchi.- Así es, pero en este caso la gran irregularidad han cometido también nuestros compañeros. Después de la inmóvilización han aparecido nuevos asentamientos en los polígonos 1 y 2 donde los compañeros han traspasado y regalado la tierra a los terceros. Tenemos documentación en nuestras manos que nos indican esas irregularidades. Un ejemplo, en la comunidad de Salvatierra, aquí cerquita de Urubichá, hay un ganadero que asegura estar cumpliendo la función económico social, pero en realidad no hay una cabeza de ganado, ni siquiera una tarea de pasto, eso es un engaño para el pueblo guarayo. Este señor ha obtenido sus tierras de nuestros mismos dirigentes y también gracias al INRA. No son diez hectáreas, son más de 6.000 hectáreas que han repartido a terceros, no solamente a este ganadero, hay muchos más.

T y D.- ¿Qué medidas están tomando ante estas irregularidades?

VM.- Al menos estamos avanzando en la denuncia y vigilancia de lo que se está haciendo desde ahora. Se ha informado a la financiadora Danida de lo que estaba sucediendo dentro de nuestra TCO, le dijimos que si bien tenemos dos polígonos titulados, dentro de ellos hay muchas irregularidades. Eso para nosotros es una pena y una gran preocupación, porque nuestros dirigentes que anteriormente estaban en la dirección de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos, COPNAG, nos han traicionado; además le hemos informado que las brigadas del INRA también son culpables de todos lo sucedido, porque sabemos cómo han saneado esas propiedades entre el INRA, los anteriores dirigentes de la COPNAG y los terceros.

T y D.- ¿Hay nuevos asentamientos de terceros en la TCO?

VM.- Sí, son ganaderos, son tres nuevos asentamientos que yo conozco en el segundo polígono, uno de ellos ha entrado el año 1999 y la comunidad de Salvatierra lo sabe. Los comunarios son testigos como lo somos nosotros. Ellos en realidad no cumplen ninguna función económico-social.

T y D.- ¿Qué piensa hacer para revertir esta situación?

VM.- El objetivo de nosotros es recuperar las tierras. Lo que pretendemos es actuar de acuerdo a la ley para así recuperar nuestra tierra, sabemos que si se trata de un nuevo asentamiento, éste debe revertirse porque así dice la ley; esa es la esperanza y yo puedo asegurar que si vamos a recuperar. No nos estamos inventando nada nosotros, está comprobado que esos son nuevos asentamientos y vuelvo a reiterar que tampoco cumplen con la función económico-social que señala la ley.

T y D.- ¿Cuál es la actitud del INRA, frente a este problema?

VM.- Ahora ellos manifestaron que si se va recuperar, es por esa razón que nos han invitado a revisar nuevamente las carpetas y ver cuántos son los nuevos asentamientos ilegales para posteriormente desalojarlos, porque ese es nuestro objetivo.

T y D.- ¿Por qué es tan vital la titulación de sus TCO?

VM.- Yo puedo decir que en el caso de Urubichá, donde ya tenemos dos polígonos titulados, (aunque falta todavía la titulación del tercer y cuarto polígono), queremos ser productivos tanto en el tema de ganadería, como en los cultivos combinados, pues sabemos que no se trata solo de tener el título en nuestras manos sino de trabajar la tierra.

Tenemos ya una gran experiencia gracias al apoyo de CIPCA. Con ellos actualmente tenemos grupos de ganadería, viveros y otros trabajos de agricultura; también estamos manejando el bosque con apoyo de sus técnicos

y otras instituciones.

Al tiempo de cuidar los recursos naturales, queremos nuestro desarrollo y eso es posible con los títulos de nuestra Tierra Comunitaria de Origen. Eso es lo que soñamos nosotros, a pesar que hay quienes nos toman como que solo estamos peleando para criar los mosquitos, pero no es cierto, nosotros queremos nuestra tierra para trabajar y salir adelante con nuestras familias.

T y D.- ¿Una vez lograda la titulación de su TCO, están pensando en la gestión territorial?

VM.- En realidad nos están informando acerca de la gestión territorial, pero falta difundir este tema, a pesar de que tenemos nuestros técnicos en la CIDOB; falta extender ese conocimiento a nuestra gente. Para nosotros es una preocupación, ya que pretendemos saber cuál es el objetivo de gestión territorial, pues sabemos que existe financiamiento de la cooperación internacional, pero no sabemos cuál es su función específica.

T y D.- ¿Según usted qué les falta a los pueblos guarayos para mejorar sus condiciones de vida?

VM.- Nosotros siempre decimos que nos apoyen en el tema productivo, eso se espera mucho para satisfacer las necesidades de nuestros hermanos. En ese sentido queremos que ellos nos escuchen para trabajar coordinadamente en beneficio de todos. Por otro lado tenemos mucha riqueza en cuanto a recursos naturales, pero nos falta financiamiento y eso es lo que buscamos también por medio del municipio.

Mario Quisbert

Secretario General de la Central Departamental de Trabajadores Asalariados del Campo-CDTAC

ENTREVISTA: RICARDO ONTIVEROS • 25 de Abril de 2005

Tiene su base en la ciudad de Montero. Nos comparte la lucha de los trabajadores asalariados del campo por ser incorporados a la Ley General del Trabajo y las condiciones laborales y de vida que deben enfrentar.

Tierra y Democracia.- ¿Quiénes son los trabajadores asalariados del campo?

Mario Quisbert.- Nosotros no somos de la Federación de campesinos, muchos nos confunden. Nosotros no tenemos tierra propia, trabajamos para los empresarios. Tampoco somos obreros, porque ellos ganan por jornada de trabajo, es decir por 8 horas de trabajo, en cambio nosotros trabajamos entre 12 y 18 horas diarias, además no tenemos un sueldo, ganamos por trabajo realizado. Los trabajadores asalariados del campo somos los que estamos en las empresas agrícolas realizando trabajos de rastillaje, siembra, cosecha y otras actividades.

T y D.- ¿La alta cifra de migración en Santa Cruz tiene que ver con los trabajadores asalariados del campo?

MQ.- Sí. Como la empresa agropecuaria ha visto que le falta mano de obra, ha ido trayendo gente de otros departamentos. Es así que con el impulso a la agricultura, también va creciendo un nuevo actor social que es el trabajador asalariado del campo.

T y D.- Hace algunos años, sólo algunos trabajadores agrícolas como zafreiros y cosechadores de algodón, consiguieron ser incorporados a la Ley General del Trabajo ¿que pasó con los demás?

MQ.- Estos compañeros en 1983, paralizaron todo el movimiento que había en la zafra cañera y en la cosecha de algodón con un paro general de 48 horas. Esa vez consiguieron que los trabajadores agrícolas sean incorporados en la Ley General del Trabajo a través de un decreto supremo. Posteriormente, el 24 de mayo de 1984, se aprobó el decreto reglamentario que establece las normas para los trabajadores agrícolas del campo, pero solamente se incorpora a los zafreiros de la caña de azúcar y a los cosechadores de algodón.

Tuvimos que esperar mucho tiempo para que recién el año '96 la Central Obrera Boliviana convocara a un ampliado nacional, a todas las organizaciones solidarias con los trabajadores asalariados del campo, para plantear que éstos sean también incorporados a la ley general del trabajo, al igual que otros sectores que están desprotegidos. En ese entonces, se había conformado una comisión impulsora para que plantee un proyecto de ley. Esta comisión estaba integrada por representantes del Beni, Santa Cruz, los zafreros de Tarija y castañeros de Pando. Estos compañeros junto a la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, fueron gestionando este derecho ante el gobierno en la medida de sus posibilidades. Además, se trabajó en una propuesta de reglamento. Para llegar al documento final, hemos pasado por un proceso de orientación, en el que tuvimos al menos seis seminarios-talleres y en los que participaron como guías, representantes de la Organización Internacional del Trabajo.

T y D.- ¿Qué derechos les resguarda este proyecto de ley y reglamento?

MQ.- Que se nos reconozcan los derechos fundamentales como son los derechos sociales, a la vivienda, a la salud en los campamentos. Vivimos en pleno siglo XXI y seguimos tomando agua de los curichis. Los empresarios, especialmente los del Norte, hacen sus campamentos para los trabajadores a orillas de las cañadas para no hacer un pozo de agua o llevar agua en cisterna. En el reglamento dice que también debe haber energía para la iluminación, nosotros ni siquiera estamos pidiendo luz eléctrica para nuestros campamentos, solo pedimos diesel para el mechero y ni así nos

dan. Por otro lado, somos nosotros los que tenemos que construir nuestros campamentos con carpas, que en tiempo de lluvia, llueve más adentro que afuera.

Es más, la educación para nuestros hijos no existe en los campamentos a pesar de que hay empresas que permanentemente ocupan entre 400 y 500 trabajadores y por lo menos deberían dotarnos de una escuela primaria. En el aspecto de salud, es peor todavía. No hay ni siquiera primeros auxilios y cuando uno se accidenta en el trabajo, el empresario lo que hace es pagarle al compañero sus días trabajados para que salga a la ciudad o algún pueblo cercano a curarse con sus propios medios.

T y D.- ¿Este reglamento contempla el trabajo de la mujer? ¿Cuál es su situación laboral?

MQ.- También se ha tocado el tema de la mujer porque su trabajo no es reconocido ni remunerado. Podemos hablar de los compañeros vaqueros por ejemplo, que trabajan con su esposa y sus hijos. Ellos se levantan temprano, ordeñan la vaca, pero quienes hacen el queso son las mujeres. También trabajan de cocineras y no solo cocina para su marido, sino para los otros vaqueros y ¿quién reconoce ese trabajo?

En los campamentos de trabajadores agrícolas pasa lo mismo, hay compañeros que están con sus esposas en los centros de producción y ellas hacen de cocineras para el personal del campamento, pero a ambos se les paga un solo salario, no se reconoce el salario de la mujer.

T y D.- ¿Después de la elaboración del reglamento, qué pasó?

MQ.- Hubo un taller de concertación a nivel nacional en el que participaron las

Cámaras Agropecuarias de Tarija, La Paz, Oruro; la Federación de Ganaderos y los compañeros asalariados del Beni, de Pando, de Tarija, de Santa Cruz, es decir, se logró reunir a todos los sectores interesados, parecía que había predisposición para llevar adelante el reglamento, pero no se avanzó más.

T y D.- ¿Cuáles fueron las razones para que el reglamento que estaba concertado no fuera aprobado?

MQ.- Primero nosotros los trabajadores asalariados del campo no teníamos una organización o instancia fuerte que fiscalice e impulse la aprobación de este reglamento, si bien la Federación de Zafreiros, la Federación de los Cosechadores de Algodón estaban llevando adelante este trabajo, no podían ir más allá de las atribuciones que les facultaba el decreto reglamentario anterior, es por esta razón que nosotros hemos conformado la Central de Trabajadores Asalariados del Campo que funciona desde el 30 de octubre del 2001.

Desde esa fecha estamos elevando con más fuerza nuestro reclamo. Otro problema fue el cambio de gobierno, pues la gestión de Tuto concluía e ingresaba Sánchez de Lozada con muchos problemas. Las dos veces que fuimos para reunirnos, estaban cambiando ministro y viceministro, con esas variaciones se hizo difícil aprobar nuestro reglamento.

T y D.- ¿Qué otras medidas están llevando adelante para que el gobierno atienda su demanda laboral?

MQ.- A la vez estamos buscando apoyo de las organizaciones sociales de campesinos e indígenas, pues como sabemos en el convenio 169 de la Organización Internacional

del Trabajo en su artículo 20 dice claramente que los trabajadores campesinos e indígenas deben estar sujetos a una reglamentación especial en la ley del trabajo; actualmente los compañeros indígenas son los que más están siendo castigados, en el aspecto laboral y salarial.

Un ejemplo son los guaraníes que trabajan en las empresas que producen soya, a cuyos campos de producción trasladan gente de pueblos enteros, como ocurre con la empresa Tacuari. Ellos prefieren llevar guaraníes de Izozog o de Cordillera, porque parece que son más humildes y más fácil de explotarlos. Además las empresas pagan a sus trabajadores con especies y no con dinero, como en el tiempo de los gamonales, cosa que está prohibido por ley. Es por esta razón que nosotros estamos acudiendo a las organizaciones indígenas para que mutuamente nos aliemos y apoyemos en procura de lograr la promulgación del decreto supremo que nos incorpore a la Ley General del Trabajo.

T y D.- Tenemos entendido que también han presentado una plataforma de demandas a la Prefectura del Departamento. ¿Está qué consisten esas demandas?

MQ.- Tenemos muchos casos de incumplimiento en el pago de salarios, de atropellos a los derechos fundamentales de los trabajadores; hay empresarios que los echan a sus trabajadores cuando les dá la gana y no les pagan nada; no hay un lugar dónde podamos reclamar. En Montero, el inspector de trabajo no tiene ítem ni para su secretaria, prácticamente no tenemos un juzgado laboral. Cuando le planteamos una demanda, él nos manda a Santa Cruz. ¿Usted cree que vamos a venir desde Píral o San Pedro recorriendo 200 kms.

por una demanda de doscientos bolivianos, contratar un abogado, pagar pasajes y alojamiento? Nos cuesta más que los 200 Bs. Es por eso que exigimos un juzgado laboral en Montero.

Otra demanda tiene que ver con la tierra, nosotros después de haber trabajado treinta años en la agricultura haciendo crecer la economía cruceña, creemos que es justo que el gobierno nos dote de un pedazo de tierra, no queremos morirnos trabajando en campo ajeno y en las mismas condiciones de siempre, tampoco aguantaríamos. Estamos planteando esto como una forma de indemnización por nuestro trabajo o como jubilación, porque nosotros somos los verdaderos trabajadores sin tierra.

T y D.- Ahora cuéntenos ¿cómo son las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los trabajadores asalariados del campo?

MQ.- El salario que nos pagan es una miseria, tenemos que trabajar doce, trece, catorce horas, en verano el día comienza a las cinco de la mañana cuando sale el sol y se oculta a las siete de la noche, entonces trabajamos de sol a sol porque el trabajo es "al trato". Uno gana por lo que puede hacer y no como un jornalero que cobra por 8 horas de trabajo. En la siembra los compañeros tractoristas no tienen horario, trabajan dieciocho, veinte horas. Uno tiene que trabajar día y noche rastreando y sembrando, peor en tiempo de cosecha, no hay horario y eso no reconoce el empresario, porque no te pagan horas extras. No tenemos ningún beneficio contemplado en la Ley General del Trabajo.

T y D.- ¿Actualmente de dónde provienen los hombres y mujeres que van a trabajar a

las propiedades agrícolas?

MQ.- Ya no se trae gente del interior, aquí ya estamos sobrando. Hace unos diez años atrás se podía ver que los trabajadores del campo éramos gente que no provenía de las ciudades, pero últimamente se ve que la gente de la ciudad está siendo expulsada al campo ya que en las ciudades no hay trabajo. En la Villa 1ro. de Mayo por ejemplo, por las radios y por parlantes móviles están anunciando "se necesita personas para trabajar en el campo". Como verá, esto ha cambiado.

T y D.- ¿Como dirigente cuál es su mayor preocupación ante esta situación?

MQ.- Siento que este sector se está convirtiendo en una bomba de tiempo, pues los empresarios, los productores y dueños de los campos de producción no están cumpliendo con los trabajadores; más por el contrario se les está dando salarios de hambre que solo alcanzan para sobrevivir, no para vivir. Es un salario que no alcanza para alimentar a la familia, que no alcanza para curar a la familia. Cuántas veces he visto a hombres llorar de impotencia al saber que después de haber trabajado día y noche su salario no alcanza. Entonces hay mucha frustración y esto es como un bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.

T y D.- ¿Ante esta frustración qué alternativas han visto?

MQ.- Por ahora fortalecer nuestra organización. Estamos concientizando a nuestros compañeros sobre la importancia que tiene el organizarse, pero también hay sectores que son muy radicales y plantean como solución la toma de tierras. No nos olvidemos que nosotros como trabajadores conocemos dónde

se encuentran las tierras ociosas, porque hemos alambrado las propiedades de los latifundistas, estamos chafreando algunos lugares y sabemos cómo quemar el monte. Sin embargo, las autoridades del gobierno echan la culpa a los campesinos por la quema y tala del bosque. Para darles un ejemplo, este año la empresa de desmonte Agroland, va a desmontar 5 mil hectáreas en seis meses y nosotros somos los que vamos a quemar porque nos contratan y vivimos de eso.

Entonces no hay punto de comparación entre las 5 mil hectáreas que una sola empresa desmonta y quema con las dos o tres hectáreas que chaquean los campesinos para sus siembras de autoconsumo. Son los empresarios los que están contaminando el medio ambiente. Además nosotros somos los que sabemos qué hacen con las tierras ociosas que ni siquiera las ocupan, sino que las están alquilando, las están vendiendo a los empresarios brasileños. Yo quisiera preguntarle al INRA cómo es que

los extranjeros consiguen tierra si no hay tierra para nosotros, para que podamos repartirnos entre los trabajadores asalariados del campo y los campesinos que no tienen tierra?

T y D.- Por último, ¿qué acciones están tomando como dirigentes para el fortalecimiento de su organización?

MQ.- Nosotros tenemos un proyecto sindical a mediano y largo plazo. Ya empezamos a capacitar a nuestros futuros dirigentes, tenemos una central regional en San Julián que se va hacer cargo de todo ese sector. También tenemos en Yapacani y hay la posibilidad de reunir a los compañeros de El Torno. Nuestro proyecto consiste en conformar una gran Central Departamental porque somos 200 mil trabajadores, somos la futura fuerza social que incluso podrá llegar a paralizar la economía cruceña, estamos apuntando a un proyecto de ochos a diez años que nos permita tener una organización muy fuerte.

Horacio Sambaquiri

Asesor indígena de la Capitanía Parapitiguasu
y defensor del medio ambiente en Cordillera

ENTREVISTA: RICARDO ONTIVEROS • 7 de Mayo de 2003

El dirigente guaraní nos
relata los impactos
sociales, culturales y
económicos que
provocan las operaciones
de las empresas petroleras
en el territorio de las
comunidades guaraníes.



Tierra y Democracia. - ¿Es verdad que las empresas petroleras traen desarrollo para las comunidades, como lo indican ante la opinión pública nacional?

Horacio Sambaquiri.- Yo creo que hablar de que las empresas petroleras ayudan al desarrollo es totalmente falso, lo que hemos hecho ha sido negociar duro con las petroleras; ellas entran con el discurso de apoyar a las comunidades pero no es fácil sacarles un peso a una petrolera. Te pueden regalar un juego de poleras,

cuadernos de 30 hojas o folletos, pero plata no. Ellos hablan de un plan de compensación, de un plan de mitigación, de que ellos van apoyar un plan de desarrollo integral sostenible, eso es en el discurso, pero el hecho es otro. Cuando tú presentas un planteamiento que contempla una escuela, un hospital, un atajado, la perforación de un pozo de agua, apoyo a saneamiento básico, mejoramiento de vivienda o biblioteca para colegios, yo te digo textualmente lo que nos han dicho: *Para nosotros*

esto es una broma". En cambio, las petroleras no se están llevando discursos, se están llevando nuestras riquezas, nuestra plata. Nosotros les dijimos: "así como ustedes crecen económicamente, así como andan en camioneta, así como toman agua mineral, así como ustedes comen bien, nosotros también queremos comer bien, porque lo que está aquí es nuestra riqueza, ustedes no se están llevando el gas, se están llevando plata".

T y D.- ¿Creen ustedes que las regalías que pagan las petroleras beneficia a los pueblos indígenas?

H.S.- El 18% va al Estado y si el gobierno, a través de la participación popular, entregara esos recursos a los municipios y éstos invirtieran en el área rural, nos beneficiaría y eso sí sería desarrollo, pero sabemos que gran parte de ese 18 % se queda en las prefecturas, se reparte en consultorías, en pegas y que sé yo, al final no queda nada para los pueblos indígenas. Por eso, creemos que el gobierno siempre ha estado al lado de las empresas petroleras.

T y D.- ¿Cómo hacen frente a esta situación?

H.S.- Nosotros tenemos respaldo legal mediante el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, también la Constitución Política del Estado y nuestro propio modo de ser, entonces como dueños de territorio hemos dicho, "aquí nosotros somos los dueños, el gobierno será administrador del territorio, será el que nos protege supuestamente, pero al final nosotros somos los dueños y si ustedes quieren entrar a nuestro territorio, compañeros aquí es poniendo la gallina". El gobierno no nos puede imponer una ley en nuestro territorio porque nosotros no la hemos conocido. Nosotros no hemos firmado la capitalización, por lo tanto nos hacemos respetar a nuestro modo y en base a nuestras posibilidades.

T y D.- La Asamblea del Pueblo Guarani (APG) junto con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) han presentado una propuesta de reglamento de Operaciones Petroleras en Tierras Comunitarias de Origen ¿Cuál es su principal demanda en este reglamento?

H.S.- Es la consulta, cualquier empresa que quiera entrar a territorio indígena tiene que consultarnos, tiene que explicarnos sus alcances, tiene que ser responsable de que está entrando a un pueblo indígena y que no tiene que causar ningún daño en lo posible; sabemos que esto va a ocurrir, pero en lo posible, prevenir que el daño no sea de proporciones.

Por otro lado, tiene que dar una compensación a través de un plan de desarrollo. Otro punto importante es que cumplan con el Reglamento de Operaciones de Empresas Petroleras, porque muchas veces no lo quieren cumplir.

Es por esta razón que hemos reclamado junto con la CIDOB e hicimos una propuesta denominada Reglamento para Hidrocarburos en TCO, pero el gobierno empezó a darle vueltas al asunto. Mientras tanto, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, donde están vinculadas todas las empresas petroleras, analizan una palabra, que esta coma, que lo otro y al final el viceministro o el ministro del área, son los que ponen la cara para excusarse y desviar la perdiz; en otras palabras, de emborcharlo al pueblo indígena hasta que se canse.

T y D.- ¿En el reglamento que han presentado, tienen alguna propuesta sobre los impuestos que deben pagar las petroleras?

H.S.- No estamos de acuerdo con que paguen el 18 % de las regalías, cuánta cantidad, cuánto de beneficio se están llevando las petroleras; los que transportan el gas también

deberían pagar porcentajes de las ganancias. Los trillones de ganancia que se lleva, por decir Petrobras nomás, son inalcanzables para nosotros los pueblos indígenas. Por tanto, creo que el 18 % es bajísimo, nadie está contento. Las petroleras también son conscientes que ese porcentaje es bajo y que es un regalo del gobierno, pensamos que deben pagar un 50%.

T y D.- Hablemos ahora de los impactos socioambientales que provocan las petroleras en sus territorios.

HS.- Los impactos empiezan desde el derecho territorial, ahora no sabemos si el territorio donde habitamos, que es de 109 mil hectáreas, es de nosotros, si es de las petroleras o de los terceros. No hay una seguridad en el territorio, es decir las petroleras entran como si fueran dueñas, con el permiso y respaldo del Estado. En cambio el pueblo indígena se siente como ajeno en su propio territorio y nosotros no tenemos el respaldo del Estado.

Una vez que el territorio es concesionado a las petroleras, las empresas comienzan a realizar la exploración sísmica para identificar dónde está la veta y luego sin ninguna consulta, ni anuncio sobre su ingreso a realizar trabajos en nuestro territorio, empiezan a hacer brechas. El hecho de hacer una brecha o senda en el territorio indígena significa un perjuicio, pues fácilmente el ganado de los indígenas se va otro lugar y ese es otro impacto. Por esa senda, también entran cazadores a nuestros territorios y por esa razón ahora ya hay poco chanco del monte, guazo, tatí o algún ave. Los mismos comerciantes de animales silvestres empiezan a entrar, al igual que el personal extranjero que traen las empresas petroleras y comienzan a recorrer el territorio cazando cuanto animal encuentran, causando otro impacto duro a la fauna como lo hacen los trabajos de sísmica

a la flora y el medio ambiente.

Asimismo afecta a nuestras fuentes de agua. Por ejemplo, en la comunidad de Itatiki, teníamos una fuente de agua desde 1989 y por la sísmica fue dañada y ¿qué pasó? La comunidad desde 1997 ya no tiene agua, todo el tiempo hay sequía y nuestros hermanos sufren, además los animales silvestres cambian de hábitat y la gente de esa comunidad no tiene dónde ir a cazar. Ahora estamos peleando con la empresa para que nos doten un sistema de agua.

T y D.- ¿Qué otros problemas ocasiona la presencia de las empresas petroleras en sus territorios?

HS.- Hay una serie de impactos que puede provocar un trabajador o un camión, desde atropellar a una chiva hasta hacer más polvorientas las comunidades, cuando sacan algunos elementos radioactivos, éstos se dispersan por el camino o lo botan en las fuentes de agua y cuando una vaca toma el agua se muere. Como te digo los impactos son duros y fatales.

T y D.- ¿Qué impactos sociales provocan las petroleras?

HS.- Por la pobreza en que vivimos, los petroleros en un acto -no sé si será de buena voluntad-, regalan a los niños o a una chica galletas, la sobra de una comida o alguna otra cosa, como que van creando un ambiente de acercamiento. Pero a veces esa actitud es como atraer al pescado con la carnaza y eso tiene sus consecuencias: por una parte, a los niños los acostumbran a la mendicidad y por otra, puede ser una trampa para que la chica caiga en una relación sexual; lo peor y lamentable es que procrean hijos que luego quedan abandonados.

T y D.- ¿Enfrentan algún tipo de impacto

cultural por la presencia de estas empresas?

H.S.- Creo que con los jóvenes hay el problema de cambios en la estructura cultural, como el hecho de usar gafas, ponerse una polera de un petrolero o andar con recortes que no son habituales en nuestra gente; hay un cambio en el modo de hablar, todo quieren imitar. Lo mismo ocurre con la música y otros hábitos que empiezan a sobreponerse a nuestras costumbres y a nuestra cultura.

T y D.- *¿Con la llegada de las empresas petroleras se han generado mayores fuentes de trabajo?*

H.S.- Cuando el gobierno plantea que las capitalizadas van a traer empleos, es mentira; lo que ellas hacen es utilizar mucha maquinaria, con tecnología de punta a través de consorcios que ellas mismas crean. Antes, en la construcción de puentes, empleaban entre 200 y 300 personas, ahora con la tecnología apenas contratan diez o quince personas; para la exploración de un pozo se requiere como 60 personas y la mayoría son técnicos, geólogos o químicos, que vienen del exterior. Incluso para su alimentación contrataron una empresa colombiana.

Por lo tanto, estas empresas no generan empleo como dicen. Si contratan son trabajadores temporales y cada tres meses cambian de personal. Además, las empresas buscan cualquier pretexto para despedirlos y no pagarles sus beneficios sociales. Este tipo de políticas no ayudan a nadie. Antes, la gente de los pueblos indígenas estaban trabajando por lo menos en el ferrocarril o estaban en Yacimientos, recibían su jubilación y hoy tienen de qué vivir. Aunque sea reciben sus cien pesos que son seguros cada mes. Ahora no ocurre lo mismo, todos vamos a seguir igual mientras haya esta clase de empleos.

T y D.- *¿Cómo califican los problemas que ocasionan las empresas petroleras?*

H.S.- Cuando las petroleras hablan de desarrollo no es desarrollo que quieren para los pueblos indígenas. No aceptan el precio que nosotros pedimos por nuestro territorio, por los daños irreversibles que nos causan. Ellos dicen que son daños mitigables y compensables, pero nosotros estamos convencidos de que son irreversibles. El hecho de que hagan una senda, que dinamiten y derrumben un cerro, que embarquen a una chica o que atropellen una chiva, son daños irreparables.

T y D.- *¿Qué medidas o acciones has tomado para enfrentar los impactos de las empresas?*

H.S.- La gente en el año '97 no estaba informada y se quedó con el sabor de la esperanza; en esta última época desde la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) tenemos un grupo de jóvenes que concientizan a la bases y todo contacto con las petroleras ahora es mediante la organización. En ese sentido los relacionadores comunitarios de las petroleras están bajo la vigilancia de un responsable indígena de recursos naturales y de los guías, de tal manera que hemos podido frenar esta incursión que antes de ser una orientación de la empresa era de desinformación y levantamiento de falsas expectativas para conformar a la gente y que no reclame nada.

Creo que en ese sentido hemos mejorado. Por otra parte algunos relacionadores tenían como misión desarticular la organización, avanzamos también en ese tema, haciendo que esos relacionadores no entren si no es con el aval de la APG y así logramos frenar este tipo de acciones. Ahora ya no pueden engañarnos como antes.

T y D.- *¿Cómo encaran las negociaciones*

con las petroleras?

HS.- Lo primero es concienciar a la empresas petroleras; mostrarles que nosotros estamos conscientes de que somos los dueños; los trabajadores de las petroleras o un consultor no saben ni dónde están parados, no conocen el territorio de un pueblo indígena.

El segundo paso es que la petrolera escuche la demanda del pueblo y que la atienda. Nosotros siempre hacemos una propuesta que es accesible y entramos a la negociación. Generalmente ellos empiezan negando nuestras demandas, diciendo que no hay fondos pero al final terminan diciendo lo contrario.

T y D.- ¿Cómo les ha ido en las negociaciones, consiguieron resultados favorables?

HS.- En esta última con Transierra hemos logrado -después de un año de negociación-, 150 mil dólares en un programa que se llama, Plan de Relacionamiento y Apoyo Comunitario, que tiene seis proyectos.

Uno de los proyectos es dotar calaminas a 615 familias; después estamos con un proyecto de fortalecimiento organizativo y otro que es de asistencia técnica para la TCO por el cual hemos contratado a un abogado. Así hay otros más, como la instalación de sistemas de agua para varias comunidades, un proyecto ganadero y todo con nuestra contraparte que la conseguimos mediante el municipio.

T y D.- ¿Cuál es la clave para obtener resultados favorables en las negociaciones?

HS.- Que los pueblos indígenas tienen que unirse como TCO, tener un solo criterio;

tener un equipo de negociación fuerte y consolidado en permanente capacitación en materia de hidrocarburos; hacer que las petroleras vayan asumiendo una responsabilidad. Es duro porque el gobierno, en muchos casos, es irresponsable al mandar a un viceministro que en vez de buscar un acercamiento con las empresas petroleras provoca un enfrentamiento con el pueblo indígena, trata de desprestigiar la dignidad de los pueblos indígenas.

T y D.- ¿Organizativamente se encuentran fortalecidos para continuar en esta lucha?

HS.- Creo que cada día avanza más lo que llamamos el poder local de los pueblos indígenas. Coordinamos estrechamente con la Asamblea del Pueblo Guaraní, también con otras Capitanías y actualmente seguimos con la iniciativa de hacer aprobar ese reglamento de operaciones petroleras para que obliguen a las empresas, sin llegar a una negociación, preveer un plan de desarrollo, un plan de mitigación, un plan de compensación inmediata, que sea automático, solo porque tiene que cumplir el reglamento y porque es un derecho.

No como en nuestro caso que costó arrancar a las petroleras los 150 mil dólares para la zona y que finalmente ha sido muy poco, porque no se pudo cumplir con las expectativas de las comunidades y eso en muchos casos significa desarticular a las organizaciones, dividir a las organizaciones y a las comunidades, entonces los planes de desarrollo no están a la altura de los impactos que ellos provocan.

Marisol Solano

Dirigente de la Coordinadora de
Pueblos Étnicos de Santa Cruz - CPESC

ENTREVISTA: LEILA CORIÉZ • 23 de Mayo de 2005

Durante el 2002 fue presidenta de la CPESC. Estuvo al frente de la IV Marcha Indígena Campesina por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales. Continúa activa en la dirigencia indígena.



Tierra y Democracia.- ¿Cómo ha podido alcanzar espacios de decisión en la organización a la que representa?

Marisol Solano.- Bueno en la dirigencia llevo cerca de seis años, esta es mi segunda gestión en la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, la primera gestión del '96 al '98, estuve dentro del directorio de la CPESC como secretaria de comunicación, ya en la segunda gestión me han postulado a la vicepresidencia, pero como el presidente actual, don José Bailaba, fue elegido últimamente

como diputado nacional, entonces he asumido la presidencia.

T y D.- ¿Las estadísticas nos indican que son muy pocas las mujeres que llegan a estos espacios, cuál ha sido su trayectoria para llegar hasta el directorio?

MS.- Bueno creo que ha sido difícil estar dentro del directorio, pues mayormente eran varones y personas mayores porque dentro de las organizaciones indígenas existe mucho machismo al igual que en toda la población

urbana y también en las comunidades indígenas. Cuando una mujer se quiere superar muchas veces se apela a la cultura, creo que también he tenido que romper esa barrera que habla gracias a la capacidad que tenemos como mujeres, creo que los hombres y las mujeres tenemos la misma capacidad. Demostrar todo eso ha sido muy importante, pues mis compañeros han empezado a darse cuenta de ello y también los compañeros de las organizaciones de base. A partir de esa vez han puesto su confianza en mi persona. Creo que es de esta manera que he ganado espacio dentro de la dirigencia indígena.

T y D.- ¿Qué la ha motivado a demostrar que la mujer también está capacitada para ocupar estos cargos?

MS.- Yo vengo de una comunidad guaraní y cuando empecé mi primera gestión como dirigente visité diferentes comunidades de los cuatro pueblos étnicos del departamento y al ver la injusticia, tomé la decisión de seguir adelante y demostrar a mis compañeros que sí hay mujeres con mucho potencial dentro de las comunidades, pero que también existe mucho analfabetismo y desigualdad. Muchas veces, por esa razón no se nos da oportunidades, pero ahora se está cambiando de actitudes, porque los mismos compañeros se han dado cuenta de que nosotras podemos y si una persona se propone un objetivo, puede lograrlo, no importa si hay dificultades, igual podemos salir adelante.

T y D.- ¿Cuándo es que se presentan oportunidades para las mujeres, luego de un proceso de capacitación?

MS.- Sí, al menos en mi caso, el proceso de capacitación ha sido durante toda mi trayectoria de dirigencia, he podido asistir a talleres,

eventos y cursos, inclusive he ido a cursos en las universidades.

T y D.- ¿Tu crees que hay más mujeres que están preparadas para asumir estos retos?

MS.- Sí, porque cuando yo entré a la dirigencia éramos dos mujeres y terminé yo sola, ahora continúo y hay otra nueva compañera; sin embargo en las organizaciones de base, cuando recién entré, no existía ninguna mujer o si existía solo se le daba el cargo de secretaria de género, pero ahora hay dos o tres mujeres presidentas de las organizaciones de base, organizaciones que además son mixtas y eso están viendo otras mujeres. Por eso creo que hay que seguir impulsando la participación de la mujer.

T y D.- ¿Cuáles son los retos a vencer de aquí en adelante?

MS.- Creo que la situación dentro de las organizaciones es de marginación y esto no lo sufrimos como mujeres, sino como indígenas, es decir hay doble discriminación de parte de los que tienen mayores recursos.

Veo que el desarrollo no llega a las comunidades, se habla mucho de acabar con la pobreza pero eso es un mero discurso. Entonces creo que justamente ese es uno de los retos, mejorar la salud y la educación dentro de las comunidades y obviamente, la seguridad jurídica de nuestro territorio. Ahora hay mucha emigración de las comunidades por las malas condiciones de vida y a cambio están entrando grandes propietarios y empresas transnacionales a nuestros territorios; pero qué pasa en las ciudades, estamos mendigando por las calles y lo otro es que los jóvenes sobre todo, corren el riesgo de caer en las drogas, el alcoholismo y la prostitución; esa es otra de mis preocupaciones.

Ojalá algún día se logre erradicar la pobreza

para que no haya migración y exista un verdadero desarrollo rural, pero que exista desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Creo que eso se debe respetar porque mayormente existen las imposiciones de afuera y muchas veces no están adecuadas a nuestras culturas y eso lleva muchas veces al fracaso.

T y D.- Ahora hablemos sobre la IV Marcha indígena campesina ¿Cómo es que asume el reto de salir hacia la opinión pública con temas tan importantes como la Asamblea Constituyente, temas agrarios y otros?

MS.- Cuando una asume la responsabilidad de ser dirigente, tiene que entender toda la problemática que existe dentro de la comunidad como también a nivel departamental o nacional, inclusive a nivel internacional; muchas veces una tiene que dar su opinión sobre el ámbito internacional y esto exige que un dirigente permanentemente esté informado y tenga una posición respecto a lo que está ocurriendo. Es una tarea que se debe asumirla con seriedad.

T y D.- ¿Qué se siente el haber estado al frente de la IV Marcha indígena campesina, estar al frente de tantos hombres y mujeres?

MS.- Ha sido una responsabilidad bien grande, al principio cuando empecé a coordinar la marcha ya tenía conocimiento, pero otra cosa era asumir y organizar. Había que dirigir a muchas personas, hemos llegado casi a las cinco mil. Esto también me ha permitido aprender durante la marcha, a conocer a otras organizaciones, especialmente a las organizaciones de tierras altas. He podido ver que en tierras bajas estamos un poco más avanzados en la consolidación de las alianzas entre las organizaciones. Entonces ha sido un gran reto asumir, negociar y tomar todas las decisiones que pue-

dan beneficiar a las bases. Fue difícil consensuar con las organizaciones de tierras altas porque somos de diferentes opiniones, pero creo que hemos logrado coordinar y seguir conversando, de manera que cada uno de los miembros que estábamos al frente entendimos cuál era el objetivo principal y eso ha permitido que no haya mayores dificultades internas durante todo el proceso de la marcha.

T y D.- ¿Cómo logran alcanzar la unidad entre las organizaciones campesinas e indígenas del país?

MS.- El incumplimiento de las leyes y la problemática de la tierra, nos ha permitido ver y ratificar la unidad entre las organizaciones campesinas, indígenas y colonizadores, el Movimiento Sin Tierra, la organización de mujeres Bartolina Sisa. Hemos visto que la única forma de hacerlos escuchar es uniéndonos en nuestras propuestas, eso lo tenemos bien claro. En esa perspectiva tuvimos que ver la incorporación de otras organizaciones y eso ha sucedido durante la marcha.

T y D.- Recientemente realizaron un encuentro entre las organizaciones que marcharon a La Paz por la Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegaron?

MS.- Primero hemos ratificado la unidad de las organizaciones campesinas e indígenas. Segundo, ratificamos la preocupación de cómo se quiere seguir manejando el país y creemos que esa situación se debe cambiar. También estamos exigiendo la aprobación inmediata del reglamento que hace al derecho a la consulta y participación de las organizaciones indígenas (Convenio 169 de la OIT), pero tal como nosotros hemos planteado. Esto está relacionado con los proyectos internacionales como son los gasoductos, carreteras y otros que afectan

no solamente a los pueblos indígenas, sino a todos los sectores por donde pasan las obras.

Lo otro son temas en materia agraria que quedaron pendientes, una es la reinstitucionalización del INRA que actualmente está politizado, muestra de ello es que el director nacional obedece a un x partido político y a los empresarios privados, creemos que eso ha permitido dar prioridad a los latifundistas y no aplicar la ley INRA tal como está.

T y D.- ¿Tienen alguna propuesta de reinstitucionalización del INRA?

M.S.- Cuando estamos pidiendo la reinstitucionalización del INRA queremos que sean las instituciones las que puedan hacer la selección del personal de forma transparente y por concurso de méritos, estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y la Iglesia Católica. Es una de las peticiones fundamentales y que tiene mucho que ver con el saneamiento de tierras y el enfrentamiento social que existe actualmente. El otro punto importante es la aprobación inmediata de un decreto supremo, para que todas las tierras fiscales sean distribuidas a las organizaciones indígenas y campesinas; el gobierno ha identificado tierras fiscales, casi ochocientas mil hectáreas, pero no quiere decir dónde se encuentran, siendo que todos sabemos que para evitar los enfrentamientos y la migración debe haber una distribución equitativa.

T y D.- ¿Qué acciones o actitudes van a tomar de aquí en adelante para negociar con el gobierno?

M.S.- Primeramente queremos reunirnos con los ministros, plantearles los puntos pen-

dientes que quedaron, como siempre lo hemos hecho. Tenemos que sentarnos a ver cuáles son las políticas para darnos solución específicamente a estos puntos pendientes. Ya hemos empezado las gestiones para esa reunión con el gobierno. Como ve buscamos siempre las reuniones primero y bueno si no hay respuesta, nos obligan a tomar medidas de presión porque sino la situación se agrava y nos lleva a enfrentamientos sociales y eso es una cosa que nosotros siempre hemos querido evitar.

T y D.- ¿Cómo ven las organizaciones campesinas e indígenas este nuevo Parlamento para negociar y hacer realidad su plataforma?

M.S.- Hay un cambio positivo al tener 43 representantes campesinos e indígenas en el Parlamento, ellos conocen toda nuestra problemática, lo cual es una cosa positiva, pero personalmente yo he visto cómo se maneja la Cámara Baja y creo que el trabajo que tienen estos compañeros no va a ser fácil; eso significa que para lograr nuestras demandas vamos a tener que hacer las presiones desde afuera y ellos plantearlas en el Parlamento porque allá adentro, los partidos tradicionales responden a los empresarios y cuando hay una ley que favorece a sus intereses la aprueban rápidamente. Por eso creemos que en el congreso, la lucha va a ser muy difícil. Sabemos que allá existe el boicot y mucha corrupción, pero hay que buscar aliados que nos puedan dar mínimamente la información y que puedan presentar nuestras propuestas, porque lo que ha pasado hasta ahora es que recién nos enteramos de nuevas leyes y normas cuando ya está todo aprobado; ahora por lo menos nos enteramos cuando está en agenda.

María Esther Pérez

Dirigente campesina de la provincia
Gran Chaco - Tarija

ENTREVISTA: LEILA CORTEZ • 7 de JUNIO de 2005



La dirigente relata su experiencia sindical y su posición sobre el encuentro de las organizaciones campesinas e indígenas de Tierras Altas y Tierras Bajas, a un año de la IV Marcha Indígena campesina.

Tierra y Democracia - ¿Usted cree que la mujer puede y debe llegar a ocupar espacios de representación en el Movimiento Sin Tierra y otras organizaciones?

María E. Pérez - La discriminación y marginación a la mujer hace que nos empecemos a organizar para que realmente nos conozcan y reconozcan como mujeres, porque bien sabemos que en

las organizaciones existe el machismo y hay que decirlo así de claro. En los sindicatos sobresalen los varones, pero creo que llegó el momento de hacernos sentir como mujeres, que también tenemos los mismos derechos que ellos y como tenemos ideas y preocupaciones por nuestras familias. Pero ser dirigente es una tarea muy difícil, ya que el tener que llegar a las comunidades más alejadas y explicarles a las compañeras sobre la forma en que debemos organizarnos para salir adelante, no es fácil; tampoco lo es el hecho de hacernos sentir en todo el país y decir que tenemos los mismos derechos al igual que todos los demás, pero no nos queda otra.

T y D.- ¿Cuéntenos un poco, cómo es el trabajo dirigenial que usted desempeña?

MP.- Es bien costoso porque cuando salimos a reuniones o talleres de capacitación, dejamos a nuestra familia, peor cuando hay hijos. A veces los recursos económicos no nos alcanzan, es terrible la situación. Pero pese a todo, nosotras como mujeres hemos decidido seguir organizándonos, capacitándonos para poder salir adelante y que la población también conozca por qué hablamos de la mujer campesina, del sufrimiento. Mi tarea es hacer que todas las compañeras de los sectores rurales no se sientan humilladas ni marginadas. Con los talleres que se van haciendo en cada lugar, se están venciendo estos tabús, porque por un lado sirven para capacitar y poder aprender de la situación del país, de las leyes y por otra, para formar y fortalecer a líderes y organizaciones.

T y D.- ¿Cuáles son sus proyecciones o metas como dirigente?

MP.- Bueno, como mujer dirigente es que

mis hermanas de los sectores más alejados puedan capacitarse, puedan aprender para que no se dejen marginar. El marido siempre dice que la mujer es para la casa, entonces creo que la marginación viene desde el hogar y luego en los sindicatos y en las organizaciones.

Yo creo que mientras más capacitadas estemos, mejor podremos enfrentar al gobierno y hacer conocer nuestras necesidades, porque el gobierno dice luchar contra la pobreza y no es así, lucha contra los pobres más bien. Nosotros como Movimiento Sin Tierra hemos prometido luchar contra la pobreza y para ello es necesario primero acceder a la tierra y luego poder trabajar para llevar el pan de cada día a nuestros hijos, poder sembrar un maíz, una papa, para mí eso es luchar contra la pobreza y no como los actuales gobernantes que son puro discurso y no hacen nada. Es por eso que nos toca encarar una tarea muy difícil, desde que hemos asumido la dirigenia, pero queremos lograrla. Como mujeres podemos un día llegar a gobernar si es posible este país para poder mejorarlo por el bienestar de todos y todas.

T y D.- Hablemos del encuentro de las organizaciones campesinas e indígena de Tierras Bajas y Tierras Altas ¿Cuál es la opinión del Movimiento Sin Tierra respecto al pacto de unidad de las organizaciones sociales, producto de las acciones conjuntas que han llevado adelante últimamente?

MS.- Todos sabemos que los medios de comunicación tratan de tergiversar la información y confundir a la gente, diciendo que el Movimiento Sin Tierra está avasallando, un montón de acusaciones que las organizaciones queremos desmentir. Sí nos estamos organizando, pero pacíficamente. Cuando el gobierno

diga estas son las tierras fiscales y se las va a dotar a la gente que no tenga y haga la redistribución de tierras, ahí pararemos. En el Chaco lo mismo, dijeron que la gente llega día tras día, pero sin embargo son gente que radica hace treinta años en el lugar. Creo que de toda esta plataforma que se está manejando a nivel de las organizaciones indígenas y campesinas en una mesa de concertación, es para decir a la población que no se crean esos comentarios falsos, pero que sepan también que el Movimiento Sin Tierra está unido y organizado y está en coordinación con miembros de otras organizaciones. También está interpelando al gobierno de forma permanente. Nuestras autoridades y los medios de comunicación siempre nos están marginando, sobre todo al Movimiento Sin Tierra, nos están llamando ilegales, pero creo que las cosas que está haciendo el INRA son también ilegales y por lo tanto también nosotros desconocemos sus actos. También nos preocupa la mala administración de esta entidad, pues está siendo manejado políticamente. Por eso exigimos la reinstitucionalización del INRA, pero hasta el momento no se ve que cumplan las autoridades. Se está firman-

do un montón de papeles y miles de convenios que no se cumplen, el gobierno te dice hoy te lo firmo y mañana te lo cumplo y sin embargo no es así. Pese a todo, el Movimiento Sin Tierra sigue en pie porque creemos que no siempre vamos a estar de peones y empleadas trabajando la tierra para otros.

T y D.- ¿De qué manera les ha servido ratificar este pacto de unidad?

MP.- Desde el momento que hicimos ese pacto de unidad hemos logrado que las otras organizaciones de las tierras altas como es Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Kollasuyo, se incorporen en la cuarta marcha; a partir de allí hemos estado juntos con un solo criterio. Este encuentro de todas las organizaciones de tierras bajas y altas ha sido un éxito porque esa unidad que aspiramos se está logrando poco a poco, pese a que el gobierno está metiendo cizaña, por un lado y por otro, en un intento por dividir al movimiento indígena campesino, pero creo que las bases estamos conscientes de esta unidad y es lo que nos permite salir adelante para buscar un futuro mejor.

IV MARCHA POR LA SOBERANÍA POPULAR, EL TERRITORIO y LOS RECURSOS NATURALES

(Reportaje especial)

ASAMBLEA
CONSTITUYENTE
SI



IV Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales

Ricardo Ontiveros
(Apoyo: Laila Cortéz y Eulogio Núñez)
Fotografías: CPESC y CIDOB



Año 2002. Centenares de personas se movilizan exigiendo la Asamblea Constituyente, el archivo definitivo de la ley de Apoyo al Desarrollo Sostenible y la aprobación de medidas que garanticen su derecho a la tierra y a los recursos naturales.

Son mujeres y hombres que pertenecen a unas cincuenta organizaciones campesinas,

indígenas, de colonizadores, de mujeres campesinas y del Movimiento Sin Tierra; habitantes del campo que han iniciado la marcha como una muestra de descontento por el accionar de los partidos políticos con representación parlamentaria, que aprobaron la ley de necesidad de Reforma a la Constitución Política del Estado, sin tomar en cuenta las observaciones y pro-

puestas de las organizaciones indígenas y campesinas.

Días previos a la Marcha

El Estado boliviano desde hace más de un año venía encarando la reforma a la Constitución Política del Estado con el apoyo financiero del Banco Mundial. Así el 2001 el Consejo Ciudadano, impulsado por el gobierno para tal fin, presentó al presidente Jorge Quiroga el proyecto de reforma a la Constitución para que sea puesto en consideración del Congreso Nacional.

Senadores, diputados, jefes de los partidos políticos y otros actores, unos dentro del Parlamento y otros desde afuera, comenzaron el análisis del proyecto presentado por el Consejo Ciudadano. Este proyecto de reforma en su camino a la aprobación, encontró varios obstáculos como la falta de consenso entre los parlamentarios y la cada vez más fuerte y generalizada resistencia por parte de algunos sectores sociales que veían en las reformas un mecanismo para fortalecer el poder de los partidos políticos y un marco constitucional favorable al modelo de libre mercado. A esto se sumaba también la proximidad de las elecciones generales.

Con todo, el gobierno de Jorge Quiroga esperaba la aprobación de la ley de Necesidad de Reforma a la Constitución, que hasta ese momento contaba incluso con el apoyo de la Iglesia Católica, siempre que fuera concertada con los sectores sociales.

El Congreso Nacional sesionaba contra



reloj, el 9 de mayo los congresistas aprueban en gran- de la Ley de Necesidad de Reforma y otras cincuenta y siete normas.

Mientras tanto, las organizaciones indígenas y campesinas del "Bloque Oriente";

la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUTCSC), la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (FDMCBS), el Movimiento Sin Tierra (MST), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB) y otras, fueron convocadas con carácter de emergencia a la ciudad de Santa Cruz. Desde entonces, estas organizaciones reunidas en la sede de la CPESC, seguían atentamente las determinaciones y acciones que adoptaban en el Parlamento.

En realidad, desde su primera reunión, el 6 de mayo, las organizaciones advirtieron que el Congreso Nacional y el gobierno de Jorge Quiroga estaban preparando la aprobación de una serie de disposiciones como la reforma constitucional orientada a favorecer los intereses políticos y económicos de los partidos y grupos de poder, la aprobación de la ley de Apoyo al Desarrollo Sostenible y el "Paquete Agrario" que consistía en un conjunto de leyes y normas que estaban destinadas a privilegiar a unos y despojar de derechos a indígenas y campesinos; consolidaba latifundios, legalizaba títulos

fraudulentos y favorecía a las transnacionales en el acceso a los recursos naturales, entre otros impactos.

Por ejemplo, la Ley de Apoyo al Desarrollo Sostenible y la reforma a la Ley Forestal, estaban favoreciendo a los grandes madereros mediante la disminución de la patente forestal y eliminando la obligación de la autoridad ambiental, de iniciar acciones legales contra las empresas o personas que contaminen y degraden el medio ambiente. Además de la promulgación de un Decreto Supremo para cambiar el Reglamento de la ley INRA y afectar así algunas normativas como la carga animal en procura de aumentar de 5 a 25 el número de hectáreas permitidas por cabeza de ganado,

como una clara actitud a favor de los grandes ganaderos. Este era el panorama que se tejió en el país, durante mayo del 2002. Ante ello, las organizaciones indígenas y campesinas reaccionaron rápidamente y dieron a conocer su posición a las autoridades.

A pesar de las observaciones y propuestas de las organizaciones, el Parlamento y el gobierno aprobaron la ley de Necesidad de Reforma a la Constitución Política del Estado y así daban vida a la ley de Apoyo al Desarrollo Sostenible y el "Paquete Agrario".

Desde las organizaciones indígenas y campesinas concentradas en Santa Cruz, cartas, pronunciamientos y contactos telefónicos fueron enviados a La Paz. La respuesta del gobierno y del Parlamento fue de oídos sordos. Entonces

las organizaciones tomaron la decisión de llevar a cabo una marcha hasta la ciudad de La Paz, y ésta fue la cuarta marcha indígena campesina.

A ponerse en camino

El día elegido para comenzar la marcha, 13 de mayo. La hora, tres de la tarde. Desde la sede de la CPESC, los marchistas, entre mujeres, hombres, ancianos y ancianas, niños y niñas iniciaron la IV Marcha Nacional por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales. Los marchistas de ambos sexos comenzaron la travesía tras la bendición del padre Mauricio Bacardit de la Pastoral Social Caritas.

La marcha, antes de emprender su camino rumbo a la sede de gobierno, hace su paso por plaza 24 de Septiembre de la ciudad de Santa Cruz, donde los dirigentes de la diferentes organizaciones indígenas



y campesinas divulgan ante la opinión pública, su plataforma de demandas: la Asamblea Constituyente, el archivo definitivo de la ley de Apoyo al Desarrollo Sostenible y el compromiso público y escrito del Poder Ejecutivo de no aprobar las normas reglamentarias y técnicas del Paquete Agrario que limitaría el acceso de las comunidades indígenas, campesinas y de colonizadores a la tierra y a los recursos naturales.

A la cabeza de una mujer, Marisol Solano, por entonces presidenta de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), hombres y mujeres comenzaron la caminata

rumbo a la carretera que los conduciría hacia su objetivo. Así se rearticulaba el Bloque Oriente, que en la tercera marcha del año 2000, las organizaciones que lo conforman habían hecho ya un pacto de unidad, que estaba siendo ratificado y fortalecido, un pacto por la reivindicación de sus derechos ciudadanos, culturales y territoriales.

A su paso por las calles de Santa Cruz, la marcha se hizo sentir con petardos y consignas que pedían la Asamblea Constituyente. El tráfico se detuvo, conductores, transeúntes, policías que vigilaban la marcha... Todos sorprendidos preguntándose ¿por qué cientos de hombres y mujeres marchaban?... Lejos estaban algunos de sospechar, que esa marcha también se realizaba por cada uno de ellos.

La marcha poco a poco fue dejando atrás la ciudad de Santa Cruz. El primer día de caminata llegó hasta Warnes, a los dos días hasta Montero, posteriormente Portachuelo, Buena Vista y así, a paso firme, hasta ingresar a Cochabamba.

En cada población a donde se llegaba, los marchistas dormían por las noches y muy temprano por la mañana, con los primeros rayos del sol, levantaban campamento y reiniciaban nuevamente la caminata recorriendo entre 20 y 30 kilómetros por jornada. Luego de un par de horas de caminata, los esperaba el desayuno... más tarde el almuerzo. Esta tarea estaba a cargo de una comisión 'de avanzada', responsable de saciar el hambre y la sed, y de asegurarles un

espacio para el aseo y el descanso en las comunidades a las que arribaban, donde sus pobladores los esperaban listos con albergues y alimentos.

Por las noches, los grupos juveniles organizaban veladas artísticas para distender a los y las marchistas. Entretanto, los días que transcurrían y tramos que se avanzaban, el número de los caminantes crecía poco a poco.

Al término de cada jornada, la comisión de coordinación de la marcha conformada por dirigentes de las organizaciones, se reunía para evaluar el día e informar sobre los acontecimientos y los llamados que recibían desde la ciudad de La Paz por parte del gobierno, que vanamente intentó impedir la marcha cuando ésta ya había partido.

El gobierno, al ver que día que pasaba se iba sumando más y más organizaciones; invitó a reunirse a los representantes de la Marcha con una Comisión del Estado, integrada por los poderes Ejecutivo y Legislativo en la ciudad de La Paz. Los marchistas rechazaron tal invitación y más bien exigieron que cualquier reunión debiera realizarse en el lugar donde se encontraba la Marcha.

De Yapacaní a Ivirgarzama

Sábado 18 de mayo, la Marcha llega hasta Yapacaní. Fueron 30 kilómetros de recorrido,

8 horas de caminata. En el trayecto, campesinos y pequeños agricultores provisionaban a los y las marchistas con agua, frutas, arroz y otros comestibles, además de alentarlos y brin-



darles su apoyo moral para continuar con la travesía.

La marcha descansó en esa localidad, los representantes de las diferentes organizaciones sociales dieron la bienvenida a los hombres y mujeres marchistas. La Confederación de Colonizadores de Bolivia, bajo la dirección de su presidente, ratificó su adhesión a la IV Marcha.

Por la tarde del 19 de mayo, los delegados de las Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC), del Movimiento Sin Tierra (MST) y de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" (FNMCBBS), decidieron unirse a la movilización y dejar la huelga de hambre que sostenían al interior de la Central Obrera Boliviana en la ciudad de La Paz.

A medida que ganaban terreno, el cansancio quería ganarles la batalla, pero indígenas, campesinos y campesinas combatían el cansancio con su convicción y la música, su fiel compañera en las horas de descanso y en las luchas. La expresión de la diversidad boliviana pocas veces fue tan evidente como en esta movilización. Expresiones culturales, artísticas eran el alimento espiritual.

La marcha iba creciendo en número, en la localidad de San Germán, 22 kilómetros después de Yapaquí, se sumaron 30 delegados de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y de la Central Indígena de Pueblos Originarios Amazónicos de Pando (CIPOAP), también llegaron alrededor de 500

campesinos y colonizadores de la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, cargados con tambores, banderas y altavoces que anunciaban su compromiso con la Marcha. En medio de la lluvia y el frío, los y las marchistas pasaron la noche en esta localidad. Bien temprano continuaron su caminata rumbo a Bulu Bulu, departamento de Cochabamba.

Las comunidades cochabambinas no dejaron duda de la solidaridad que las caracteriza. Camiones llenos de alimentos llegaban hasta los centros que albergaban a los marchistas que ya sumaban cerca del millar. Una brigada de la Cruz Roja asistía curando a cientos de hom-

bres y mujeres que tenían ampollas, heridas y calambres; los integrantes de este cuerpo de socorro, acompañaban a la marcha como centinelas, prestos para atender las emergencias que se multiplicaban a

medida que ingresaban al cálido valle cochabambino.

25 de mayo, Ivingarzama. Una comisión del gobierno compuesta por Luis Vásquez y Enrique Toro, presidentes de las Cámaras Legislativas y los ministros de Estado, Alberto Leytón, Ramiro Cavero y Tomasa Yarbui llegaron desde La Paz para iniciar el diálogo con el Comité de Coordinación de la Marcha.

Los representantes de indígenas y campesinos ratificaron su pedido de reformar la Constitución Política del Estado (CPE) mediante la Asamblea Constituyente con la participación de todos los sectores sociales y sin la mediación



de los partidos políticos. La comisión del gobierno aceptó la modificación de los artículos 230 a 233 para incorporar la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma a la CPE, pero la inclusión de la Constituyente solo podría hacerlo un nuevo Congreso Nacional, lo que implicaba tres periodos constitucionales para recién contar con la posibilidad de realizar la Asamblea Constituyente. En suma, las respuestas y las promesas del gobierno y del poder Legislativo no respondían a las demandas de los y las marchistas.

En cuanto al proyecto de Ley de Apoyo al Desarrollo Sostenible, la comisión gubernamental aseguraba que la ley era beneficiosa para las comunidades rurales y en cuanto al "Paquete Agrario" el gobierno negaba estar aprobando las normas que modificarían el reglamento de la ley INRA.

Las promesas del gobierno fueron rechazadas. Indígenas y campesinos, continuaron la marcha.

Desde diferentes puntos del país y del exterior llegaron numerosos pronunciamientos de apoyo a la IV Marcha de organizaciones sociales, indígenas y campesinas. Así hicieron conocer públicamente su respaldo el movimiento indígena del Ecuador, Perú, Guatemala y Venezuela.



De Chimoré a Villa Tunari, en pleno Chapare, un tramo tenso

Lunes 27 de mayo. La marcha aceleró el paso, recorrió 33 kilómetros hasta llegar a Chimoré. Durante el trayecto los camiones cargados con militares no dejaron de perturbar e incomodar a los y las marchistas... es que en días

anteriores varios camiones pasaban cerca de la marcha, la comisión de coordinación hizo la denuncia al presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Cochabamba quien envió una petición al Gobierno para que suspendiera el acoso militar.

La gente de la localidad de Chimoré salió a recibirlos con alimentos y agua. Gritaban a una sola voz ¡Viva la Marcha!, ¡Viva la Asamblea Constituyente!. Autoridades del municipio, de la Federación de Colonizadores del Trópico, la Federación de Mujeres de Chimoré, el Comité Cívico y otras organizaciones dieron la bienvenida al millar de marchistas.

Quedaron atrás 287 kilómetros recorridos desde Santa Cruz. Cada vez se suman más y más hombres y mujeres; a la medianoche de ese día, llegaron 33 personas más del pueblo Ayoreo. Al día siguiente la lluvia impidió que la marcha continuara. Niños, niñas, hombres y mujeres empezaron a enfermarse, pero la asis-

tencia de la Cruz Roja era oportuna. Los paramédicos detectaban numerosas personas resfriadas y disminuidas por el cambio de clima. A partir de entonces fue una preocupación constante el de contar con suficientes medicamentos, pero las donaciones no se hacían esperar.

Representantes del gobierno llegan a Chimore. Tomasa Yaruhí, ministra de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas y el Director Nacional del INRA, René Salomón, informan al Comité de Coordinación de la Marcha que el gobierno pide un cuarto intermedio para continuar el diálogo. Los marchistas al no escuchar respuestas claras de solución al conflicto, deciden continuar hasta la siguiente parada, Villa Tunari.

Diálogo con el gobierno

Jueves 30 de mayo, la IV Marcha llega a Villa Tunari, donde también contó con el apoyo solidario de los sectores sociales, Iglesia y autoridades. Por la mañana el Comité de Coordinación se reunió para preparar el diálogo con los representantes del gobierno. Entretanto se sumaron a la marcha delegados de la Coordinadora del Agua, de la Central Obrera Departamental y de la Mesa Técnica de Tierra de Cochabamba.

Por la tarde se instaló la mesa de diálogo con el gobierno bajo la mediación del presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. En la reunión estuvieron presentes los ministros José Luis Lupo, de la Presidencia; Alberto Leyton, de Trabajo; Tomasa Yaruhí de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas; por los marchistas estuvieron Marisol Solano y Bienvenido Sacu de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, Luis Alberto Rojas y Manuel Cuadiay de las organizaciones del Norte Amazónico, Sixto Bejarano y Miguel Peña de

los mojeños del Beni, Carlos Cuasase de los pueblos chiquitanos, Diego Marquina de los sindicatos campesinos de Santa Cruz, Florencio Orko del Movimiento Sin Tierra, María Esther Pérez de las mujeres campesinas, entre otros, representando a las más de 50 organizaciones de campesinos, indígenas, colonizadores, movimiento sin tierra, organizaciones de pequeños productores y mujeres campesinas.

La negociación con los representantes del gobierno, no fue fructífera. Esta vez, la mediación de los líderes sociales, la promesa de los parlamentarios y del gobierno, de convocar a un Congreso Extraordinario después de las elecciones generales no tuvo efecto, porque los campesinos e indígenas exigían lo concreto: la convocatoria de la Asamblea Constituyente con participación de todos los sectores sociales, sin la mediación de los partidos políticos.

Además, recordaron a la comisión gubernamental, que si el problema era la falta de una mayoría parlamentaria para aprobar la Constituyente, los y las marchistas ya habían enviado a todos los jefes de los partidos políticos una carta abierta donde demandaban una respuesta positiva para que se haga realidad este mecanismo participativo para reformar la Constitución Política del Estado. Ante esta iniciativa, el presidente de la APDH se comprometió a obtener las respuestas de los partidos políticos. El gobierno por su parte, esperaba tales respuestas, mientras la comisión negociadora de los marchistas anuncia la continuidad de la marcha.

Camino a Cochabamba

La marcha partió rumbo a la localidad de Cristal Mayu, mientras tanto y ante el fracaso de las negociaciones, en los medios noticiosos daban cuenta que el gobierno aseguraba que la movilización estaba dirigida y financiada desde

el exterior, en un intento por dividir y detener la marcha. Los y las marchistas continuaron con su camino dejando claro que la movilización estaba bajo el mando de las organizaciones campesinas e indígenas del país.

Desde Cristal Mayu hasta Sacaba fueron más de 60 kilómetros bajo lluvia y soportando bajas temperaturas. Localidades como Locotal y Colomi albergaron a los y las marchistas que mostraban claros síntomas de cansancio. La llegada a Sacaba fue reconfortante, pues ya faltaban solo 14 kilómetros para llegar a la ciudad de Cochabamba.

Veinticuatro días de caminata, al fin el ingreso a la ciudad de Cochabamba, el calor de la gente no sólo se expresaba en el apoyo solidario con alimentos y vituallas, sino en el aliento a los marchistas para continuar en la lucha por una Asamblea Constituyente. Así se plegaron otros sectores sociales, universitarios, la asociación de prejubilados, pequeños prestatarios, el movimiento de mujeres y otros.

El gobierno sorprendido pretendió detener la marcha en Cochabamba, desplazó una comisión numerosa junto a representantes del Parlamento. El diálogo, como los anteriores, no produjo ningún resultado. Ninguno pudo empeñar su palabra por la Asamblea Constituyente y la marcha debió continuar hacia la ciudad de La Paz.

Sica Sica y Ayo Ayo... rumbo a La Paz

Los marchistas dejaron la ciudad de Cochabamba con la firme intención de llegar hasta la sede de gobierno. Ahora el camino era cuesta arriba... la altura, el crudo invierno, el cansancio y las enfermedades eran los obstáculos a vencer. Nada de eso quebrantó la decisión de continuar con la travesía. La presencia de niños

y niñas, que acompañaban a sus padres y madres significó para muchos una fortaleza para continuar.

Paralelamente a Cochabamba iban llegando noticias de que la marcha del Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Kollasuyo CONAMAQ que había partido simultáneamente de diferentes comunidades el 22 de mayo, se dirigía directamente a Caracollo donde esperaban reunirse con la marcha que estaba llegando del Oriente, para luego continuar juntos hasta La Paz.

En efecto, en Caracollo la marcha se tomó impresionante. Allí los marchistas provenientes del Oriente se unieron a más de dos mil personas que llegaban desde Chuquisaca y Potosí, eran los hermanos campesinos del CONAMAQ.

13 y 14 de junio, Sica Sica y Ayo Ayo fueron sede de otros diálogos con el gobierno y parlamentarios, diálogos sordos y sin avances. Fue un diálogo que estuvo a punto de romperse y complicarlo todo por la actitud intransigente de los partidos políticos.

Por otro lado los y las marchistas manifestaron su descontento con el gobierno y parlamentarios por haber firmado un acuerdo con Marcial Fabricano, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB, que se encontraba en huelga de hambre en la ciudad de La Paz; este acuerdo fue desconocido por la Marcha.

La gran marcha con alrededor de 4.000 integrantes continuó su camino hasta Calamarca, 20 kilómetros recorridos a casi 4 mil metros de altura con un intenso frío. Los y las marchistas deciden descansar y retomar fuerzas para luego continuar, todos sabían que estaban cerca de la ciudad de La Paz. Hasta entonces los enfermos se multiplicaban y sus cuerpos empezaban a resentirse, pero la convicción pudo más.

37 días... un acuerdo nacional en la Sede de Gobierno

18 de junio, ciudad de El Alto, la marcha es recibida por centenares de personas que a su paso iban dando muestras de solidaridad con alimentos, vituallas y medicamentos necesarios para recuperar la quebrantada salud de hombres y mujeres. EL Comité de Coordinación decide descansar en esta ciudad, fue el último respiro antes de llegar a su destino.

19 de junio la gran Marcha Por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales llega a La Paz, fueron más de 4000 marchistas que caminaron bajo el sol, la lluvia y el intenso frío durante 37 días con un solo objetivo: que el gobierno y los parlamentarios atiendan sus tres demandas, especialmente la referida a la Asamblea Constituyente.

El último diálogo con el gobierno y Parlamento concluyó a la media noche del 21 de junio con un acuerdo nacional en el que se comprometieron a incorporar la Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna, el archivo definitivo de la Ley de Apoyo al Desarrollo Sostenible, del Paquete Agrario y de todas las otras normas que afectaban a indígenas y campesinos.

Para efectivizar este acuerdo, instalaron comisiones de trabajo para consensuar el texto de la ley de Necesidad de Reforma a la Constitución y de las otras normas. Indígenas, campesinos y campesinas retornaron a sus lugares de origen satisfechos, pero alertas a cualquier llamado.

3 de julio, el Parlamento sesionó, anuló las normas del paquete agrario, pero las bancadas parlamentarias no encontraron consenso para aprobar la Asamblea Constituyente. Sus intereses político-partidarios fueron más fuertes que su compromiso con Bolivia. El debate y análisis de la Asamblea Constituyente quedaba en manos del próximo parlamento, luego de las elecciones generales cuyos resultados conformarían el nuevo gobierno y un nuevo parlamento.

Las 50 organizaciones que llevaron adelante la cuarta marcha multisectorial, no lograron su objetivo principal, pero lograron poner en la agenda pública la Asamblea Constituyente, lograron también la unidad de organizaciones campesinas e indígenas de Tierras Bajas, Valles y Tierras Altas y además, esta movilización sirvió, entre otras cosas, para el surgimiento de nuevos líderes, hombres y mujeres, que asumieron el compromiso de continuar con la lucha por lograr la Asamblea Constituyente.

Una lucha, que a casi dos años del sacrificio, parece recoger sus frutos. Los hechos de octubre que desembocaron en la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia de la República y la sucesión constitucional de Carlos Mesa prometiendo la Asamblea Constituyente, hacen crecer las esperanzas y los sueños de miles y miles de campesinos e indígenas que un día decidieron emprender la marcha más larga de la historia del movimiento indígena-campesino, por construir un país más democrático, con justicia social y equidad económica.

Las notas y entrevistas que recopilamos en este libro, reflejan parte del cotidiano camino andado por campesinos indígenas y CIPCA en los últimos tres años (2001-2003), en diferentes ecosistemas, contextos y circunstancias propias de las áreas de cobertura del trabajo institucional. En ese sentido, conforman una aproximación representativa al conocimiento de la rica diversidad del mundo rural boliviano. Economía, tierra-territorio y organización campesina indígena son los principales temas abordados.

Leila Cortéz P., comunicadora social, con especialidad en derechos humanos y género, actualmente es responsable del programa de comunicación de CIPCA Santa Cruz.

Eduardo Mendoza F., sociólogo, trabajó en diferentes programas con el pueblo guaraní-chingano, fue director de CIPCA Cordillera, actualmente ejerce la dirección de CIPCA Santa Cruz.

